



*Cuadernos
de Discusión*

Nº 1

LA GUERRA Y LAS CIUDADES



**UNA MIRADA DESDE
BARRANCABERMEJA,
MEDELLÍN, BOGOTÁ Y CALI
1998-2005**

Por: Sandra Miled Hincapié

25 años **IPC**
de la Corporación de Promoción Popular

Comprometidos con la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos



**Cuadernos
de Discusión**

Nº 1

LA GUERRA Y LAS CIUDADES

**UNA MIRADA DESDE
BARRANCABERMEJA,
MEDELLÍN, BOGOTÁ Y CALI
1998-2005**

Sandra Miled Hincapié Jiménez

25 años  **IPC**
de la Corporación de Promoción Popular

Comprometidos con la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos

Primera Edición

Septiembre de 2006

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN -IPC

Carrera 45 D N° 60-16

PBX: (574) 284 90 35 / Fax: (574) 254 37 44 / A.A. 9690

Correo electrónico: ipc@ipc.org.co

Página Web: www.ipc.org.co

Medellín – Colombia

Corrección de estilo y redacción:

César Augusto Muñoz Restrepo - Comunicador Social/Periodista

Diseño portada:

Luis Alfonso Orozco D.

Impresión:

AltoVuelo Comunicaciones

303.62

H659 Hincapié Jiménez, Sandra Miled

La guerra y las ciudades : una mirada desde Barrancabermeja, Medellín, Bogotá y Cali 1998-2005 / Sandra Miled Hincapié Jiménez. — Medellín : Instituto Popular de Capacitación, IPC, 2006.

__ p. : il. gráficos (Serie Documentos de Discusión; no. 1)

ISSN 1909-521X

1. GUERRA URBANA. 2. CONFLICTOS POLÍTICOS. 3. CONFLICTOS URBANOS. 4. BARRANCABERMEJA (COLOMBIA). 5. MEDELLIN (COLOMBIA). 6. BOGOTA (COLOMBIA). 8. CALI (COLOMBIA). I. Tit. Serie

Se puede retomar cualquier texto o fragmento de este Cuaderno de Discusión, siempre y cuando se cite al autor o autora y al Instituto Popular de Capacitación - IPC.



INTRODUCCIÓN

El objetivo general de este documento de discusión es caracterizar el conflicto político armado en ciudades como Barrancabermeja, Medellín, Bogotá y Cali, centrándose en dinámicas analizadas desde 1998 hasta el mes de agosto de 2005. Para el efecto, se parte de un enfoque general del conflicto político armado en Colombia; luego, se ubican en específico las ciudades objeto de análisis, tratando de dilucidar la importancia estratégica diferencial que cada una de ellas tiene para los actores en conflicto.

La escenificación de la guerra en la ciudad se diferencia del conflicto urbano y de la violencia en general, porque responde a dinámicas de escalamiento o desescalamiento del conflicto político armado que vive el país, en el cual, las ciudades cumplen múltiples papeles por ser escenarios de aglomeración, de concentración de las decisiones políticas económicas y sociales más importantes. La ciudad es el escenario por excelencia para el desenvolvimiento del estadio último de la guerra, cuando los ejércitos enfrentados marchan del campo a la ciudad para su última confrontación. Sin embargo, nuestras ciudades, en diferentes momentos, en los últimos 25 años, han vivido períodos de escalamiento localizado en algunos barrios -sobre todo en barrios periféricos-, sin que ello signifique que hemos presenciado la urbanización del conflicto como muchos analistas han pretendido señalarlo, ya que la nuestra sigue siendo una guerra eminentemente rural.

En este contexto, el Ejército Popular de Liberación -EPL, siguió una doctrina fiel a los presupuestos del maoísmo, y en consecuencia trabajó en la construcción del partido -el PC-ML-, el ejército, y el frente -papel que cumplieron las "Juntas Patrióticas"- . Sin embargo, tanto el partido como los frentes terminaron subordinados a las dinámicas y objetivos del ejército. En esa misma lógica, desde sus inicios, el EPL conformó la Red Urbana de Mujeres (la RUM), pero ésta solo fue encargada de cumplir funciones auxiliares, como campañas de solidaridad, con el fin de recolectar insumos básicos para los combatientes. Así lo expresaba una circular del año 1969:

Queremos terminar esta circular con una felicitación a todas las compañeras por el avance logrado en la integración de los comités de la Red Urbana de Mujeres que son organismos del Frente Patriótico de Liberación. EPL. (...) Estos organismos deben impulsarse al calor de la lucha y alrededor de tareas concretas; no deben permanecer inactivos, siempre tendremos entre manos campañas de solidaridad inaplazable y urgente.¹

¹ Circular del EPL. Citado por: CALVO, Fabiola. "Colombia: EPL, una historia armada". Madrid. Vosa. 1997. Pág. 62.





Durante la década del setenta, en los diferentes grupos guerrilleros se presentaron fuertes contradicciones con pequeños sectores que veían la necesidad de desarrollar un trabajo más político, ligado a las organizaciones sociales en las ciudades; múltiples disidencias -sobre todo en el EPL- llevaron al nacimiento de pequeños grupos que más adelante darían vida al Nuevo MUR-ML, que después se convertiría en MIR-Patria Libre² y el PRT (*ver Anexo I*). Pero sin duda, quien puso “el dedo en la llaga” por la incapacidad y la necesidad de una propuesta insurgente urbana fue el Movimiento 19 de abril (M-19).

Sintonizados con una visión mucho más urbana y moderna de la acción de Izquierda democrática, el M-19 buscó mostrarse como una alternativa, no solo frente al poder de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador)³, sino también en relación con la Izquierda oficial, mucho más conectados con las necesidades y el sentimiento de las clases populares. Por ello, lo que siempre fue considerado como un “robo al pueblo”, aquella fecha en que la presidencia de la república es “arrebataada” a su “legal” ganador, el general Gustavo Rojas Pinilla, es escogida como símbolo:

Queríamos que el nombre significara algo para el país, que no fueran las siglas tradicionales PCC, y cosas de ese estilo, llenas de asteriscos, de guiones, de paréntesis. El 19 de abril fue un día de derrota para el pueblo, cuando debió ser de triunfo, era el problema de saber que se necesita el poder militar para imponer el poder político: así lo había sentido la inmensa mayoría del país.⁴

El M-19 protagonizó desde su primera aparición pública⁵ espectaculares actos en las ciudades que le dieron renombre nacional, y con la toma a la embajada de la República Dominicana, ese protagonismo tomó dimensión internacional. Fueron los primeros -y hoy podríamos decir que los paramilitares aprendieron muy bien la lección, a diferencia de las FARC o el ELN- que visionaron la importancia de los medios de comunicación y de la opinión pública, y que supieron sacar provecho de ello. De hecho, se puede afirmar que buena parte del poder que llegó a ostentar el M-19, no estuvo precisamente sustentado en un glorioso ejército, sino en la legitimidad ganada en los espectaculares actos que protagonizó, la dimensión dada por los medios de comunicación y de los cuales, el M-19, sacó sus mejores rendimientos.⁶

² El MIR-Patria Libre se unió al ELN en 1987 conformando el UC-ELN. Esta unión solo duró cuatro años, pues el sector proveniente del MIR-Patria Libre, junto a algunos viejos “elenos” (miembros del ELN), decidieron buscar acercamientos con el gobierno para una posible negociación; ante la negativa del sector militarista del ELN, se dividen y conforman la Corriente de Renovación Socialista -CRS, quien inició negociaciones con el gobierno del Presidente César Gaviria y se desmovilizaron el 9 de abril de 1994.

³ Los cuales detentaron un poder excluyente y piramidal gracias al acuerdo consociacional en el cual se sustentó el período del Frente Nacional. Se entiende por consociacionalismo, una acomodación integral entre las élites en una sociedad de antagonismos, es decir, divididas y políticamente relevantes. Al respecto véase: HARTLYN, Jonathan. La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá. CES, Uniandes. Tercer Mundo. 1993.

⁴ Israel Santamaría. Oficial Superior del M-19. En: BEHAR, Olga. “Las guerras de la paz. Bogotá”. Planeta. 1987. Pág. 82.

⁵ El 17 de enero de 1974 se dio el robo de la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar, y en Bogotá, ese mismo día entraron al Concejo de Bogotá pintando sus paredes y repartieron volantes. Al respecto, recordaba Álvaro Fayad: “Siempre pensamos que lo del Concejo tendría mayor resonancia, pero resultó ser lo de la espada. Ahí, dice Bateman: “parece que se nos fue la mano. Ahora sí ya nos jodimos, porque hay que estar a la altura de la cuestión Bolívariana.” Álvaro Fayad. En: BEHAR, Olga. Op cit. Pág.141.

⁶ La toma de la embajada fue sin lugar a dudas el golpe de suerte del M-19, una operación que fue pensada para liberar algunos presos terminó por convertirse en la principal “vitrina al mundo” frente a las violaciones sistemáticas





Bogotá, Cali y Medellín, por ejemplo, vivieron la presencia militar del M-19. A partir de allí, la ciudades tomaron otra dimensión para los grupos guerrilleros, que no pudieron seguir desconociendo la enorme debilidad de su proyecto político en las ciudades y la poca o nula articulación de su trabajo militar en las áreas rurales con las organizaciones sociales y políticas en la ciudad.

El partido Comunista Colombiano (PCC-ML) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), vivieron una grave crisis interna por la conformación de disidencias, entre ellas: Liga Marxista Leninista "Liga M-L", la Tendencia Marxista Leninista "Tendencia M-L" y la Línea Proletaria. Cada una, a su manera, criticó al Comité Central del PCC M-L por dar mayor prioridad a la lucha armada descuidando la lucha política; además consideraron que no tenía claridad sobre cómo articular sus intereses con los movimientos y organizaciones sociales en el área urbana.

La radicalización de las posiciones y las dificultades para tener espacios de concertación y unidad ocasionaron las múltiples fragmentaciones que, por un tiempo largo, mantuvieron a grupos pequeños disgregados y con poca capacidad de incidencia. El grupo de *La Tendencia*, por ejemplo, al ver su poca capacidad para la lucha armada y la falta de coordinación, decidió que sus miembros volvieran a los grupos y movimientos sociales de los cuales habían hecho parte.

La respuesta inicial de las agrupaciones guerrilleras a las críticas de sus militantes, fue la de perseguir y descalificar a aquellos que consideraban traidores y que intentaban desnaturalizar la lucha armada, especialmente el ELN. Poco tiempo después, se redimensiona la importancia del trabajo en la ciudad y el copamiento de organizaciones sociales, en medio de una seria crisis militar (por los golpes dados por el Ejército, como la "Operación Anorí" al ELN⁷), y por las múltiples disidencias y fraccionamientos en su interior -particularmente en el EPL.

El trabajo urbano se había desarrollado hasta ese momento solo como apoyo marginal del trabajo llevado a cabo en el campo (rural). Esa estrecha visión maoísta sufrió serios cuestionamientos durante la segunda mitad de la década del setenta, y desde ese momento, se replantean nuevos objetivos estratégicos: el campesinado se desmitifica, se busca estrechar lazos con los sindicatos, con el movimiento obrero, crear bases urbanas importantes y proyectarse en diferentes ciudades del país.

En diferentes épocas, las redes urbanas de los grupos guerrilleros se han desplegado por las principales ciudades del país. Estas redes operan fundamentalmente con el objeto de cumplir una serie de funciones estratégicas: primero, servir para el reclutamiento, no sólo de posibles combatientes en las zonas rurales, sino también para el crecimiento en las zonas urbanas, por medio de la vinculación en diversos frentes de apoyo; segundo, cumplen una labor de información clave como táctica de inteligencia militar; tercero, ubican y definen posibles blancos de operativos para la consecución de recursos económicos (el secuestro es un ejemplo claro); cuarto, sirven para la coordinación compra y distribución del aprovisionamiento y abastecimiento de diverso tipo (uniformes, armas, etc.); quinto, cumplen una tarea de encubrimiento, asistencia y camuflaje en la ciudad de combatientes y líderes militares rurales; sexto, ayudan en la coordinación y ejecución de acciones militares o atentados específicos en la ciudad.

a los derechos humanos protagonizadas por el gobierno del presidente Turbay Ayala en cabeza del Ejército Nacional. Al respecto, ver: PABÓN PABÓN, Rosemberg. "Así nos tomamos la embajada". Bogotá. Planeta.1985.

⁷ La "Operación Anorí" del Ejército Nacional, prácticamente acabó la estructura militar del ELN, la cual, finalizando la década del setenta, contaba con aproximadamente cerca de 80 combatientes rurales. Al respecto, ver: PIZARRO LEONGOMEZ, Eduardo. La Insurgencia Armada: Raíces y Perspectivas. En: "Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80". Bogotá. IEPRI-Tercer Mundo Editores. 1990. Pág. 427.





Por otro lado, la Derecha, en su proyecto paramilitar, encuentra antecedentes en diversos períodos históricos de la historia política de Colombia, uno de ellos, los denominados “pájaros”, en la guerra civil de la primera mitad del siglo XX⁸. Más recientemente, ligadas a su configuración actual, es importante destacar las acciones realizadas en los centros urbanos en el decenio del ochenta, en lo que se denominó por la opinión pública como la “guerra sucia”, cuyo objetivo específico fue el asesinato de líderes políticos de Izquierda, sindicalistas, políticos progresistas de los partidos tradicionales, líderes de organizaciones sociales, jueces, defensores de derechos humanos y el exterminio del partido político Unión Patriótica, entre otros. En esa misma década, el paramilitarismo de derecha inició el “proyecto piloto” de la zona del Magdalena Medio, sin embargo, ese escenario rural no fue relacionado directamente con la “guerra sucia” como expresión urbana del proyecto de Derecha.

Durante los últimos ocho años, el escalamiento de la guerra en las ciudades se corresponde con el crecimiento y copamiento del proyecto paramilitar, en disputa con las milicias, redes y comandos urbanos de las diferentes guerrillas; pero además se relaciona con el copamiento y monopolio de mercados ilegales y redes mafiosas. En esa perspectiva, este trabajo examina los intereses en juego y las alianzas estratégicas que varían de acuerdo a las diferentes ciudades, ya que ellas, en su particularidad, tienen un lugar determinado en el escenario de la guerra nacional, que se debate o encuentra eco en los múltiples intereses locales y regionales.

Es importante señalar, que se entiende al paramilitarismo como un proceso complejo que involucra intereses militares, políticos, económicos y sociales. Cuando ello se niega, se le hace un favor a cierta élite política y económica que hoy quiere “desembarazarse” de la ligazón indisoluble que existe entre la instauración de un orden y la forma en que este llegó a consolidarse. Aquellos analistas que sólo ven en el paramilitarismo a “señores de la guerra” o típicos “mercenarios” no sólo terminan por reducir el problema a un asunto casi delincencial, sino que también, al perder los matices, oscurecen el panorama explicativo que hace del paramilitarismo un fenómeno complejo, que responde a un proyecto nacional, pero que encuentra múltiples tonalidades de acuerdo con los intereses regionales en juego, la diversidad de sus aliados, los niveles de mando y las consecuencias inesperadas que se presentan por las interacciones estratégicas de sus actores.

En efecto, aunque en la guerra existan unas lógicas que obedecen a dinámicas y proyectos nacionales, es importante observar como en sus expresiones regionales encuentran manifestaciones diversas -que en ocasiones podrían parecer contradictorias-, producto de la relación con los intereses de élites económicas y políticas locales y regionales. Lo anterior, explica el escalamiento y desescalamiento localizado en determinadas áreas geoestratégicas, sus relaciones con las mafias, los sectores políticos y económicos, y las interacciones estratégicas diferenciadas entre actores legales e ilegales según los intereses en juego de cada zona.



⁸ SÁNCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*. Bogotá. El Áncora Editores.



CAPITULO I

LA DÉCADA DEL NOVENTA: ESCALAMIENTO DE LA GUERRA EN COLOMBIA

1. CONTEXTO DEL PAÍS

La década del noventa iniciaba un “capítulo de esperanzas” que abría la puerta a un escenario prometedor de apertura democrática en Colombia, lo que se cimentó en varios hechos: primero, el ambiente preconstituyente que dio origen a la progresista Carta Constitucional de 1991; segundo, el inicio de los diálogos y posterior desmovilización de cinco grupos guerrilleros (M-19, PRT, EPL, Quintín Lame y CRS); tercero, finalizando el período presidencial de Virgilio Barco, habían cambiado significativamente las condiciones de la relación entre el paramilitarismo, el Estado y la opinión pública, especialmente de las élites.

En este marco, la derogatoria de la Ley 48 de 1968 que daba carta libre al Ejército para la creación de grupos de autodefensa y el Decreto 1194 que penalizó la creación de los mismos, fue el inicio del cambio de actitud del gobierno frente al accionar paramilitar y de las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, atribuido al llamado “Cartel de Medellín”, contribuyó a deslegitimar el accionar de los grupos paramilitares, perdiendo parte del apoyo en algunos círculos del gobierno.

En 1989, esa misma coyuntura hace que giren los discursos, tanto de militares como de paramilitares: los primeros, afirmaron estar al margen del accionar paramilitar y rechazaron cualquier imputación en tal sentido; los segundos, reclamaron un estatus político y se declararon, así mismos rebeldes defendiendo los intereses de la nación, queriendo con ello estar en igualdad de condiciones con los grupos guerrilleros en procesos de negociación. Este giro responde también a las masacres que se hicieron extensivas a los propios empleados estatales; el 18 de enero de 1989 fueron asesinados en la Rochela (Santander), doce empleados judiciales encargados de investigar las masacres paramilitares⁹.

⁹ La masacre de la Rochela se efectuó a poca distancia del Batallón Bomboná del Ejército Nacional. En las investigaciones se acusó formalmente a los comandantes del Ejército y la Policía, no sólo por no reaccionar al ataque sino también por auxiliar a sus perpetradores y amenazar la población del municipio. Al respecto ver: Periódico El Espectador, febrero 14 de 1989. Ver: Revista Cien Días, N° 5. CINEP. Pág. 13





La guerra al narcoterrorismo decretada por el gobierno Barco en agosto de 1989, puso en evidencia la inconsistencia de la política de seguridad interna, pues el enemigo a quien el Ejército debía combatir había participado con él en la lucha antiterrorista y continuaba generando relaciones de solidaridad con miembros de las Fuerzas Armadas.¹⁰

Todas estas circunstancias, aún con las contradicciones anteriores, marcaron un panorama promisorio para la década que se iniciaba. Sin embargo, la realidad fue bien diferente, el escalamiento continuado de la guerra se dio en medio de coyunturas particulares y configuraron un escenario más propicio para la confrontación que para la reconciliación.

Los ejércitos se enfrentaron en una deletérea lucha que dejó en una sola década más viudas, huérfanos y desplazados que los que se habían producido en medio siglo. Después de firmados los acuerdos de desmovilización de los ya mencionados cinco grupos guerrilleros, se pensó que las posibilidades de paz en Colombia estaban cerca; por el contrario, el escenario de confrontación en la década del noventa se agudizó en forma considerable; el escalamiento del conflicto armado llegó a puntos tan críticos que muchos analistas han considerado que en Colombia se vive una guerra civil¹¹. El desenvolvimiento de la guerra en el decenio del noventa ha llevado a la transformación de los ejércitos y a niveles de confrontación en diferentes planos dada su continuación, escalamiento y degradación.

2. “CASA VERDE” Y EL INICIO DE LA CONSTITUYENTE

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente inauguró la década del noventa con un ambiente de esperanza y de perspectivas optimistas frente al futuro político colombiano. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1990, día de la elección de los constituyentes se realizó el ataque a “Casa Verde”, sede del Secretariado mayor de las FARC. Así, el gobierno de César Gaviria, con esta acción marcó el inicio de un nuevo ciclo de la guerra en Colombia. En ese sentido lo expresaron las FARC en un comunicado a la opinión pública el mismo día del ataque:

Primero: Informamos a la opinión pública que hoy 9 de diciembre, a partir de las 07 horas, el Ejército oficial dio inicio a un operativo militar a gran escala contra la sede central del Secretariado Nacional de las FARC en La Uribe.

Segundo: Entendemos que el Gobierno del doctor Gaviria da por cancelada la posibilidad de solución negociada y que a él, y sólo a él, corresponde asumir las responsabilidades que de esta decisión se deriven.

Tercero: Este gobierno dilapidó la oportunidad que le ofreció el país de hacer de la Asamblea Nacional Constituyente un escenario de paz. Con los sectarismos excluyentes generó la más alta abstención de los últimos años y con su intolerancia logró la reiniciación de una guerra de imprevisibles consecuencias para el país.¹²

¹⁰ REYES POSADA, Alejandro. Paramilitares en Colombia: Contexto, Aliados y Consecuencias. Op cit. Pág. 426.

¹¹ RAMÍREZ TOBÓN, William. “¿Guerra Civil en Colombia?”. En: Análisis Político No 42. Mayo-Agosto de 2002.

¹² “Se extinguió la posibilidad de una solución negociada, dicen las FARC”. Periódico EL TIEMPO. 11 de diciembre de 1990. Pág. 1E.





El ataque militar muestra la simultaneidad de dos procesos diferenciados, mientras el gobierno adelantaba exitosas negociaciones de paz con las ya enunciadas organizaciones guerrilleras, por otro lado, preparaba la guerra para derrotar a las demás organizaciones subversivas aún lazadas en armas. Sin embargo, haciendo un balance final, el ataque a “Casa Verde” fue un fracaso militar para el gobierno, pues no consiguió la captura o la baja de algún comandante guerrillero, y por el contrario, fueron numerosas las bajas de miembros del Ejército y los helicópteros puestos fuera de funcionamiento. Los ataques de las FARC aumentaron, y desde ese momento, el comando central de las FARC que había permanecido en “Casa Verde” se dispersó en los frentes creados en la última década, replanteando la estrategia militar y retomando los lineamientos de la Séptima Conferencia en 1982.¹³

Las FARC, cuyos núcleos iniciales de expansión nacieron en zonas de colonización, sufrieron modificaciones importantes en la década del ochenta, cuando empezaron a inscribirse en zonas que experimentaron transformaciones ganaderas (Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Córdoba), o de agricultura comercial (zona bananera de Urabá, zona productora de palma africana en Santander y sur del Cesar), e incluso en zonas de explotación petrolera (Magdalena Medio, Sarare, y Putumayo) y de oro (Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar). Así mismo, se fueron situando en áreas fronterizas (Sarare, Norte de Santander, Putumayo, Urabá) y en zonas costeras (Sierra Nevada, Urabá, occidente del Valle), a partir de su vinculación con el contrabando.¹⁴

Por otro lado, el ELN aumentó sus ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas. El cese al fuego, que fue condición para la negociación con los demás grupos guerrilleros, y por más que el gobierno central lo reclamara, no se consideró como una posibilidad ni para las FARC ni para el ELN. Aún así, los acercamientos continuaron en 1991 mientras la Asamblea Nacional Constituyente desarrollaba sus sesiones; los diálogos se realizaron, primero en Caracas (Venezuela), y luego en Tlaxcala (México); sin embargo, en ninguna de las reuniones se consiguió un acercamiento real de las partes, por el contrario, los mensajes contradictorios y las desavenencias en la mesa de negociación fueron una constante. Las propuestas del gobierno eran radicalmente opuestas a las de las guerrillas, pues a diferencia de las negociaciones con los demás grupos guerrilleros, las FARC y el ELN exigían reformas estructurales del régimen político. Uno de los puntos más importantes de las FARC era -y sigue siendo- la necesidad de una reforma agraria profunda, a lo cual el Gobierno Nacional respondió con una negativa.

¹³ En la Séptima Conferencia de la guerrilla de las FARC en 1982 se planteó una transformación de la forma en que hasta ese momento se había concebido la lucha armada. En ella, se declara como objetivo principal, la toma del poder por medio de un ejército revolucionario, es decir, el factor militar se concibe como la principal herramienta de acción opositora y con ello la planificación estratégica y táctica, encuentran un desarrollo importante en esa dirección. Desde ese momento las FARC pasan a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP. La expansión militar, que hasta ese momento se había dado más por el azar y la contingencia, se planifica como objetivo inmediato, siendo la cordillera oriental centro de despliegue y copamiento de los diversos frentes que pasarían a ser más del doble al terminar la década de los ochenta. Cada frente contaría con un cuadro político y se aprobó también el Programa Agrario de los Guerrilleros y el trabajo político de apoyo a las diversas organizaciones populares y campesinas de cualquier tipo. Al respecto ver: RANGEL, Alfredo. Las Farc-Ep: una mirada actual. En: “Reconocer la guerra para construir la paz”. Malcom Deas, María Victoria Llorente (Comp). Santa Fe de Bogotá. Cerec. UNIANDES. Editorial Norma. 1999. Pág. 25.

¹⁴ ECHANDÍA, Camilo. “Expansión territorial de las guerrillas colombianas.” En: Reconocer la guerra para construir la paz. Op cit. Pág. 106





El panorama nacional, fruto de una nueva Constitución Política, el llamado a elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República, las esperanzas en una reforma política y la apertura del sistema político, unido al contexto internacional con la caída del *Muro de Berlín* en 1989, y la disolución de la Unión Soviética en 1991, hicieron ver el ideal revolucionario como un anacronismo que, tarde o temprano, tendría que ceder¹⁵.

La guerrilla de las FARC, lejos de corresponderse con la percepción generalizada sobre la buena marcha de la política y las perspectivas de una paz futura, dirigieron la relocalización de numerosos frentes de combate; el escepticismo por los cambios introducidos en la Constitución de 1991 fueron una constante en los comunicados de los grupos guerrilleros que reclamaban reformas económicas profundas como condición para la entrega de armas.

Como se dijo antes, primero en Caracas y más tarde en Tlaxcala, fueron escenarios en los cuales se le rindió un homenaje a la parodia de los diálogos, fueron encuentros que no condujeron a ningún lado, y solo dejaron un sabor amargo en la opinión pública. Las políticas económicas del gobierno de Gaviria también fueron un obstáculo infranqueable para los diálogos; su política de liberalización del mercado y el manejo macroeconómico no sólo contrariaban los principios del Estado Social propuesto en la Constitución de 1991, sino que también hacía imposible cualquier acuerdo con las guerrillas. Así lo expresó Alfonso Cano, del secretariado de las FARC, en 1992: "*La apertura económica es sencillamente un acto de guerra contra las mayorías nacionales*"¹⁶.

Después de comunicados y encuentros fallidos se dio un receso a las conversaciones el 4 de mayo de 1992, una pausa que sería el fin de las conversaciones con el gobierno de César Gaviria. Los ataques se multiplicaron, el ELN fue recuperándose paulatinamente del descalabro militar en que se encontraba después de la Operación Anorí, los cobros extorsivos a empresas petroleras radicadas en la zona fueron vitales para la recomposición y el crecimiento de este grupo guerrillero¹⁷.

La expansión militar de las guerrillas del ELN y especialmente de las FARC fueron una constante durante el cuatrienio de César Gaviria; las posibilidades de pasar de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, se constituyó en un objetivo claro para las FARC; la creación de una escuela militar fue la antesala de ataques que les representaron demostrar su poder en el sur del país; la conformación de nuevos frentes y comandos conjuntos fueron las estrategias diseñadas en la Conferencia de 1993, que abrió las puertas al nuevo sendero estratégico de la guerrilla más grande en Colombia¹⁸.

La expansión guerrillera y el copamiento de la política local fue el principal objetivo estratégico insurgente. El manejo de recursos municipales, en lo que se ha denominado "clientelismo armado"¹⁹, significó una disputa con los poderes locales, y en ella se vieron enfrentados los reinsertados de los grupos guerrilleros que intentaron hacerse a un espacio en la política local de sus antiguas zonas de influencia.

¹⁵ Así lo expresó el ex presidente César Gaviria en una alocución presidencial donde se refirió al anacronismo de las guerrillas colombianas el "que no vieron por televisión el fin del comunismo".

¹⁶ RAMÍREZ TOBÓN, William. "¿Alguien quiere volver a Tlaxcala?" En: Análisis Político No 37. Mayo-Agosto de 1992.

¹⁷ PEÑATE, Andrés. "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado." En: María Victoria Llorente. Malcom Deas (comp.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá. CEREC. 1999. Pág. 53-98

¹⁸ PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. Una democracia asediada.

¹⁹ PEÑATE, Andrés. Op cit.





El caso más dramático se vivió en Córdoba, donde el EPL, convertido -bajo la misma sigla- en el movimiento político *Esperanza Paz y Libertad*, se disputó con las FARC la influencia política en los sindicatos y los barrios populares; las FARC, a través de sus milicias bolivarianas, copaban los espacios locales, asesinando y presionando los reinsertados y a sus simpatizantes, la respuesta de estos últimos fue la creación de Comandos Populares que se enfrentaron con las FARC, protagonizando un escalamiento del conflicto en esta zona del país (una de las masacres más recordadas fue el ataque de las FARC a la finca *La Chinita* en la cual murieron 35 simpatizantes de los reinsertados, como respuesta a una masacre perpetrada por los Comandos Populares en 1993 contra militantes de la Unión Patriótica - UP -considerado el brazo político de las FARC-).²⁰

Para 1994, los ataques de las FARC se habían aumentado en forma considerable; crearon nuevos frentes armados en la zona bananera de Urabá y en la zona del Eje Cafetero, en aras de copar los espacios dejados por las guerrillas reinsertadas, especialmente las del EPL. Así mismo, los departamentos de Caquetá, Huila, Casanare, Tolima y Guajira fueron escenarios de actuación de nuevos frentes, y en las principales ciudades del país fueron fortalecidas las milicias²¹. Finalizando el mandato del presidente César Gaviria, el país vivió una arremetida sin precedentes contra sus Fuerzas Militares; hostigamientos y emboscadas fueron una constante y superaron en número e impacto las estadísticas de años anteriores.

3. CRISIS POLÍTICA Y ESCALAMIENTO CONTINUADO

En 1994 se inauguró el promisorio cuatrenio del presidente Ernesto Samper, el cual, en el marco de un programa de gobierno con un fuerte contenido de política social, prometió una reversa en la liberalización de la economía impuesta en el mandato presidencial anterior de Cesar Gaviria. En los primeros meses de dicho gobierno disminuyeron los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. La propuesta de una clara disposición para el inicio de los diálogos alimentaron la esperanza de un acercamiento concreto hacia la paz.

Sin embargo, el escándalo y las investigaciones por la entrada de dineros del narcotráfico, específicamente del Cartel de Cali, a la campaña del presidente Ernesto Samper, generó desde entonces una fuerte oposición al gobierno nacional desde diversos sectores -medios de comunicación, presión internacional de los Estados Unidos, el Partido Conservador, etc.-. Dicha oposición, puso en vilo las posibilidades de gobernabilidad, y con ello, se dificultaron las probabilidades, no sólo de llevar a cabo su plan de gobierno, sino también, de ocuparse del tema de la insurgencia y en general del conflicto armado, ya que tuvo que dedicarse, casi todo su cuatrenio, a cuidar más su poder y defenderse de las acusaciones del tan citado "Proceso 8.000"²².

²⁰ROMERO, Mauricio. Paramilitarismo y autodefensa. Op. cit. Pág. 178

²¹ ECHANDÍA, Camilo. Expansión territorial de las guerrillas colombianas. En: María Victoria Llorente. Malcom Deas (comp.). "Reconocer la guerra para construir la paz". Bogotá. CEREC. 1999. Pág. 108.

²² En 1995, después de ser nombrado como Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdívieso, fue reabierto el caso sobre los dineros del narcotráfico en la campaña anterior, y al proceso se le dio el número 8.000, desde entonces fue registrado este caso por la opinión pública con el nombre del "proceso 8.000".





En este marco, la certificación condicional a Colombia por parte de los Estados Unidos²³, fue un duro golpe de opinión para el gobierno de Samper, y puso sobre el tapete un tema que paulatinamente se convirtió en el centro de la política internacional y en uno de los ejes sobre los cuales se ha desenvuelto buena parte de las discusiones sobre la guerra en Colombia: el narcotráfico. El problema de las drogas -si se tiene en cuenta la desaparición del fantasma del comunismo- se convirtió en uno de los principales enemigos internacionales, -como lo es ahora también el terrorismo-, y de ese modo, un problema doméstico adquirió connotaciones cada vez mayores y profundizó la ingerencia externa -sobre todo la norteamericana- en el ámbito político nacional²⁴.

El Congreso de la República adelantó un debate para decidir el llamado a juicio político a Samper, cuyo resultado, fue la práctica absolución del entonces presidente; las continuas denuncias por las cuotas clientelares con el beneplácito del Ejecutivo frente a los congresistas aliados, la inclusión dentro de las investigaciones del entonces Procurador General de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez, y del Contralor General, David Turbay, dieron vuelta atrás a las expectativas que se habían creado hacia una reforma política anticorrupción después de la Constitución de 1991, y aumentaron la situación de incertidumbre generalizada y de desconfianza frente a la clase política²⁵.

Paralelamente, el conflicto armado presentaba un escalamiento sin precedentes; uno de los casos de confrontación más importantes se registró en el norte del país, donde la tradicional influencia que el EPL había tenido en el sindicato bananero, en la zona de Urabá y el Departamento de Córdoba, fue el centro de la disputa con las FARC, quienes trataron de copar los espacios que había dejado la guerrilla ya desmovilizada. Los reinsertados del EPL, interesados en la política local, empezaron a disputar a la Unión Patriótica, la representación de los sectores populares de la zona²⁶. El enfrentamiento empezó a cobrar víctimas. Así, las FARC, interesadas en copar los espacios territoriales que había dejado el desmovilizado grupo guerrillero EPL, y también con el objeto de influir en la política local, asesinaron líderes y seguidores del movimiento político Esperanza Paz y Libertad. Como respuesta ante los asesinatos, los reinsertados conformaron milicias con el nombre de “Comandos Populares” que se enfrentaron a las FARC y a los líderes de la Unión Patriótica.

Ante la expansión de las FARC, la reacción inmediata de los ganaderos de Córdoba no se hizo esperar, y al mando de los hermanos Castaño, reorganizaron el ejército paramilitar y, junto a los ganaderos de la región, disputaron a las FARC el control territorial de Córdoba. En 1994, se llevó a cabo la Primera

²³ La certificación es un procedimiento central de la política exterior de los Estados Unidos. Es un mecanismo por medio del cual se califica la actuación de los diferentes gobiernos sobre su lucha contra el narcotráfico y marca el nivel de ayudas económicas y/o sanciones de diversos tipos que puedan darse a los países, según dicha evaluación

²⁴ TOKATLIAN, Juan Gabriel. Diplomacia coercitiva, narcotráfico y crisis: ¿El deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (edit.) “Tras las huellas de la crisis política”. Bogotá. Tercer Mundo Editores. FESCOL. IEPRI. 1996. Págs.181-204.

²⁵ LEAL BUITRAGO, Francisco. Alcances y dilemas de la crisis política. En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (edit.) Tras las huellas de la crisis política. Bogotá. Tercer Mundo Editores. FESCOL. IEPRI. 1996. Págs. 21-45.

²⁶ Desde la década del ochenta, ya los grupos paramilitares se encargaban de masacrar la base social que respaldaba a la UP y de exterminar los cuadros políticos de este movimiento político. En el caso de Córdoba, los paramilitares liderados por Fidel Castaño, y con la complicidad de la IX Brigada del Ejército, ejecutaron entre 1988 y 1990 alrededor de 1.200 asesinatos políticos, o que se presumen como tales. “A Luchar”, el Frente Popular y la UP fueron los blancos principales. Al respecto ver: ROMERO, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas. 1982-2003. Op cit. Pág. 142-143.





Conferencia Nacional de Autodefensas, en la cual, Carlos Castaño, inauguró un período de expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el eje bananero, con una estrategia de tierra arrasada, en medio de masacres y presiones, provocando el desplazamiento de cientos de campesinos de la región. Todos los actores armados recurrieron -y lo siguen haciendo- al terror y a la violencia aleccionadora en contra de la población civil como táctica de guerra²⁷.

En la zona de Urabá, los Comandos Populares (reinsertados del EPL) y las FARC, seguían enfrentados. Masacres y asesinatos selectivos fueron una constante entre los reinsertados y sus seguidores, y los militantes de la UP. La situación cambió drásticamente en 1995, cuando el general del Ejército, Rito Alejo del Río, fue designado comandante de la XVII Brigada del Ejército en Urabá. De ahí en adelante, se trazó una alianza entre el ejército, los exguerrilleros, sus Comandos Populares y, posteriormente, los paramilitares que empezaron una estrategia de copamiento en la zona²⁸.

3.1. Descertificación y narcotráfico: el imperio ataca.

La descertificación de los Estados Unidos en 1996, representó un golpe casi mortal contra el Ejecutivo; el presidente Samper se debatía entre la presión interior de una élite política que exigía su renuncia inmediata y la presión externa que sólo podría ser menguada con resultados concretos contra las organizaciones del narcotráfico. Este es un momento clave para el conflicto armado, porque de ahí en adelante se liga el problema del narcotráfico con la lucha contrainsurgente, se abre una puerta de entrada directa a la ingerencia norteamericana en el conflicto armado interno y se revive una figura utilizada en los años ochenta para sellar esta unión a la cual se denomina "la narcoguerrilla"²⁹.

La demanda creciente de resultados contra las estructuras del narcotráfico, la persecución del gobierno y capturas de miembros del Cartel de Cali, y las fumigaciones a cultivos ilícitos, no se correspondió con las cifras de cultivos, que en lugar de disminuir, aumentaron considerablemente³⁰. Desde el inicio de su mandato, en 1994, Samper emprendió una campaña de erradicación de cultivos y fumigaciones en el sur del país (Operación Esplendor) nunca antes realizada, llegando a más de 23.000 las hectáreas de cultivos de uso ilícito erradicadas en 1995. Sin embargo, según datos del gobierno, la producción se

²⁷LAIR, Eric. "El terror recurso estratégico de los actores armados: Reflexiones en torno al conflicto colombiano" En: Análisis Político No 37. Mayo-Agosto de 1999. Aunque tanto las guerrillas como los grupos paramilitares y el ejército han contribuido al desplazamiento creciente y a las masacres en las zonas de enfrentamiento; claramente pueden ser diferenciadas de las prácticas de terror utilizadas por los paramilitares como la desaparición, las torturas, el descuartizamiento de cadáveres y la construcción de escenas rituales de muerte, entre otros.

²⁸ROMERO, Mauricio. Paramilitarismo y autodefensa. Op. cit. Pág. 180.

²⁹Esta expresión fue utilizada por el embajador de los Estados Unidos Lewis Tambs a mediados de los ochenta. Al respecto ver: TOKATLIAN, Juan Gabriel. "Diplomacia coercitiva, narcotráfico y crisis: ¿El deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?" Op. cit. Pág. 188

³⁰La anotación sobre la criminalización del narcotráfico que hace Juan Gabriel Tokatlian es bastante lúcida: "en la medida en que existan bienes y servicios demandables por el público y que, sin embargo, permanezcan prohibidos o sean declarados ilegales, siempre existirán los incentivos, las oportunidades y las condiciones para que prosperen modalidades de criminalidad. La demanda concreta y evidente de bienes y servicios ilícitos es la que asegura tanto la manifestación como la permanencia de un tipo de crimen; el de una criminalidad sofisticada y asertiva que supera el nivel y la actuación individual y se sitúa en un marco más amplio e intrincado de organización." TOKATLIAN, Juan Gabriel. "Diplomacia coercitiva, narcotráfico y crisis: ¿El deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?" Op. Cit. Pág. 182.





incrementó en más de 6.000 hectáreas para el mismo año³¹. Esto se explica, en parte, por la expansión del paramilitarismo en el norte que facilitó y promovió el cultivo de coca y amapola en estas regiones del país. Así, mientras se fumigaba en el sur, en el noroeste, el centro y los llanos orientales, los cultivos empezaron a hacerse cada vez más frecuentes.

Las fumigaciones en los departamentos de Guaviare y Putumayo fueron retomadas en 1996 (Operación Cóndor). Dicha campaña hizo que los campesinos reaccionaran con marchas y protestas que fueron acompañadas por las FARC. Entre julio y septiembre de 1996, el movimiento cocalero se hizo sentir con más de 200.000 hombres y mujeres protestando por las fumigaciones³². Las protestas fueron apaciguadas de diversas formas por parte del gobierno: represión armada, mediada con el diálogo entre los líderes de los campesinos cocaleros y una comisión del Gobierno Nacional³³.

Todos estos hechos en el sur del país lo que contribuyeron fue a reafirmar las bases sociales de las FARC, que unido al crecimiento constante, convirtió a esta organización, en 1996, en una fuerza militar poderosa que pasaba de realizar una guerra de guerrillas a conformar un ejército capaz de enfrentar una guerra de movimientos. Los frentes de la guerrilla se multiplicaron en su estrategia de desdoblamiento y, en 1996, contaban con 65 frentes, distribuidos en 7 bloques; los golpes dados al ejército mostraron su fortaleza, como por ejemplo el ataque dirigido a las bases militares de Las Delicias en 1996 y Patascoy en 1997.

Por otro lado, la estrategia política de las FARC se concentró en el copamiento de los escenarios políticos locales. Después de la lección aprendida, con el aniquilamiento de los cuadros políticos de la Unión Patriótica, el grupo guerrillero no le apostó nuevamente a un proyecto de partido político legal, sino a la ingerencia en las administraciones locales, mucho más importante después de la descentralización administrativa y de la elección popular de alcaldes, y a nivel nacional, le apostó a la conformación de un proyecto político clandestino, “El Movimiento Bolivariano”, que trazaría el rumbo político de la organización.

El ELN, por su parte, supo desde muy temprano la importancia de los poderes locales. Concentrados militarmente en las zonas de explotación de recursos minerales, sacaron provecho económico de la distribución de las regalías por parte de las alcaldías municipales. La disputa por los recursos provenientes de la adjudicación de contratos, sumados a la extorsión y el secuestro, fueron las fuentes de crecimiento del ejército “eleno” que triplicó en 10 años el número de frentes, llegando en 1995 a tener más de 3.000 hombres y 35 frentes³⁴.

³¹ Dirección Nacional de Estupefacientes. En: “Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz”. Bogotá. Agenda ciudadana, 2000.

³² RAMÍREZ, María Clemencia. La política del reconocimiento y la ciudadanía en el Putumayo y la Baja Bota Cauca: el caso del movimiento cocalero de 1996. En: SOUSA SANTOS, Boaventura. GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. “Emancipación social y violencia en Colombia”. Bogotá. Editorial Norma. 2004. Págs. 153-205.

³³ “Las marchas campesinas de pequeños cultivadores de coca y ‘raspachines’ en el sur de país, mostraron a la opinión pública nacional e internacional el grave problema de las zonas de colonización y de frontera agrícola, que sintetiza buena parte de los problemas del campo colombiano. Pero una vez más, el tratamiento dado por el gobierno central al paro de los campesinos fue ambiguo y combinó la estrategia de la represión abierta, con las consecuencias ya anotadas y los mecanismos de negociación.” GONZÁLEZ, Fernán. BOLÍVAR, Ingrid, VÁSQUEZ, Teófilo. “Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado”. Bogotá. CINEP. 2002. Pág. 163

³⁴ ECHANDÍA, Camilo. Expansión territorial de las guerrillas colombianas. Op cit. Págs. 110-118.





Como puede verse, el crecimiento de los ejércitos de la insurgencia y de los paramilitares tuvo como centro la consolidación de las áreas en las cuales se habían formado y desarrollado, ocupando la política local y trazando complejas relaciones con la política legal, los partidos políticos y sus representantes en los escenarios municipales. Mientras las guerrillas nacieron y crecieron en zonas periféricas, donde el Estado ha tenido poca o nula presencia, llegando poco a poco a las zonas integradas a la sociedad mayor y a los mercados nacionales e internacionales, los paramilitares se reproducen y crecen en zonas ricas, con poderosas élites regionales, por lo general con predominio del latifundio y ganadería, y se despliegan a zonas con dominio guerrillero disputando su territorio³⁵. Es por ello, que las interacciones, pactos y estrategias entre quienes se dedicaban a la política legal y los grupos armados era una condición ineludible del ejercicio político, de lo contrario, serían presa de la amenaza, el desplazamiento forzado o el asesinato.

3.2. El año de 1998, punto de quiebre: declaración de guerra desde El Caguán y transformación paramilitar.

Mientras los ejércitos de la insurgencia y de los paramilitares incrementaron su capacidad bélica, el gobierno se enfrentó a una opinión pública que reclamaba acercamientos para la salida negociada al conflicto armado³⁶. Las campañas presidenciales para las elecciones de 1998, fueron la evidencia de lo que ya se presentaba en los escenarios locales: las alianzas y estrategias de los grupos armados con los partidos políticos y la política legal. El candidato Horacio Serpa, por ejemplo, trazó una campaña ligada a la posibilidad de un proceso de paz con la guerrilla del ELN (los encuentros en Mainz, Alemania, dejaron unos mínimos acuerdos que fueron el eje central de la alianza)³⁷; por su parte, el candidato conservador Andrés Pastrana, realizó una alianza exitosa con las guerrillas de las FARC y se proclamó como el candidato de la paz; su campaña se centró en el compromiso de un proceso de paz con esta organización³⁸.

Los paramilitares, por su parte, incrementaron el número de combatientes y las zonas de influencia en Córdoba y Urabá. Después de protagonizar en 1996 la escalada más violenta de asesinatos y masacres del país³⁹, se extendieron por los departamentos del Magdalena, Casanare y el sur del Cesar; en abril de 1997 se dio un paso más en la consolidación de los grupos paramilitares al ser conformadas las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con Carlos Castaño como comandante general. En todo este

³⁵ GONZÁLEZ, Fernán. Conflicto violento en Colombia: Una perspectiva de largo plazo. En: ACORD. N° 14. Bogotá. CINEP. 2004.

³⁶ En 1997 los colombianos votaron masivamente por el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad como una estrategia de resistencia ante la violencia y la guerra en Colombia.

³⁷ Al respecto ver: UMAÑA LUNA, Eduardo. Carta abierta a los firmantes del acuerdo "Puerta del Cielo". Bogotá. Impresiones Gráficas Punto y Trama. 1998.

³⁸ Fue decisiva en la recta final de la campaña, la aparición en los medios de comunicación, de fotos donde Manuel Marulanda "Tirofijo" (comandante general de las FARC) aparece con un reloj de la campaña pastranista, en medio de una reunión realizada días antes para sellar la alianza con el candidato presidencial.

³⁹ En 1996 se presentaron 1.200 homicidios en Urabá. Sobre las relaciones entre el ejército, los paramilitares y la gobernación de Álvaro Uribe Vélez y su declaratoria de zona de orden público, ver: DÁVILA, Andrés. ESCOBEDO, Rodolfo. GAVIRIA, Adriana. VARGAS, Mauricio. "El ejército colombiano durante el periodo Samper. Paradojas de un proceso tendencialmente crítico". En: Colombia Internacional. N° 49-50. Universidad de los Andes. 2001





proceso, las lógicas del terror impuestas por los grupos paramilitares originaron el desplazamiento de cientos de campesinos pobres y líderes sociales acusados de ser cómplices de la guerrilla; las masacres y las muertes aleccionadoras fueron continuas⁴⁰.

Las investigaciones por la relación de los grupos paramilitares y el Ejército dieron como resultado, en 1998, la destitución de los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, acusados de colaborar en la formación y consolidación de los grupos paramilitares. Paradójicamente, como “desagravio” frente a estos generales destituidos, fue organizada una reunión en Bogotá donde, el hoy presidente, Álvaro Uribe Vélez, pronunció el discurso central de la noche, y junto a él, Fernando Londoño Hoyos, quien sería posteriormente Ministro del Interior y la Justicia en la presidencia de Uribe Vélez⁴¹. La configuración de una fracción de ultra derecha no podía ser más explícita.

De otro lado, en 1998, con la elección de Andrés Pastrana Arango como Presidente de Colombia, se dio el primer paso para el futuro proceso de paz a partir de la delimitación de una zona en la que no actuarían las fuerzas militares del Estado. Dicha zona incluyó los municipios de La Uribe, Vistahermosa, Mesetas y La Macarena en el Departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el Departamento de Caquetá. Estos territorios se caracterizan por tener una amplia y consolidada presencia de las guerrillas de las FARC, y fue denominada como la “Zona de distensión”⁴². El 9 de enero de 1999, se dio inicio oficial a los diálogos de paz con las FARC.

Todo este escenario marcó un punto de inflexión en el conflicto. Son tres los principales ejes sobre los cuales giró el punto quiebre de la guerra en Colombia: en primera medida, la declaración de guerra de las FARC desde el Caguán; en segundo lugar, el fortalecimiento de las fuerzas militares con el apoyo del Plan Colombia; en tercera instancia, el rápido crecimiento de los ejércitos paramilitares a partir de 1998.

Iniciados los diálogos se conformaron mesas para discutir la “*Agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia*” y se desplegó una estrategia de publicidad que incluyó giras internacionales, a los Estados Unidos y Europa, buscando apoyo al proceso de paz; a nivel nacional se involucró a la sociedad civil a través de las audiencias públicas de las cuales se hizo una permanente transmisión por televisión.

Sin embargo, los diálogos en medio de la confrontación hicieron cada vez más difícil un resultado exitoso en el desarrollo del proceso. Las FARC protestaban constantemente por la poca voluntad del gobierno de combatir a los grupos paramilitares que se expandían en forma acelerada, y en ese marco, el caminar del proceso de paz con las FARC se hizo más lento, y los acercamientos sufrieron múltiples

⁴⁰ Alfredo Rangel en 1998 explicaba esta conducta de la siguiente manera: “Es posible que los paramilitares le estén apostando a que del horror no se recupera nadie y que sólo la sevicia y la brutalidad ofrecen una garantía para que las poblaciones que han sido sus víctimas le quiten definitivamente el respaldo a la guerrilla.” RANGEL SUÁREZ, Alfredo. Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogotá. Tercer Mundo Editores. 1998. Pág.51

⁴¹ ROMERO, Mauricio. Paramilitarismo y autodefensa. Op. cit

⁴² Presidencia de la República. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hechos de Paz. Tomo XIX. Instrumentos Jurídicos. Resolución Número 85 del 14 de octubre de 1998. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Bogotá. Págs. 103-104.





dilataciones. La Zona de distensión sirvió para el fortalecimiento militar de las guerrillas, lo que puso en evidencia que los diálogos de paz han sido incorporados, desde la década anterior, como una estrategia político-militar de las guerrillas en Colombia.⁴³

Las continuas declaraciones en la opinión pública en contra del proceso de paz fueron una constante. Sin embargo, lo que marcó el rumbo hacia el fracaso de los diálogos fue el asesinato de tres indigenistas norteamericanos; esta coyuntura particular dio pie para que un sector de Derecha, reacio a cualquier negociación con la insurgencia, encontrara eco en sectores políticos de los Estados Unidos; desde ese momento se retomó la campaña militar, y en nombre de la “lucha contra las droga”, fomentaron la estrategia contrainsurgente en Colombia⁴⁴. Se diseñó entonces una propuesta de ayuda militar a Colombia dirigida al gobierno de Bill Clinton, la cual fue aprobada en el año 2000 bajo el nombre de “Plan Colombia”. En este contexto, el Ejército nacional experimentó un proceso de profunda reestructuración en todas sus áreas, y fue reforzado en número de hombres, en técnica y en equipamiento militar.

Por último, lo que marcó esta fase de transformación de la guerra, fue la oposición abierta de los sectores más conservadores de la política y la economía colombiana (robusteciendo cada vez más la fracción de ultraderecha), quienes se opusieron en forma decidida a la zona de despeje; los grupos paramilitares incrementaron sus acciones y sus frentes se multiplicaron:⁴⁵ en 1997, contaban con 3.800 combatientes, y para el 2000 ya tenían entre sus filas más de 8.100 hombres⁴⁶. Su estructura organizativa creció, y con ella, las posibilidades de protagonismo y acumulación de poder que los convirtieron en un actor central de la dinámica bélica, política, económica y social de los últimos años.

⁴³ VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Los actuales proceso de negociación: entre la inercia y la incertidumbre. En: CEPEDA, Fernando (edit.). “Haciendo paz. Reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia”. Cartagena 9-22 de marzo. Bogotá. Fundación Ideas para la Paz. 2001. Pág. 98.

⁴⁴ Al respecto ver: EU cierra la puerta a futuros contactos con FARC. Periódico EL TIEMPO. 26 de marzo de 1999.

⁴⁵ Desde la década del ochenta, era clara la relación entre los procesos de paz y el crecimiento de los grupos paramilitares; en ese entonces se denominaban sus actuaciones como la “Guerra sucia”. Así lo expresaba un prestigioso especialista del tema al analizar el período comprendido entre 1984-1987: “...la guerra sucia es en gran parte contemporánea del proceso de paz -período en el cual se consolida-, aun cuando sus primeras manifestaciones importantes surgen algunos años antes. Ella comenzó golpeando inicialmente a guerrilleros amnistiados y personas consideradas simpatizantes de la actividad guerrillera: abogados, defensores de presos políticos, voceros de las negociaciones con la guerrilla, militantes de grupos políticos de izquierda, etc. En principio, parece ser entonces un mecanismo de oposición a la política de paz, a la legalización de la actividad guerrillera y a la apertura de nuevos espacios políticos para nuevas fuerzas.” UPRIMY YEPES, Rodrigo. VARGAS CASTAÑO, Alfredo. La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia. En: PALACIO, Germán (edit.) Op cit. Pág. 117

⁴⁶ Datos del Ministerio de Defensa. Disponible en su sitio web.





CAPITULO II

BARRANCABERMEJA

1.CONTEXTO

ciudad ubicada en la zona centro oriental de Colombia, en la zona del Magdalena Medio. Lo cruza el Río Magdalena y la rodean las cordilleras central y oriental. Barrancabermeja, desde los años los años veinte se desarrolló como enclave petrolero. Posteriormente le seguirían las zonas de Yondó en la década del treinta, y Puerto Boyacá en el decenio del cincuenta.

Buena parte de las migraciones a estas tierras fueron consecuencia de la violencia política (rural) de los años cincuenta y como consecuencia de la dinámica económica que generó el ferrocarril construido entre el municipio de La Dorada (Caldas) y la ciudad de Santa Marta.

Las guerrillas liberales de los años cincuenta tuvieron uno de sus grupos armados en la zona de Carare-Opón⁴⁷. Así mismo, cuando el ELN se dio a conocer ante la opinión pública en 1965, lo hizo por medio de la toma del municipio de Simacota, ubicado en el noroccidente de Santander, junto a Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres y Puerto Wilches.

La región del sur de Bolívar está compuesta por los municipios de San Pablo, Simití, Morales y Santa Rosa. Los campesinos pobres se dedican a la pesca y la agricultura, la mayor parte del territorio está dedicada a la ganadería extensiva, por lo cual las luchas por la apropiación de la tierra ha sido una constante.

Estas dos regiones, noroccidente de Santander y sur de Bolívar, conforman la subregión norte del Magdalena Medio⁴⁸, una zona denominada como de “frontera interna y de enclave”⁴⁹, donde coexisten diversas conflictividades que se cruzan y se agudizan con el conflicto armado, reconfigurando el territorio.

⁴⁷ SANCHEZ, Gonzalo. MEERTENS, Donny. *Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El caso de la violencia en Colombia*. Bogotá. El Áncora Editores. 1983. Pág. 32 y ss.

⁴⁸ MURILLO, Amparo. *Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio*. Instituto Colombiano de Antropología. Colcultura. PNR. Bogotá. 1993

⁴⁹ VARGAS VELASQUEZ, Alejo. *Magdalena Medio Santandereano. Colonización y Conflicto Armado*. Bogotá. CINEP.1992. REMENTERÍA, Iván de. “Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena Medio”. En: SANCHEZ, Gonzalo. PEÑARANDA, Ricardo. *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. CEREC. 2ª edición. Ver también: ZAMORA, Gloria Lucy. *Los moradores de la represión en el Magdalena Medio*. Bogotá. CINECP. 1983.





Finalizando la década del setenta, la fuerza de los movimientos sociales urbanos estaba en ascenso; los servicios públicos y el transporte se constituyeron en las principales banderas de las reivindicaciones de las protestas⁵⁰. En el Magdalena Medio, en los años setenta y ochenta se vivieron intensas movilizaciones cívicas que reivindicaron el derecho a la vivienda, al equipamiento urbano, especialmente servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, vías, etc.), y también por el derecho a la vida. Los párrocos de la región encabezaron muchas de las marchas, las cuales fueron respaldadas por las organizaciones y movimientos sociales de base⁵¹.

Barrancabermeja, ciudad escenario de intensas movilizaciones de este tipo en la década del ochenta⁵², fue sin lugar a dudas el centro de movilización y protesta. Dichas movilizaciones se convirtieron en una “*estructura informal permanente*”⁵³ al ser reconocidas como la única forma en que las demandas de los pobladores eran escuchadas. Las tomas de tierra por parte de campesinos destechados eran continuas, y la lucha por la provisión de servicios públicos y adecuación, era inminente.

Este puerto ubicado a orillas del Río Magdalena, es una ciudad que se caracteriza principalmente por ser área de explotación petrolera y donde está ubicada la principal refinería del país. En esta ciudad hicieron presencia, desde la década del sesenta, las FARC y el M-19, pero el grupo con mayor presencia e influencia fue el ELN, quien desde esa misma década contó con una presencia importante en los barrios populares de la ciudad y en la región circundante. Muy ligado al problema petrolero, el ELN concentró guerrillas urbanas en los barrios populares de Barrancabermeja, respaldaron la toma de tierra y apoyaron los paros y movimientos cívicos que allí se dieron en los años setenta y ochenta.

En la década del ochenta, el ELN conformó la regional “Cristóbal Uribe” con influencia en Barrancabermeja y Bucaramanga; más adelante, iniciando el decenio del noventa, un nuevo frente, el “Manuel Gustavo Chacón”, hizo presencia en los alrededores de este puerto petrolero, y posteriormente se creó el frente urbano “Resistencia Yariguies”, con presencia en Barrancabermeja y el municipio de Sabana de Torres.⁵⁴

Barrancabermeja ha sido una ciudad donde confluyen y se expresan diversos conflictos: el conflicto obrero-patronal, el conflicto por la tierra, y en las últimas décadas ha sido expulsora, pero sobre todo ciudad receptora de desplazados por la violencia. En este último caso, la urbanización creciente en la década del ochenta evidenció la incapacidad del Estado para dotar de equipamiento urbano aquellos barrios en crecimiento⁵⁵.

⁵⁰ Al respecto ver: GIRALDO, J. CAMARGO, S. Paros y movimientos cívicos en Colombia. Bogotá. Cinep. 1985.

⁵¹ Al respecto ver: ALONSO, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia. 1997. Pág. 109

⁵² Un registro detallado de las marchas en las décadas de los setentas y los ochentas puede encontrarse en: GIRALDO, Javier. “La reivindicación urbana 1982-1986”. En: Controversia. N° 138-139. Bogotá. CINEP. 1987. Así mismo GARCÍA, Martha Cecilia. “Las cifras de las luchas cívicas. Cuatrenio Barco, 1986-1990”. En: Documentos Ocasionales. N° 62. Bogotá. CINEP. 1990.

⁵³ VARGAS VELASQUEZ, Alejo. Op cit. Pág. 236

⁵⁴ Al respecto ver: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de Barrancabermeja. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2001.

⁵⁵ ALONSO, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Op cit. Pág. 102-117.





En estos barrios populares, la acción de organizaciones sociales y de las milicias del ELN influyó para articular los esfuerzos de los campesinos desplazados de la región con sus familias, en condiciones de pobreza y marginalidad, como consecuencia de la violencia desatada por la concentración de la propiedad y la expansión de los latifundios ganaderos. La recepción de los flujos desarraigados del sur del Magdalena Medio se agudizó en la década del ochenta con la dinámica bélica propiciada por la aparición de los grupos paramilitares, inicialmente ubicados en el municipio de Puerto Boyacá.

2. LA NUEVA DERECHA: NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARISMO

La zona del Magdalena Medio, en la década del setenta, vivió una expansión de diferentes frentes de las FARC y de consolidación política del Partido Comunista Colombiano que dominaban los concejos municipales de los municipios de Cimitarra, Puerto Berrío y Puerto Boyacá, entre otros⁵⁶. A partir de 1978, empezó una ofensiva militar con el fin de “recuperar para el Estado” esta zona dominada hasta ese momento por las FARC; para ello, en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia) se establece la XIV Brigada del Ejército y adicionalmente se crea el Batallón Bárbula en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).

Sin embargo, los atropellos del Ejército a los campesinos de la región, las detenciones arbitrarias y las desapariciones después de ser retenidos fueron una constante en el período de 1978 a 1982, durante el gobierno de Turbay Ayala. Así mismo, el Ejército prohibió la venta de alimentos y provisiones a los campesinos, y así supuestamente, impedían que llegaran abastecimientos a la guerrilla.

En la medida en que el Ejército incrementó los ataques a las organizaciones sociales y a la población campesina pobre, las FARC también aumentaron los “impuestos ganaderos” que se cobraban a los terratenientes -cada vez más continuos y más altos- que al no ser pagados, los hacendados se exponían a ser víctimas de secuestros y de mayores extorsiones. En términos generales, el enfrentamiento entre el Ejército, las organizaciones sociales y campesinas y las FARC en la zona del Magdalena Medio se agudizó, y las Fuerzas Militares apoyadas en el Estatuto de Seguridad ocasionaron las más graves violaciones a los derechos humanos, no solo en esta región, sino en todo el país.

Más adelante, el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) trató de remediar la ilegitimidad en la cual se encontraba la Fuerza Pública, restándoles poderes a las Fuerzas Militares y buscando acercamientos con los grupos guerrilleros para un eventual proceso de paz. Tal actitud, causó indignación en los militares, expresada por el propio Ministro de Defensa de esa época, al no compartir la política de paz impulsada por el Ejecutivo.

A nivel local, en la zona del Magdalena Medio, la política de paz chocaba con la estrategia que implementó el Ejército y que había logrado hacer replegar a las FARC y expulsar, o en la mayoría de los casos, eliminar de la región los principales cuadros del PCC.

⁵⁶ MEDINA GALLEGU, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación: El caso de “Puerto Boyacá.” Bogotá. Editorial Documentos Periodísticos. 1990. Págs. 129-142





Este es un hecho de los más oscuros posibles; si hablamos con las fuerzas que tienen la manija aquí, ninguno reconocía que la política de Betancur sobre la paz fuera eficiente. Al hablar con los jefes militares de ese entonces ninguno de los que yo entrevisté aprobaba la política pacificadora del Presidente. Ya se había comenzado con la 'vacuna' al que se le hizo frente con el proceso de 'fumigación'; entonces fuerzas paramilitares comenzaron a 'fumigar' a todos los elementos que antes estaban vacunando o que ellos consideraban pertenecían a la política de la vacuna.⁵⁷

Desde ese momento se pone en marcha una estrategia entre los batallones y las brigadas, los propietarios locales ganaderos y terratenientes (más adelante narcotraficantes daban financiación y apoyo) creando grupos de autodefensas. Dadas las dinámicas de los cuatro años anteriores, Puerto Boyacá y la zona del Magdalena Medio fueron los primeros ejes de crecimiento. Posteriormente, otros grupos se extenderían por Córdoba, Urabá, Antioquia y el piedemonte de la Cordillera Oriental. El crecimiento del paramilitarismo, dio paso a la concentración de la propiedad, y al mismo tiempo, al incremento de los cultivos ilícitos.⁵⁸

Si en la década del cincuenta la persecución por parte de las fuerzas armadas a los liberales fue evidente, en el decenio del setenta se vivió todo un proceso de despolitización bipartidista en el estamento castrense. Otro fue el enemigo a derrotar: "el comunismo"; este objetivo estratégico, unido a la cada vez mayor autonomía de las Fuerzas Armadas para el manejo del orden público, les proporcionó un gran fortalecimiento y representa un elemento central a la hora de analizar la "complicidad estructural" entre ellas y los grupos paramilitares.⁵⁹

La estrategia contrainsurgente que hasta ese momento la había desarrollado el Ejército por medio del Estatuto de Seguridad cambia de rumbo en el Magdalena Medio. Al mando de los Generales Farauk Yanine y García Echeverri e influenciados por la doctrina de Seguridad Nacional,⁶⁰ se empezaron a organizar grupos paramilitares con asesoría del Ejército y de mercenarios israelíes y norteamericanos.

En 1983, la Procuraduría General de la Nación, presentó un revelador informe donde evidenció la relación de miembros activos del Ejército y la Policía, el Movimiento Muerte A Secuestradores (MAS) y los grupos paramilitares cuyo accionar se desplegaba principalmente en Medellín, Puerto Boyacá, La Dorada, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Cali y Arauca.

⁵⁷ GALINDO QUEVEDO, Adolfo. Sacerdote de la Parroquia San Pedro Claver, Puerto Boyacá. Entrevista Septiembre de 1986. Citado por: MEDINA GALLEGU, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación: El caso de "Puerto Boyacá." Op cit. Pág. 175.

⁵⁸ REYES POSADA, Alejandro. Paramilitares en Colombia: Contexto, Aliados y Consecuencias. En: SANCHEZ, Gonzalo. PEÑARANDA, Ricardo (Compiladores). "Pasado y presente de la violencia en Colombia". Op cit. Pág. 429.

⁵⁹ UPRIMY YEPES, Rodrigo. VARGAS CASTAÑO, Alfredo. La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia. En: PALACIO, Germán (edit.) "La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana". Bogotá. ILSA-CEREC 1990. Pág. 152.

⁶⁰ La doctrina de Seguridad Nacional diseñado como estrategia contra el comunismo, involucra los ámbitos sociales económicos y políticos donde éste puede reproducirse; de este modo las organizaciones sociales y políticas (sindicatos, organizaciones comunitarias, organizaciones y movimientos políticos de izquierda, etc.), son consideradas también objetivo militar en tanto en ellas se ha "infiltrado" el comunismo y deben ser combatidas. Para ello, esta nueva estrategia precisa de organismos que puedan actuar en forma no convencional, por fuera de los marcos jurídicos, es decir, se requieren de acciones que no puede ejecutar un ejército regular, en tanto éstas se realizan de forma ilegal o "subterránea", dentro y contra dicha población civil. Retomando a Marcus Raskim afirma la socióloga e investigadora Vilma Liliana





Se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia, supliendo así una capacidad de acción que les negaban no sólo sus propias limitaciones de todo orden, sino la complejidad de una lucha ardua, terreno vasto, encapotado y montañoso contra una delincuencia endémica en la que el carácter político y el común se habían hecho inextricables y frente a la cual los sentimientos y las reacciones de la población habían sembrado sospechas de todas partes.

(...) Pero ello no le quita al fenómeno su expresión de paramilitarismo, gentes de uniformes, oficiales, suboficiales, soldados, policías andaban coordinando e impulsando este tipo de operativos. Es más, los movimientos paramilitares no han cesado, siguen existiendo en distintas regiones del país, el Magdalena Medio, especialmente... se trata pura y simplemente de gentes oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan a tomar como 'guías' e 'informantes', colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios, hagan oficiosamente, lo que oficialmente no pueden hacer.⁶¹

Como respuesta al informe de la Procuraduría, y en la búsqueda por el establecimiento de una estructura dual que le diera una base legal y una cierta legitimidad al accionar de estas nuevas organizaciones paramilitares, se creó la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio - ACDEGAM⁶², desde donde se legalizaban parcialmente y se coordinaban las acciones de los diferentes frentes paramilitares que operaban en la región. Esta organización surgió de la iniciativa de ganaderos y agricultores antioqueños, quienes reunidos en Medellín en 1982, buscaron respaldar desde esta organización legal las acciones paramilitares⁶³. Presentada como una asociación para la seguridad y el mejoramiento de las condiciones sociales de los campesinos de la región, ACDEGAM se constituyó en el puente de articulación entre la acción legal de la autodefensa y la puesta en funcionamiento de un aparato paramilitar anticomunista.

El conflicto armado en el Magdalena Medio se dio por una combinación de intereses entre latifundistas ganaderos, políticos locales y capital extranjero. Por otro lado, estaban los campesinos pobres luchando por la apropiación de parcelas de las cuales fueron expulsados, unidos a la presencia de la guerrilla

Franco: "...el Estado de Seguridad Nacional, a diferencia de un Estado de Derecho, se caracteriza por la existencia de una *estructura dual* en la cual se distinguen actividades paralegales y actividades ilegales. En el primer nivel, el aparato funciona de acuerdo a una estructura con su propio sistema administrativo y auto-justificadorio. En el segundo nivel -actividades ilegales, el comportamiento criminal se constituye, no en una amenaza, sino en un sistema operativo fundamental para la preservación del establecimiento en una extensión paradójica de la soberanía". FRANCO, Vilma Liliana. El mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente. En: "Estudios Políticos". N° 21. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Julio-Diciembre de 2002. Pág. 60.

⁶¹ JIMÉNEZ GÓMEZ, Carlos. Una procuraduría de Opinión Informe al Congreso del País. 1983. Págs. 116-117. Citado por: MEDINA GALLEGU, Carlos. "Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación: el caso de "Puerto Boyacá." Op cit. Pág. 189.

⁶² Con personería jurídica N° 00065 de julio 22 de 1984, otorgada por la Gobernación de Boyacá. Más adelante, el 11 de diciembre de 1986, se le da una nueva personería jurídica y esta vez por el Ministerio de Agricultura (la N° 0528). Al respecto, ver: MEDINA GALLEGU, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación: El caso de "Puerto Boyacá." Op cit. Págs. 219-231

⁶³ Al respecto ver: MARTÍNEZ, Glenda. Salvatore Mancuso, su vida. "Es como si hubiera vivido cien años". Bogotá. Editorial Norma. Pág. 80.





y los partidos políticos de Izquierda quienes fueron el blanco del primer grupo y frente a quienes se configuraron los grupos paramilitares. Más adelante, la irrupción del dinero del narcotráfico, cuyos dueños rápidamente pasaron a ser también terratenientes, fortalecieron la agrupación de extrema Derecha. Este grupo de poder ejecutó una respuesta armada terrateniente que dirigió sus actuaciones contra las organizaciones populares y campesinas, el ELN y posteriormente las FARC, justificando sus acciones por los cobros, “vacunas” y secuestros que los grupos guerrilleros ejecutaban en contra de los ganaderos de la zona.

Las acciones de los nacientes grupos paramilitares (por el apoyo de la alianza entre terratenientes, empresarios, narcotraficantes y políticos de la región) desplazaron y asesinaron campesinos sindicados de ser auxiliares de la guerrilla y se apropiaron de sus tierras, así mismo, desplazaron también a quienes se habían apropiado de algunas parcelas de los terratenientes. El éxodo masivo de campesinos, el enfrentamiento a la guerrilla y su repliegue de la zona, crearon todo un escenario de pacificación y monopolización de tierras sin precedentes en el país. Esta contrarreforma agraria agravó la situación de miles de campesinos pobres y desposeídos, quienes además de la inminente concentración de las mejores tierras en pocas manos, fueron víctimas de la “labor de limpieza” que se practicó en dichas zonas.⁶⁴

Este modelo para armar en el Magdalena Medio -aunque “fracasa” en alguna medida cuando el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha pone la estructura militar a su servicio-⁶⁵, se multiplicó con otros actores pero con los mismos sectores en Córdoba y Urabá: militares, terratenientes locales, gamonales tradicionales y el negocio del narcotráfico; se asociaron en mayor o menor medida, dependiendo de las zonas y los conflictos locales, en contra de las organizaciones populares, el movimiento campesino, los movimientos políticos de Izquierda, las organizaciones sindicales y los pequeños propietarios y campesinos pobres.

En este contexto, en los barrios populares de Barrancabermeja, cientos de familias lucharon por la dotación de servicios públicos y equipamiento urbano. Con el flujo continuo de desplazados de la región del Magdalena Medio, en la medida en que las condiciones políticas y sociales se hicieron más críticas, los campesinos que llegaban a los barrios populares del puerto petrolero y sus familias, en condiciones de pobreza, lucharon por sobrevivir en un entorno de hostilidad manifiesta.

2.1. Barrancabermeja, entre el fuego cruzado.

La expansión del proyecto paramilitar desde la subregión sur hacia la subregión norte del Magdalena Medio, puso en el centro del conflicto a los campesinos de la región, y desde 1998 fue evidente como la avanzada estaba “sitiando” a Barrancabermeja. En el primer semestre de ese mismo año, el 16 de mayo, se da la primera incursión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar,

⁶⁴ “El narco-agro”. Informe Especial. Revista Semana, N° 343. Noviembre 29 de 1988. Págs. 34-38

⁶⁵ Tanto, Gonzalo Rodríguez Gacha como Pablo Escobar, contribuyeron al “fracaso” de este primer núcleo paramilitar con el asesinato de Pablo Guarín, prestigioso líder político paramilitar, Representante a la Cámara por el Partido Liberal. Así mismo, Henry Pérez y sus hermanos, al igual que Ariel Otero destacados líderes políticos del proyecto paramilitar en la región, fueron asesinados por orden de los narcotraficantes.





AUSAC, al puerto petrolero, asesinando siete jóvenes de los barrios de la comuna suroriental y secuestrando a 40 más: quince de ellos fueron luego liberados y los otros 25 nunca más se supo su paradero.⁶⁶

Barrancabermeja también fue el centro de recepción del éxodo campesino de 1998, donde cerca de 10 mil personas, víctimas del fuego paramilitar, llegaron al puerto y a San Pablo, permaneciendo 103 días en albergues, parques y escuelas. Los pobladores recibieron el ataque sistemático de los paramilitares quienes los acusaban de ser guerrilleros, o en última instancia, colaboradores de ellos. Bajo ese manto, los ataques a los campesinos y el desplazamiento forzado fueron cobrando cada vez más víctimas durante la implantación del proyecto paramilitar en la región.

...en el Magdalena Medio a los campesinos que se les expulsa es porque por aquí de alguna manera van a pasar los remolcadores del tratado de libre comercio y que van a transportar los productos extranjeros hacia los centros, las concentraciones poblacionales más importantes de Colombia, entonces las tierras que están a lado y lado del río Magdalena que necesariamente, seguramente a futuro van a tener la posibilidad de vender sus productos a otros países, entonces los campesinos de la margen izquierda y derecha del río Magdalena y de las vías más importantes son expulsados y eso no significa que la guerrilla estuvo ahí necesariamente (...) Cuando el ELN secuestró el Focker 50 de Avianca, entonces el ejército realizó operaciones militares indiscriminadas en la Serranía de San Lucas, muchos campesinos salieron, pero estos campesinos, cuando cesan las hostilidades, algunos pueden volver, porque la gente se va es huyéndole a los enfrentamientos, pero el resto de campesinos que han sido expulsados cerca de las zonas de interés económicos, las zonas adyacentes a las vías fluviales, aéreas, ferroviarias o terrestres, a las minas de oro, no pueden volver y eso es lo importante.⁶⁷

Durante 1999 se presentaron varias incursiones de los paramilitares a Barrancabermeja; se dieron masacres, asesinatos selectivos realizados por aquellos que entraban, asesinaban y salían de Barrancabermeja, pasando por los retenes del Ejército y contando con su total complicidad.

Los ataques cada vez cobraban más víctimas, los barrios populares estaban sitiados, sus paredes pintadas, las amenazas arceciaban, calles enteras desiertas por el peligro inminente, era un panorama desolador donde el miedo se apoderaba de los pobladores de Barrancabermeja.

Paralelo al cerco que sobre Barrancabermeja tenían los paramilitares, se llevó a cabo todo un trabajo de infiltración en el puerto petrolero, al cual arribaron pobladores de Puerto Berrío, Puerto Parra, en general zonas de dominio paramilitar, los cuales cumplieron una labor de inteligencia, al ubicarse en sectores claves como el comercio, transporte público, etc., y en los barrios de la zona norte y sur de Barrancabermeja. De otro lado, los paramilitares también adelantaron contactos con los comerciantes que estaban cansados con los cobros extorsivos del ELN.

⁶⁶ Un seguimiento detallado de los hechos del 16 de mayo de 1998 puede encontrarse en: Noche y Niebla. Caso tipo No 3. "Barrancabermeja, la otra versión. Paramilitarismo, control social y desaparición forzada 200-2003". CINEP-CREDHOS. Pág. 51-52.

⁶⁷ Entrevista BB-RM. Julio de 2005.





... cuenta algún jefe de la Cámara de Comercio, que la guerrilla estaba cobrando en los últimos 10 años unas cuotas muy altas. Nos comentaba una vez, que ellos fueron a hablar con el ELN, los elenos estaban encapuchados, y dice este tipo, estarán encapuchados porque nosotros los conocíamos, porque si nadie los conociera nadie estuviera encapuchado y como allá en el monte nadie se encapucha, entonces los comerciantes le dijeron al ELN que bajaran las cuotas, que estaban cobrando demasiado y el ELN, o el tipo que hablaba en nombre del ELN, les dijo: miren, ustedes son la oligarquía, su problema es conseguir plata, el problema de nosotros es contribuir a la revolución y ustedes nos dan la plata y ya, aquí no hay ninguna rebaja, ustedes son el enemigo de clase. Entonces fueron allá donde Castaño, al Nudo de Paramillo y negociaron con Castaño la llegada del paramilitarismo, que bueno, que les cobrara la mitad de lo que le cobraba la guerrilla, ese fue el pacto inicial.⁶⁸

Muchas de las organizaciones sociales y comunitarias cesaron sus actividades por el asesinato de sus líderes, organizaciones no gubernamentales fueron amenazadas por su trabajo en torno a los derechos humanos, varios de los familiares de los desaparecidos el 16 de mayo de 1998 fueron asesinados por denunciar la desaparición forzada como estrategia de guerra en Barrancabermeja. Otros optaron por resistir, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS y la Organización Femenina Popular – OFP, siguieron con su labor de defensa de los derechos humanos y fueron convertidos en objetivo militar por parte de los paramilitares. Entre 1999 y 2000 fueron asesinados cerca de 800 personas⁶⁹ a manos de los paramilitares. Luchar contra el miedo paralizante que sentían los pobladores de la región fue una tarea titánica.

Unido a lo anterior, en medio del acoso paramilitar, la guerrilla perpetró varios actos durante el año 2000 que fueron objeto de rechazo por los pobladores de Barrancabermeja y facilitaron la entrada paramilitar. En febrero de ese año, el ELN activó una bomba cobrando la vida de una anciana,⁷⁰ luego, el 3 de marzo, dos personas murieron por un atentado del ELN; estas escenas se repitieron durante todo el 2000; lanzaron granadas en sitios públicos, y en septiembre, activaron una bomba en una sucursal de una entidad bancaria, donde dos personas murieron y nueve resultaron heridas.⁷¹ Frente a este hecho, los barranqueños se movilizaron en contra de los insurgentes, evidenciando el malestar y la indignación por sus acciones.

Lejos de constituir un punto de quiebre a la violencia que arreciaba, la amenaza paramilitar se hizo cada vez más directa. En diciembre de 2000 se dio un escalamiento en la arremetida paramilitar y su presencia en la ciudad fue un hecho cuando más de 100 hombres cruzaron el Río Magdalena, llegando al puerto petrolero, ante la mirada indiferente de las fuerzas armadas. Mauricio Romero es claro cuando

⁶⁸ Entrevista BB-RM. Julio de 2005.

⁶⁹ ROMERO, Mauricio. Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Op cit. Pág. 107.

⁷⁰ Ver: Periódico Vanguardia Liberal. 14 de febrero de 2000.

⁷¹ Periódico Vanguardia Liberal. 25 de septiembre de 2000. Al respecto afirman: “Con el carro-bomba de anoche ya son cuatro los atentados terroristas que afectan directamente a la población civil. En septiembre se registraron tres de estos atentados: la bomba contra las edificaciones de la DIAN, que destruyó el edificio y afectó a 60 locales comerciales; luego fue la cicla-bomba contra el Banco Santander y posteriormente el cilindro lanzado desde un islote del río Magdalena, contra la estación de policía del Muelle y que cayó sobre cinco casetas del Paseo del Río que comercializan la comida típica de la región”.





se pregunta: “¿Cómo cruzaron el río hacia Barrancabermeja aproximadamente 100 hombres armados de las AUC sin ninguna intervención de las autoridades, las que supuestamente mantienen un estricto control sobre los accesos al puerto considerado estratégico?”⁷²

2.2. La consolidación paramilitar.

Durante los primeros meses del 2000, los paramilitares ubicados en los barrios del nororiente de Barrancabermeja, asesinaron jóvenes, hostigaron y amenazaron barrios enteros como es el caso de Altos del Campestre, Minas del Paraíso, María Eugenia, Kennedy, Las Granjas y El Progreso, así mismo a los familiares de los desaparecidos del 16 de mayo.

Al desplazamiento forzado de familias barranqueñas le siguió la ocupación o adjudicación de sus viviendas a terceros por cuenta de los paramilitares, así lo denunció el periódico Vanguardia Liberal:

Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, están regalando a quienes ellos consideran, las casas que están abandonadas en Arenal, un popular sector de la Comuna 1 de Barrancabermeja (...) Por los menos 30 predios, los mismos que habían sido desalojados por sus propios dueños ante las presiones de las AUC, poco a poco están siendo entregados a sus nuevos moradores (...) Según la comunidad del barrio Arenal. “[...] esas casas están deshabitadas porque los paramilitares obligaron a las familias a salir; so pena de ser asesinados sí desobedecían su orden [...] las autoridades no hacen más que decir ¡denúncielos! Pero la gente teme por la amenaza y el peligro latente que representan ‘los nuevos vecinos’ [...]”⁷³.

El desconcierto fue total cuando poco tiempo después antiguos guerrilleros pasaron a conformar las filas paramilitares.

...la gente confiaba en la guerrilla hasta cierto punto, entonces de la noche a la mañana el mismo paciente le sale que no es un jefe guerrillero sino un jefe paramilitar, entonces eso de alguna manera neutraliza las redes sociales o las confianzas de las redes sociales que están en Barrancabermeja, porque la guerrilla se conocía toda esta red social y el paramilitarismo también la conocía porque eran los mismos. Recuerdo que el 20 de febrero del 2001, Robert Morales, alias don Diego, y alias Bolívar, comandante del frente Capital Parmenio del ELN, esa vez según nos enteramos nosotros, reunió como a 23 guerrilleros que estaban bajo su mando y les dijo que se convirtieran en paramilitares; hay tres chinos jóvenes que fueron asesinados por él, ya que se resistieron a eso, de hecho ocurrió en el barrio el Palmar, en la comuna sur oriental de Barrancabermeja, eso fue en 2001.⁷⁴

Las formas de control social han sido de varios tipos: amenazas a homosexuales y prostitutas, horarios nocturnos después de los cuales los jóvenes deben estar en sus casas, pelo corto obligatorio para los hombres, etc., fueron algunas de las normas impuestas por el control paramilitar. A través de un docu-

⁷² Ibid. Pág. 109

⁷³ Periódico Vanguardia Liberal. 8 de mayo de 2001.

⁷⁴ Entrevista. B-RM julio de 2005.





mento en febrero de 2002, los paramilitares hicieron público su “manual de convivencia”, donde expresaban las normas que debían ser acatadas so pena de castigos; allí se establecieron, además de los ya mencionados, desde horarios para el funcionamiento de sitios públicos hasta el mantenimiento y aseo de lugares públicos y privados.⁷⁵

De ahí en adelante, los asesinatos selectivos y las desapariciones fueron una constante. Las actividades ilegales de los paramilitares encontraron en Barrancabermeja un lugar propicio para su implantación, además del cobro a los comerciantes por prestar seguridad, es importante tener en cuenta el lavado de activos a través de diferentes mecanismos que han venido dándose en los últimos años: casas de chance, moteles, sitios de recreo, comercio, etc. Así mismo, han logrado controlar el robo de gasolina, diferenciándose del accionar guerrillero, pues mientras estos últimos se limitaban a cobrar un impuesto por el robo de gasolina del tubo, los paramilitares han organizado un verdadero “cartel de la gasolina”, el cual les permite un mayor control social y fortalecen sus bases sociales a partir de las necesidades de la población.

De otro lado, la “economía legal” también ha sido copada por el paramilitarismo. En medio de las difíciles condiciones económicas a las que cientos de familias barranqueñas se enfrentan, los paramilitares empezaron a ofrecer puestos de trabajo a jóvenes desempleados; el control de las “bolsas de empleo” en Barranca es total, donde los paramilitares cumplen el papel de intermediación para la contratación y sobre el cual se cobra un porcentaje, tanto del comercio formal, como de obras de infraestructura -el puente Barrancabermeja-Yondó es un claro ejemplo-, y de instituciones estatales como es el caso de ECOPETROL:

En Barrancabermeja hay lavado de activos, hay inversiones fuertes, y lo ha dicho el periódico Vanguardia Liberal de las inversiones que ha tenido el paramilitarismo en la economía, en lo que tiene que ver con sitios recreacionales, los moteles. Vanguardia Liberal lo que más releva son los permisos de venta de chances que aquí se llama Apuestas Unidas, también hay casas de empeño, compraventas, almacenes que venden a bajo costo, son abiertamente lavado de activos. Hay cobro de cuota extorsiva con las cargas impositivas que también le cobran a la gente común y corriente, pero también controlan el cartel de la gasolina, controlan el cartel del narcotráfico, controlan la contratación pública, de todos los municipios del Magdalena Medio y de las entidades estatales (...) se cree que en la refinería de Barrancabermeja ahora, que van a hacer unas obras allí, van a necesitar como dos mil personas, lo que se dice acá es que el Bloque Central Bolívar es el que tiene el control de quién va a trabajar y quién no.⁷⁶

Así mismo, poco a poco los paramilitares fueron copando diversos espacios de organización social como las Juntas de Acción Comunal y crearon sus propias organizaciones comunitarias. En estos últimos años, el paramilitarismo ha destruido organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, ha condicionado otras, o las han sustituido con la creación de unas nuevas versiones modernas de lo que significó ACDEGAN para el proyecto paramilitar⁷⁷, a través de la cuales han manejado dineros de la ayuda internacional y del Plan Colombia.⁷⁸

⁷⁵ Al respecto ver: Documento público de las AUC Barrancabermeja, febrero 2002.

⁷⁶ Entrevista BB-RM. Julio de 2005.

⁷⁷ La Asociación Civil por la Paz, ASOCIPAZ, nació después con las movilizaciones del “No al Despeje” para una posible zona de ubicación en el Magdalena Medio para iniciar conversaciones con el ELN.





... más o menos desde hace 5 años en el Magdalena Medio hemos visto florecer muchas organizaciones. AMIPAZ, que es la Asociación de Amigos de la Paz, creada en Ralito, de la cual el Alcalde de Barrancabermeja es el presidente de AMIPAZ y muchos de los alcaldes del Magdalena Medio hacen parte de esa organización, abiertamente. Aquí está CIVIPAZ, había otra desde la cual intentaban agenciar el desarrollo de la Cooperación Internacional que se llama CONSTRUPAZ, es un proyecto integral en lo social, en lo político y en lo económico. De alguna manera, los paramilitares han condicionado todo.⁷⁹

En lo referente a la participación política, es claro el copamiento de diversos escenarios en diferentes escalas; en las bases, las Juntas de Acción Comunal han sido escenario de despliegue y control hacia arriba; por otro lado, desde arriba, el proyecto paramilitar encuentra diversos apoyos, tanto directos, a través de políticos con proyección nacional, como indirectos: instituciones estatales, políticos y empresarios que respaldan el plan económico y político dispuesto para Barrancabermeja y el Magdalena Medio, facilitado a través del paramilitarismo.

En la parte de la democracia, los partidos de la Izquierda, los partidos democráticos fueron eliminados, la Unión Patriótica fue eliminada, el frente amplio de Magdalena Medio fue de alguna manera eliminado y otros sectores democráticos han tenido que cerrar sus puertas y de alguna manera los partidos tradicionales han sido sustituidos por el paramilitarismo. Acá en Barranca es de amplio conocimiento que ellos de alguna manera controlan y desarrollan sus actividades políticas desde Convergencia Ciudadana, dirigida por el Senador de la República, el doctor Alberto Gil, por aquí lo conocen con el nombre del tuerto Gil, entonces el paramilitarismo acá no tiene que crear ningún partido político, de alguna manera ya lo tiene (...) Los que tienen la posibilidad o los que quieren aspirar a cargos públicos aquí le tienen que pedir permiso a los paramilitares.⁸⁰

En medio de las relaciones que se tejen en diferentes escalas y las interacciones con los diferentes actores, se presentan contradicciones en los diversos actores sociales, lo que pone en evidencia la necesidad de mostrar las “zonas grises” en la relación entre el proyecto paramilitar, los paramilitares que actúan en la zona y la población barranqueña. Un ejemplo de ello es el paro que vivió Barrancabermeja en 2004 como protesta por la posible privatización de Ecopetrol. Una mirada simple al asunto, argumentaría que los paramilitares fueron espectadores ante la imposibilidad de controlar la abrumadora movilización de los pobladores de Barranca, ya que el accionar de los paramilitares -para esta mirada simplista- estaría a favor de los intereses privatizadores de la empresa estatal. Sin embargo, otro fue el panorama en Barrancabermeja, donde los paramilitares apoyaron la protesta, ya que, por un lado, la privatización de Ecopetrol pondría en riesgo el negocio de la gasolina, y por otro lado, perderían el monopolio en la contratación con la refinería.

⁷⁸ El periódico Vanguardia Liberal también hizo pública la forma en que las AUC cobraban impuestos a contratistas del Plan Colombia: “La Fiscalía General de la Nación investiga el secuestro masivo que habrían perpetrado las Autodefensas Unidas de Colombia cuando obligaron a 460 trabajadores contratados a través del Plan Colombia en Barrancabermeja, a viajar hasta San Rafael de Lebrija, donde les informaron que so pena de recibir sanciones drásticas, a partir de la fecha debían cancelar el 10% de su sueldo a esa organización al margen de ley”. 12 de febrero de 2002.

⁷⁹ Entrevista BB-RM. Julio de 2005.

⁸⁰ Ídem.





El apoyo a la protesta no solo favoreció los intereses económicos de los paramilitares que actúan en el puerto petrolero, sino que también los “sintonizó” paradójicamente con las reivindicaciones de la sociedad barranqueña en contra de las políticas del Estado; lo anterior, evidencia aun más la capacidad de adaptación en diferentes planos de un poder que ya no es solo militar sino también político, económico y social. Así mismo, visibiliza las contradicciones que se pueden presentar en la interacción estratégica de los diversos actores sociales.

De manera visionaria, el economista Libardo Sarmiento, en 1996, mucho antes de que el proyecto paramilitar penetrara en la ciudad, afirmaba:

La “tercera fase” del modelo está en su consolidación y legitimación. Una vez se consolide el modelo de “seguridad” en las regiones “liberadas”, sin subversivos ni bases comunitarias de apoyo, los paramilitares consideran que dejarán de ser una “rueda suelta para el Estado”. Allí se habrán construido las estructuras necesarias para la expansión victoriosa del capitalismo multinacional y nacional y el Estado “modernizante” podrá instalarse con el concurso asociativo del sector privado, los organismos no gubernamentales y las comunidades “organizadas”.⁸¹

Frente a la contundencia de esta afirmación y la corroboración en los hechos, no queda mucho más que agregar.



⁸¹ SARMIENTO ANZOLA, Libardo. Un modelo piloto de modernización autoritaria en Colombia. CREDHOS, Informe Vol. 1 N° 2 Barrancabermeja. 1996. Pág. 33.



CAPITULO III

MEDELLIN

1. CONTEXTO

Las diversas organizaciones guerrilleras que nacieron en los años sesenta y setenta, encontraron en Medellín jóvenes estudiantes, universitarios deseosos de llevar a cabo la gran transformación revolucionaria; en ese sentido, fueron muchos los que se trasladaron a las áreas rurales para promover la organización campesina, ya que, aunque se consideraba importante el trabajo de masas, el foquismo era una tendencia en auge y la tomaron como eje de las actividades iniciales, de ahí que la ciudad solo fuera importante en la medida en que apoyaba el trabajo en el área rural.

Sólo para citar un ejemplo: en Medellín, en 1968, se llevó a cabo la Conferencia Episcopal Latinoamérica, CELAM, donde se decidió impulsar con los jóvenes un trabajo para desarrollar las comunidades cristianas de base. Tal iniciativa se emprendió en el suroeste antioqueño donde se conformaron los JEC, Juventud Estudiantil Católica. Dentro de sus líderes estaban Ignacio Betancur, Fabio Arias y León Valencia:

En todo el suroeste armamos los grupos de la JEC. Después conformamos la Federación Estudiantil del Suroeste, FESO; a cada colegio le montamos su consejo estudiantil. En los temas organizativos nos ayudaban estudiantes de la Universidad de Antioquia y de otras universidades a través de los campamentos universitarios, que eran espacios de encuentro entre la universidad y el campo, donde los universitarios enseñaban a leer y escribir a los campesinos. Tal era el entusiasmo, que muchos estudiantes que venían de Medellín abandonaron la universidad para quedarse.⁸²

Como este, fueron múltiples los movimientos y pequeñas organizaciones que encontraron en Medellín, jóvenes dispuestos a engrosar sus filas. Solo hasta la década del ochenta, diferentes expresiones urbanas de los grupos guerrilleros empezaron a hacer presencia, sobretudo el EPL y el M-19, las cuales atacaron los grupos de delincuencia común desorganizada que para ese momento se hacían sentir en la ciudad.

⁸² Entrevista con León Valencia. Citado por: RESTREPO, Andrés. CONTRERAS, Marly. Flor de Abril. "La Corriente de Renovación Socialista: de la lucha armada, a la lucha política legal". Bogotá. Corporación Nuevo Arco Iris. 2000. Pág. 32





Más adelante, los *Campamentos Colombia* del M-19 se instalaron en los barrios Popular 1 y 2, al igual que en Bogotá Cali y Manizales. Se desarrolló un trabajo de entrenamiento militar como preparación para su pronta incorporación al ejército guerrillero, una vez rotos los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur. Sin embargo, muchos jóvenes entrenados permanecieron en las ciudades actuando en pequeños grupos delincuenciales que pronto se articularían en bandas que, con la emergencia del narcotráfico, entrarían en una dinámica de violencia y criminalidad sin precedentes en la historia de Medellín.

2. NARCOTRÁFICO Y MILICIAS: EL INICIO DEL FIN

Medellín presenció en la década del ochenta el crecimiento acelerado del negocio del narcotráfico. Toda una red de circuitos económicos asociada al negocio de la drogas, dio vida a una poderosa organización liderada por Pablo Escobar, que se expandió hasta tocar las fibras más profundas de la política, la economía y el control social de la ciudad. Sin embargo, de todos los efectos nocivos que el crecimiento del narcotráfico trajo consigo, el más evidente fue el de la violencia, que sumió en un juego de lealtades mortales a los jóvenes de los barrios populares de Medellín.

El sicariato y el terrorismo se convirtieron en la estrategia del Cartel de Medellín para “arreglar” sus disputas con todos sus contendores, incluyendo el mismo Estado. Los jóvenes sicarios perpetraron cientos de asesinatos de policías, jueces, políticos, pero también de competidores dentro del negocio, los llamados “ajustes de cuenta”, personajes involucrados en disputas personales, etc.⁸³ Así mismo, conformaron ejércitos privados que cumplieron diversas labores, entre ellas, la de combatir al M-19 por el secuestro de Marta Nieves Ochoa, que causó la práctica desaparición del M-19 en Medellín, y que posteriormente daría vida a la organización “Muerte a Secuestradores” (MAS), lo que pone en evidencia que en la interacción estratégica de los actores, muchas veces se dan acciones que pueden ser contradictorias -aunque el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado, con sus acciones realizó una labor de contra-insurgencia que cobraría unas dimensiones nunca imaginadas en los años posteriores-.

Las bases sociales que logró recoger el narcotráfico en Medellín se solidificaron con programas como “Medellín sin tugurios”, que ayudó, a Pablo Escobar, entre otras cosas, a obtener la suplencia de un escaño en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Cartel de Medellín, dada su estrategia terrorista para presionar cambios en políticas de gobierno como la no extradición, sumió a la ciudad y a sus jóvenes en una guerra sin cuartel, llegando a ser Medellín calificada como la ciudad más violenta del mundo.

De otro lado, las guerrillas, especialmente el ELN, en su interés por consolidar un trabajo político y militar en las ciudades, se dio a la tarea de conformar milicias urbanas que acompañaran el trabajo de las organizaciones sociales. En 1988, en el barrio Popular, surgen las primeras Milicias Populares de Medellín, al mando de Carlos Germán Correa, alias “Pablo”. Más adelante, en 1991, alias “Lucho” dio vida a las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que se establecieron en el barrio Villa del Socorro, y las cuales tenían como tarea fundamental, tejer redes de apoyo, presencia política y militar en las zonas



⁸³ SALAZAR, Alonso. No nacimos pa' semilla. Bogotá. CINEP.1989



centro y nororiental de la ciudad, que sirviera a su vez para establecer un canal de comunicación entre el trabajo urbano y el frente "Carlos Alirio Buitrago" del ELN que operaba en el oriente de Antioquia. Las milicias se establecieron en los barrios populares cumpliendo labores de seguridad (también incluyeron espacios o centros económicos como la Plaza Minorista), ejerciendo como mediadores de los conflictos vecinales, y ejecutando la famosa "limpieza social" asesinando ladrones, drogadictos, etc.

En 'Cabildos Populares' a los que citaban puerta a puerta, los milicianos divulgaban sus reglas de juego, normas que regulaban los aspectos más cotidianos de la vida de las comunas y hacían juicios contra los 'indeseables'. Hacían las veces de sicólogos, orientadores de familiares, jueces de paz y hasta de policías. Fueron convirtiéndose en una opción de orden en las comunas, suplantando al Estado en muchas de sus responsabilidades.⁸⁴

Rápidamente las milicias crecieron, incorporando -al igual que las bandas organizadas del narcotráfico- jóvenes de pequeños grupos delincuenciales, lo que ocasionó serios problemas de fragmentación y obediencia, que con el paso del tiempo, terminaron protagonizando continuos actos delictivos amparados en la estructura miliciana. Estos hechos fueron en buena medida los que evidenciaron la necesidad de buscar un proceso de negociación con el gobierno, porque además, existía en el país un "ánimo" de diálogo, debido a los acuerdos y desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19, EPL y Quintín Lame, además de las expectativas generadas en ese momento por las negociaciones con la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

El 26 de mayo de 1994 se firmó el "Acuerdo para la Convivencia Ciudadana", por medio del cual se desmovilizaron las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Metropolitanas y las Milicias Independientes del Valle de Aburrá. Las Milicias Populares del Valle de Aburrá lideradas por "Lucho" hicieron su negociación presentándose como parte de la estructura militar de la Corriente de Renovación Socialista que estaba en negociaciones con el gobierno nacional, tratando así de conseguir mayores beneficios políticos y económicos⁸⁵.

Ya dentro del proceso de reincorporación hubo anomalías, pues sus líderes fueron asesinados, decenas de milicianos fueron también asesinados, y los demás, entraron a hacer parte nuevamente de otros ejércitos, de la guerrilla o de organizaciones criminales.

Por ese entonces, con la llegada a la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez, se genera un crecimiento acelerado en la conformación de empresas de seguridad y ejércitos privados que cumplieron labores de vigilancia. Bajo esta modalidad, las labores de vigilancia y control social son asumidas por agentes privados asociados en cooperativas. Este primer experimento sería refinado, dando pie a la

⁸⁴ RESTREPO, Andrés. CONTRERAS, Marly. Op cit. Pág.111.

⁸⁵ "Sobre la base de intereses similares y con la ventaja de tener un origen común en el ELN, hicimos un acuerdo. A él le convenía negociar junto con personas que conocía y no hacerlo de manera solitaria. La Corriente le posibilitaría una salida a su situación personal y a la de su movimiento. La conveniencia era mutua: 'Lucho' tenía las armas y los hombres que necesitábamos en Flor del Monte y nosotros poseíamos la capacidad política que en esos momentos el requería." Fabián Tamayo, líder de la CRS. En: SALAZAR, Alonso. COSTELO, Paolo. LÓPEZ, Néstor. "Memorias de la Historia y el Proceso de paz de las Milicias Populares en Medellín". Manuscrito. Pág. 36.





propuesta de Seguridad Democrática que hoy propugna Uribe Vélez desde la Presidencia de la República; aunque las denominadas “Convivir” perdieron el piso jurídico que las respaldaba, la estrategia encontró en el paramilitarismo su reproducción inmediata. Paralelamente, tanto en la Comuna 13, como en la zona Nororiental de Medellín, se ubicaron grupos como los Comandos Armados del Pueblo (CAP) y milicias pertenecientes al ELN.

2.1. Paramilitarismo y lucha contrainsurgente: la guerra en la ciudad.

El proyecto paramilitar de Carlos Castaño se inicia en Medellín con el “Bloque Metro”, estructura militar de base y fundamentalmente rural, desplazada principalmente del Suroeste antioqueño; a este frente que llega a Medellín se le asignan comandantes urbanos con la tarea de cumplir las labores de contrainsurgencia y posicionar el proyecto en la ciudad.

Sus primeras incursiones las realizó en la Zona Centro-oriental de Medellín, especialmente en los barrios Caicedo-La Sierra, donde se enfrentó a las milicias “6 y 7 de Noviembre”. Debido a su tradición de grupo rural, el Bloque Metro estableció alianzas básicamente con el Ejército -no con la Policía-; así mismo, se apoyó -por la poca experiencia en el área urbana- en la banda delincuencia “La Terraza”, para realizar sus primeras incursiones en la Zona Centro-oriental, en la cual, se presentaba una presencia importante de milicias.

Los primeros enfrentamientos se ubican en 1999, sin embargo, su crecimiento y consolidación no se dieron de la manera esperada, en parte, porque sus alianzas resultaron bastante problemáticas: en primer lugar, la banda de La Terraza tenía discrepancias con la “Oficina de Envigado” -aunque realizaba trabajos para ella, exigía que le fueran asignadas algunas rutas del narcotráfico lo que causó una seria disputa-; en segundo lugar, el Bloque Metro no contaba con el apoyo de la Policía -la cual estaba más cercana a la Oficina de Envigado- lo que también significó un obstáculo importante para su despliegue en la ciudad.

El Bloque Metro no pudo golpear de manera importante a las milicias, porque no tuvo la suficiente capacidad para articular a su proyecto estructuras criminales preexistentes en la ciudad de Medellín, porque intentó desarrollar una estrategia fundamentalmente antisubversiva y la única posibilidad de crear un dominio territorial en Medellín era combinar una estrategia antisubversiva con una estrategia anti-criminal; es decir, había que golpear, coactar a las bandas en un primer momento, para después poder enfrentar a las guerrillas.

La banda de La Terraza se enfrentó a Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, en una guerra fundamentalmente por rutas del narcotráfico; en dicho enfrentamiento -en el cual se ubica la bomba al centro comercial El Tesoro- la banda de La Terraza fue perdedora -al ser asesinados o capturados la mayor parte de sus integrantes, afectando la alianza con el Bloque Metro el cual quedó solo. El lento crecimiento del Bloque Metro en la ciudad y los pocos resultados favorables frente a los grupos milicianos, llevó a tomar una de las decisiones más importantes para la dinámica del conflicto en Medellín: la venta de la “franquicia” paramilitar a alias “Don Berna”, quien sería desde ese momento el encargado de desarrollar la estrategia paramilitar en Medellín, y desde ahí, se empieza a denominar como “Bloque Cacique Nutibara”.





El Bloque Metro fracasa porque no puede controlar a La Terraza y porque siempre está en disputas con la Policía, por un asunto muy simple, porque como La Terraza era conector entre la Oficina de Envigado y el Bloque Metro, La Terraza tenía problemas con la Policía, y la Policía tenía alianzas con la Oficina de Envigado. Entonces el intento del Bloque Metro fracasa, porque de una u otra forma, no cuenta con el apoyo de la Policía, no cuenta con el apoyo de la Oficina de Envigado, termina apoyando un actor que tenía diferencias con ella (con la Oficina), y fundamentalmente, porque el tema de criminalidad y control territorial en los barrios de Medellín y los posibles ejércitos para enfrentar a las guerrillas se encontraban en las bandas, y quienes tenían mayor dominio sobre las bandas de Medellín era la oficina de Envigado y no La Terraza.⁸⁶

A diferencia del Bloque Metro que empezó por copar aquellas zonas de Medellín donde había presencia real de las guerrillas, el Bloque Cacique Nutibara inició copando las zonas donde había presencia de bandas, y ese es el cambio de estrategia que supone la entrada de “Don Berna”. Así, al golpear y cooptar las bandas en la ciudad, se va fortaleciendo el ejército paramilitar que poco a poco va entrando a disputar los barrios de tradición miliciana.

El Bloque Cacique Nutibara en un primer momento ocupó territorios con presencia de bandas, las puso a su servicio o las eliminaba, posteriormente, en un segundo momento empezó a copar territorio propiamente miliciano. Una de las disputas más importantes en el proceso de control de las bandas de la ciudad, fue la que se dio entre el Bloque Cacique Nutibara y la “Banda de Frank”⁸⁷, en la Zona Noroccidental- que limita con el municipio de Bello, enfrentamiento que culminó con la pérdida de poder de la banda en el sector y el fortalecimiento Bloque Cacique Nutibara.

2.2. El caso paradigmático de la Comuna 13.

Una vez consolidado su poder en la Zona Nor-occidental, el Bloque Cacique Nutibara, al igual que el Ejército, empezó a incursionar en el 2001 en la Comuna 13, lugar donde tenían presencia los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que se habían consolidando durante la década del noventa a través de una oferta de seguridad para el sector, desarrollando trabajo de “limpieza social” y operando como “contención” de la dinámica de las bandas y el sicariato vinculado al narcotráfico que operaba en el resto de la ciudad. Más adelante, sobre todo a partir de 1997, las milicias del ELN y las FARC incursionaron en este espacio, dándose enfrentamientos entre ellas por el control de territorios.

La Comuna 13 es un área estratégica para la realización de megaproyectos que involucran, no solo a la ciudad, como la construcción de la Circunvalar Metropolitana Occidental, sino también a la región antioqueña en general, ya que es el lugar de conexión con el Túnel de Occidente que comunica a Medellín con Urabá y el occidente del país. Los intereses económicos que involucran este tipo de proyectos se enmarcan en los procesos de planeación “Antioquia siglo XXI” y proyectan la región

⁸⁶ Entrevista. M-MA julio de 2005.

⁸⁷ Numerosas masacres se vivieron en el marco de este enfrentamiento, sobre todo en la primera mitad de 2001, algunos de los barrios afectados en esta disputa fueron los ubicados en la Comuna 8 y el barrio París del municipio de Bello, limítrofe con Medellín.





como “La mejor esquina de América”⁸⁸. Lo anterior, sumado al hecho de haber sido considerada la Comuna 13, como un sector donde el poder miliciano era hegemónico,⁸⁹ la convirtió en la pieza clave de la lucha contrainsurgente en Medellín, tanto desde la Administración Municipal, como desde de la presidencia de Uribe Vélez en 2002, recién posesionado en el poder.

El copamiento paramilitar acordonó se desplazó hasta el Corregimiento de San Cristóbal y el sector de Aguas Frías, sectores aledaños a la Comuna 13, entre tanto, fueron frecuentes los operativos policiales y militares como una manera de hostigar a las milicias del sector; a la par, las amenazas por medio de volantes, anunciaban el “exterminio” de los guerrilleros de la zona.

La “Operación Mariscal” fue la primera gran incursión conjunta del Ejército nacional, la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía, el CTI, la Procuraduría y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) a la Comuna 13. Los enfrentamientos iniciados en la madrugada del 21 de mayo de 2002, y que se extendieron hasta la tarde del mismo día, tuvieron lugar en los barrios 20 de Julio, Las Independencias, El Salado y Nuevos Conquistadores. En el operativo intervinieron francotiradores y fueron utilizadas armas de largo alcance; así mismo, se realizaron retenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial por parte de las fuerzas armadas del Estado; se disparó en ciertos momentos indiscriminadamente contra la población civil y fue utilizado un hospital del sector como centro de operaciones.

A pesar del fuego cruzado, los habitantes del sector salieron a las calles con banderas blancas, pidiendo el cese al fuego y buscando la protección de organizaciones de derechos humanos que pronto se hicieron presentes en el sector junto con los medios de comunicación regionales y nacionales, con lo que se vio impedida la continuación de los operativos. Ante el caos reinante, a las tres y media de la tarde se dio por terminada la incursión de las fuerzas del Estado.⁹⁰

Con la “Operación Mariscal”, se puso en evidencia el accionar irregular de la fuerza pública y las violaciones a los derechos de la población civil; por su parte, los CAP, las milicias del ELN y las FARC siguieron operando y se fortalecieron en la espera inminente del regreso (según entrevistas realizadas, las FARC ingresaron al sector combatientes del frente noveno).

⁸⁸ Programa de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia. Los megaproyectos de desarrollo como telón de fondo del conflicto en la Comuna Trece de Medellín. En: Noche y Niebla. “Comuna 13, la otra versión”. Bogotá. CINEP-Justicia y Paz. 2003. Págs. 45-48.

⁸⁹ De hecho, sus pobladores, pero sobre todo los jóvenes, tuvieron que sufrir la estigmatización, la represión y la persecución, no solo de las autoridades y los paramilitares sino también del resto de la ciudad y del país en general que consideraba a la Comuna 13 como un “nido de guerrilleros”, imagen dada por los medios de comunicación como justificación al escalamiento del conflicto en el sector. Al respecto, ver: HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra Miled. Como se ven, como los ven, como los leemos... los jóvenes de la Comuna Trece”. En: “**Jóvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusión**”. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Instituto Popular de Capacitación - IPC. Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI. Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes PCUJ. 2005.

⁹⁰ Un informe pormenorizado de los acontecimientos puede encontrarse en: Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones. “De la Urbe, periodismo universitario para la ciudad”. Año 4. No. 15. Medellín. 2002. Así mismo: Programa de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia. “Operación Mariscal... de campo arrasado”. En: Noche y Niebla. “Comuna 13, la otra versión”. Op cit. Págs. 14-17.





Con el nuevo bloque en el poder, en cabeza del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se inició la preparación del más grande operativo librado en la ciudad de Medellín: la “Operación Orión”, que inició el 16 de octubre de 2002.

En este operativo participaron las mismas fuerzas de seguridad que ejecutaron la “Operación Mariscal”, pero se sumaron civiles encapuchados que señalaron los “supuestos” milicianos o colaboradores, los cuales, fueron objeto de graves atropellos, retenciones arbitrarias o ataques directos.

Por ejemplo, nos cogían y nos filaban y traían a alguien encapuchado y lo paraban ahí en frente, y que señalara a cuál de esos se llevaban, pues muy maluco uno estar ahí parado sin saber quién está ahí encapuchado mirándolo a uno y que diga: “usted”, claro que a ninguno, pero en todo caso eso produce mucho temor que alguien esté ahí acusándolo... Eso lo hicieron como cierta cuestión: por ejemplo, si yo le tengo bronca a usted y tengo esta oportunidad, listo, yo lo señalo y digo: este es, este es y este es y allá se va, inocentemente.⁹¹

Se utilizaron nuevamente armas de largo alcance, francotiradores y helicópteros artillados que dispararon indiscriminadamente; las retenciones arbitrarias fueron constantes al igual que los allanamientos sin orden judicial por parte de las fuerzas armadas del Estado. Todos estos hechos realizados por la Fuerza Pública durante la “Operación Orión”, que se inició el 16 de octubre de 2002 y se extendió durante los meses de noviembre y los primeros días de diciembre, pusieron nuevamente en evidencia las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte del Estado en la Comuna 13.

Terminada la “Operación Orión”, junto a la presencia del Ejército y la Policía, los paramilitares empezaron a ocupar la zona. Aunque no se presentaron combates posteriores, fueron constantes las amenazas -sobre todo a hombres y mujeres líderes de organizaciones comunitarias- las desapariciones, los asesinatos selectivos, el desplazamiento intraurbano, así como la persecución hacia aquellas personas que se atrevieron a denunciar los graves hechos ocurridos durante este operativo.⁹²

2.3. Después de la Comuna 13: poder hegemónico e institucionalización paramilitar.

En la medida en que se consolidó el poder paramilitar en la Comuna 13, las fuertes medidas de control social se fueron acoplando a las viejas dinámicas barriales. El poder de las armas sirvió para restaurar

⁹¹ Citado por: HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra Miled. “Como se ven, como los ven, como los leemos... los jóvenes de la Comuna Trece”. Op cit.

⁹² Es el caso de tres mujeres, pertenecientes a la Asociación de Mujeres de la Independencia (AMI), las cuales, denunciaron ante el Secretario de Gobierno Municipal, el 8 de noviembre de 2002, las desapariciones y asesinatos que se estaban presentando en el barrio. A la semana siguiente, el 12 de noviembre, fueron “capturadas” por la Fuerza Pública sin ninguna orden judicial, después de que fueron señaladas por un encapuchado que llevaron hasta el barrio. Al poco tiempo, ante la falsedad de las acusaciones, fueron liberadas después que su caso fue denunciado por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los meses posteriores, una de ellas, Teresa Yarce, sería asesinada por los paramilitares presentes en la zona. Entrevista M-N Julio de 2005.





el “orden cívico” que por décadas habían construido los habitantes del sector,⁹³ el cual, en medio del escalamiento del conflicto en la zona, había tomado otros matices. Por ello, los nuevos códigos de conducta no se hicieron esperar: los jóvenes “debían acostarse temprano”, las niñas no debían usar blusas “ombligueras” ni los chicos aretes o pantalones anchos. Eran órdenes imperativas que debían ser acatadas, so pena de castigos aleccionadores.⁹⁴ Unido a lo anterior, el robo de gasolina sirvió para tejer lealtades de otro tipo, al posibilitar salidas -aunque ilegales- a las graves condiciones económicas que viven la mayor parte de los habitantes de la Comuna 13.

En este contexto, los jóvenes son reclutados con ofrecimientos, no solo económicos, sino también con la propuesta de formar parte de los ejércitos que se desmovilizarían en un futuro cercano, de ese modo tendrían, gracias a los programas de reinserción, estudio y trabajo garantizados por el gobierno. De otro lado, de la fase militar pasaron a penetrar las organizaciones sociales comunitarias o a formar las propias (como cooperativas de servicios) donde se articulan al trabajo de las Juntas de Acción Comunal. Allí, varios líderes han sido amenazados, otros tantos, han sido cooptados formando sus propias redes de intermediación clientelar.

Entre tanto, en otros sectores de la ciudad, los operativos de la Fuerza Pública atacaron puntos claves, donde se tuviera información de algún tipo de presencia miliciana. Sin embargo, estos operativos terminaron por atacar a líderes barriales o de organizaciones comunitarias, debilitando su capacidad de asociación y movilización, por el temor al señalamiento como insurgentes y a convertirse en objetivo militar de los ataques paramilitares. Un caso claro fue el de La “Operación Estrella”, en enero de 2003, en el cual fueron detenidos los líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, MOSDA, que fueron detenidos y sindicados por rebelión, homicidios y desplazamiento forzado.⁹⁵

Durante el segundo semestre de 2003, se anunció la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y rápidamente fueron concentrados más de 850 personas en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño. A pesar de las numerosas denuncias por el reclutamiento que en días anteriores se había realizado en diferentes barrios populares de Medellín, el gobierno continuó con el proceso y el 25 de noviembre de ese mismo año, se declaró oficial la desmovilización de 871 miembros del Bloque Cacique Nutibara. Como lo señaló el Instituto Popular de Capacitación – IPC,⁹⁶ al cumplirse el primer año de la desmovilización de este bloque, la impunidad fue el sello distintivo de este proceso: pues 360 de los 871 desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, ya contaban con procesos jurídicos en curso, sindicados en su mayoría de narcotráfico y hurto calificado; de ellos, sólo 27 se encontraban en la cárcel (a

⁹³ La tradicional defensa del territorio a la que se vieron enfrentados los pobladores de la Comuna 13, desde sus inicios, se apoyó en autodefensas comunitarias, labor que más adelante cumplirían las milicias populares. La misma construcción de los barrios, creó fuertes lazos comunitarios con un orden cívico férreo, donde la drogadicción, la prostitución o el pandillaje no fueron permitidos.

⁹⁴ Es importante reconocer en todo caso, que aunque muchos pobladores se resistieron al dominio paramilitar, muchos otros “agradecieron” la presencia de otro actor hegemónico que lograra “meter en cintura” a los jóvenes; porque en palabras de uno de los pobladores de la comuna: “los muchachos (milicianos) ya estaban abusando”.

⁹⁵ Programa de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia. En: Noche y Niebla. “Comuna 13, la otra versión”. Bogotá. CINEP-Justicia y Paz. 2003. Págs. 31-32.

⁹⁶ BALBÍN ÁLVAREZ, Jesús William. “Desmovilización: un año de espejismos”. 25 de noviembre de 2004. Disponible en el sitio web del IPC (www.ipc.org.co)





un año de su desmovilización), y a los restantes 514 desmovilizados no se les inició ningún proceso investigativo que permitiera procesos de verdad, de justicia y reparación.⁹⁷

El jefe político del Estado Mayor Regional del Bloque Cacique Nutibara, “Comandante R”, afirmó haber dejado una ciudad pacificada y consideró la desmovilización del bloque como el “proyecto piloto” de la desmovilización general de las AUC:

“Entregamos unas comunas en paz. Los conductores de taxis y de buses, en una muy buena magnitud, pueden trabajar en toda la ciudad. Hay mucha más tranquilidad. De las bandas hicimos un proceso de regulación y de reconversión, para que no se siguieran matando entre sí, se hizo un trabajo para que no siguieran violentando a sus comunidades. Otra de las cosas es que se acabaron las fronteras entre las comunas, hoy ya no jugamos a la guerra sino a la paz.”⁹⁸

Desmovilizado el Bloque Cacique Nutibara, fue el “Bloque Héroes de Granada”, como expresión armada, la que hizo presencia en la zona metropolitana de la ciudad al mando de alias “Daniel”. Para contextualizar: el Bloque Héroes de Granada es la primera expresión rural del Bloque Cacique Nutibara, o sea, el desdoblamiento que de Medellín hizo alias “Don Berna” cuando fue ampliando sus ejércitos hacia el Oriente antioqueño, en la disputa por los territorios de influencia del Bloque Metro. También conformó “Héroes de Tolová” y compró la franquicia del “Bloque Pacífico” junto a alias “Gordo Lindo”.

El control que continuó ejerciendo en la ciudad se hizo evidente cuando el 28 de mayo de 2005 se paralizó el 90% de la ciudad, donde más de 160 rutas de buses no prestaron sus servicios, gracias al control que en las terminales y frente a los despachadores han ejercido, y lo siguen haciendo, las bandas que se articularon al Bloque Cacique Nutibara. Esta acción fue una muestra del poder que Diego Murillo, alias “Don Berna” (también conocido como “Adolfo Paz”), ha consolidado en estos últimos años, y un desafío a la justicia que le dictó una orden de captura por el asesinato de Orlando Benítez.

Después de una entrega voluntaria al gobierno, alias “Don Berna”, anunció la desmovilización de los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada y el Bloque Pacífico. El 1º de agosto de 2005, 2.033 integrantes del Bloque Héroes de Granada se desmovilizaron en la finca *La Mariana*, Corregimiento de Cristales, del municipio de San Roque (Antioquia). De estos desmovilizados, solo 30 serían procesados por algún tipo de delito, lo que pone en evidencia, aún más, la ineficacia e impunidad que alimenta la ley de Justicia y Paz.

Contrario al entusiasmo de muchos sectores económicos y políticos a los cuales les interesa mostrar la “cara amable” de “la ciudad de la eterna primavera”, lo cierto es que: en primer lugar, las redes mafiosas de la “Oficina de Envigado” siguen funcionando; en segundo lugar, se presenta una reactivación de las bandas que empiezan a funcionar independientemente, aprovechando el dominio que habían logrado gracias al “respaldo” que les proporcionó el ayudar a extender el proyecto paramilitar en la ciudad; en tercer lugar, y más importante que los dos anteriores, es la penetración de organizaciones sociales y comunitarias donde se lleva a cabo un trabajo social y político.

⁹⁷ Ídem.

⁹⁸ Comandante R. Entrevista disponible en la página web del Bloque Central Bolívar. www.bloquecentrlobolivar.org





Las redes mafiosas de la “Oficina de Envigado” tienen el control de los circuitos económicos ilegales como la distribución de drogas; así mismo, el lavado de activos provenientes del dinero del narcotráfico se da en la ciudad por medio del control de las casas de chance, estaciones de gasolina, entre otros negocios. En un nivel inferior, las bandas, que hicieron parte de la estructura que extendió el proyecto paramilitar en la ciudad, han recobrado parcialmente su autonomía, reanudando las prácticas delictivas que obedecen a las lógicas del crimen organizado, sin desarticularse totalmente de la “Oficina de Envigado”, a la cual le sirven de apoyo para trabajos específicos y mantienen condiciones de “seguridad” en la ciudad.

De otro lado, el proyecto paramilitar en Medellín ha pasado a una fase de legitimación en las esferas sociales y políticas. Aunque no pueda reprocharse el hecho de que los desmovilizados participen en los escenarios de organización política y social, lo que sí es censurable son las prácticas intimidatorias que se utilizan en contra de aquellos líderes comunitarios que no son apoyados por sus estructuras; prácticas que son efectivas, entre otras cosas, porque han logrado instalar en el imaginario de los pobladores el respaldo de una organización mayor (que aún está armada) y con la cual comparten su proyecto político de Derecha. ¿Cómo es posible entonces suponer, que se entra al juego democrático en igualdad de condiciones cuando (aunque una parte esté desmovilizada) sus principales militantes, no sólo están armados, sino que también hacen parte de un ejército vencedor?





CAPITULO IV

BOGOTÁ

1. CONTEXTOS

1.1. En el Distrito Capital.

Bogotá, capital del Departamento de Cundinamarca y de Colombia, como centro del poder y principal escenario de aglomeración del país es, sin lugar a dudas, el objetivo final de todas las fuerzas militares y políticas para consolidar su poder y dominación. Los actores armados legales e ilegales, en diferentes tiempos, han encontrado en Bogotá el sello del triunfo político y militar. En ese sentido, han tejido a lo largo de décadas estrategias de desdoblamiento, tratando de encerrar desde afuera a la capital, y por medio de un trabajo de milicias (en el caso de la insurgencia), minar desde dentro el orden establecido.

Los barrios del sur de la capital cuentan, al igual que la historia de las principales ciudades del país, una tradición de lucha por la tierra y por el derecho a la ciudad. Los barrios de invasión fueron poblados en contra de las autoridades y propietarios, de los cuales se defendieron usando métodos violentos, tratando de configurar un orden comunitario que garantizara su supervivencia en la ciudad. La capital de Colombia, en su periferia, ha vivido la configuración de órdenes alternos al estatal, que garantizan condiciones de seguridad necesarias para el crecimiento y consolidación de los barrios marginados; allí, la presencia permanente, no sólo de la insurgencia, sino también de diferentes formas de violencia organizada, ha realizado esta labor de control y organización comunitaria, aunque no han consolidado dominios claros y permanentes a diferencia de otras ciudades del país como Medellín, Cali o Barrancabermeja.

Aunque la capital ha presenciado desde los años cincuenta diferentes formas organizativas insurgentes y contrainsurgentes, en el mediano plazo, específicamente en la década del ochenta, el M-19 y la ADO, protagonizaron numerosos actos publicitarios en los barrios marginados como robos de camiones distribuidores de leche para luego repartirla entre los pobladores, asaltos a repartidores de dulcería para repartir confites a los niños en días festivos, etc. También, el M-19 realizó actos militares de gran envergadura en la capital del país como la toma de la embajada de la República Dominicana





en 1981 y la toma del Palacio de Justicia en 1985. Así mismo, los Campamentos de Paz del M-19 en Bogotá tuvieron como escenario los barrios Lucero Alto y Jerusalén, allí se dieron dinámicas de reclutamiento y entrenamiento militar. Con la desmovilización del M-19 en 1990, fue la influencia de las milicias, especialmente de las FARC, la encargada de “hacer sentir” la guerra en la ciudad en la década del noventa.

1.2. Contexto de la guerra en el Departamento de Cundinamarca.

Las FARC, en la gran expansión que vivió entre 1995 y 1998, lograron concretar un anillo alrededor de Bogotá: la actuación del Frente 42 en Cundinamarca, el corredor que comunicaba a Sumapaz con el Caguán, en Bogotá, la “Red Urbana Antonio Nariño” (RUAN), fueron muestra del crecimiento y consolidación de sus lineamientos estratégicos trazados desde la Conferencia de 1982; en dicha Conferencia Bogotá fue considerado el centro del despliegue por la Cordillera Oriental, en un corredor que se extendía hasta la frontera con Venezuela.⁹⁹

Para 1998 el fortalecimiento de las FARC en Cundinamarca daba cuenta de siete frentes (22, 25, 51, 52, 53, 54, y 55) pertenecientes al Bloque Oriental¹⁰⁰. En el 2000, se le habían sumado tres frentes más (42, 65 y 31), la columna “Che Guevara” y tres frentes móviles (“Manuela Beltrán”, “Policarpa Salavarieta” y “Abelardo Romero”)¹⁰¹. Para esta época el frente 22 tenía la mayor influencia en el occidente y centro de la Sabana de Cundinamarca, el frente 22 “Simón Bolívar”, era a su vez el más antiguo (conformado en la década del setenta), y fue el encargado de desdoblarse desde el noroccidente hasta el suroccidente del departamento, trazando un corredor que cubría las provincias de Sumapaz y Tequendama; así mismo, el frente 22 era el más importante en la obtención y manejo de recursos provenientes principalmente del secuestro¹⁰².

De otro lado, en 1998 comenzaron a hacer su aparición en Cundinamarca los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare, quienes ejecutaron en enero de ese año la primera masacre en el municipio de Paratebuena¹⁰³. Así mismo, actuaban en la región, paramilitares del Magdalena Medio al mando de alias “Botalón”, y los ejércitos paramilitares relacionados con el negocio de las esmeraldas.

En la ciudad de Bogotá y las cabeceras de los municipios aledaños operaban por parte de la guerrilla, los Comandos Urbanos, las Uniones Solidarias Clandestinas y la Red Urbana Antonio Nariño¹⁰⁴. Finalizando la década del noventa, empezó a operar en Bogotá el “Bloque República”, perteneciente a las

⁹⁹ ECHANDÍA, Camilo. Expansión territorial de las guerrillas colombianas. En: Maria Victoria Llorente. Malcom Deas (comp.). “Reconocer la guerra para construir la paz”. Bogotá. CEREC.1999.

¹⁰⁰ *Ibid.* Pág.109.

¹⁰¹ Atlas del Conflicto Armado y la Violencia en Cundinamarca. Instituto de Estudios por la Paz, la Democracia y Convivencia en Colombia. Bogotá. Octubre de 2000.

¹⁰² PEÑA, Carina. La guerrilla resiste muchas miradas. El crecimiento de las FARC en los municipios cercanos a Bogotá: Caso del Frente 22 en Cundinamarca. En: Análisis Político. IEPRI. Universidad Nacional. Bogotá. N° 32. Septiembre/Diciembre. 1997.

¹⁰³ QUIÑONES, Adriana. Dimensión Regional de los Paramilitares en Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá. Marzo de 2000.

¹⁰⁴ *Ídem.*





Autodefensas Campesinas de Casanare al mando de Martín Llanos. Este grupo paramilitar realizó algunas masacres y asesinatos de jóvenes desde 1998 hasta los primeros años del 2000, aunque no pudo consolidar dominios estables debido a la presencia y expansión de grupos guerrilleros y otros grupos paramilitares.

El “Bloque Capital” se conformó como una estructura militar diseñada para extender el proyecto paramilitar en la ciudad de Bogotá, que hace parte a su vez del “Bloque Centauros”. Su jefe máximo, Miguel Arroyave, fue sindicado del delito de venta de químicos para el procesamiento de narcóticos y estuvo preso durante tres años. Al salir, en 2001, Miguel Arroyave, compró la franquicia del Bloque Centauros, negociación que se realizó con las Autodefensas Campesinas de Casanare, el Bloque Central Bolívar y con “Los Carranceros” propiedad de Víctor Carranza, y que se mueven en las zonas de los departamentos del Meta, Cundinamarca y Casanare.

A inicios de 2002, rotos los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, estas últimas arremetieron sus ataques en Cundinamarca, la destrucción de infraestructura (explotaron torres de energía, puentes, gasoductos, torres de comunicación) así como las arremetidas a estaciones policía, fueron constantes durante la primera mitad de ese año. Para ese momento, Miguel Arroyave, había comprado su participación en la zona del Meta, pero su misión era penetrar a Bogotá, por ello, se emprende una movilización desde los Llanos, que coincide con la ofensiva militar que después del segundo semestre de 2002 inició el Ejército Nacional.

Como se relata en un testimonio:

Los paras llegaron a la zona bajándose todo el que les oliera a insurgencia. Ahí cayó mucha gente que no tenía nada que ver. Es cierto que muchos si eran campesinos de día y guerrilleros por la noche, pero a esos no los mataron. Esos están metidos en el monte... fueron los primeros que se fueron.¹⁰⁵

Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se empezó a delinear la más importante ofensiva desarrollada por las Fuerzas Militares en Cundinamarca. Durante 2002, las fuerzas militares actuaron principalmente en el oriente del departamento y parte del occidente, pero el 2003 representa el año decisivo en la lucha contrainsurgente, con una ofensiva militar contra guerrillera de parte de las Fuerzas Militares en el marco de la “Operación Libertad Uno”.

La ofensiva de las Fuerzas Armadas, tal y como lo señala el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, se caracterizó por un incremento significativo en el número de combates, más que bajas efectivas en las filas guerrilleras. La eficacia de las acciones desarrolladas en el 2003 consistieron en el hostigamiento permanente del ejército por medio de combates permanentes hasta lograr el rompimiento de los corredores, tanto en el oriente como en el occidente (que durante más de dos décadas habían trazado poco a poco las FARC), así mismo, fueron muy importantes la desarticulación de redes en todo el departamento, la baja de comandantes de frente que eran importantes militar y políticamente para las FARC.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de Cundinamarca. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2003. Pág. 40.

¹⁰⁶ *Ibid.* Págs. 50-54.





Después de la primera mitad de 2002, y especialmente en 2003, en el marco de la ofensiva antissubversiva, las FARC pasaron de una estrategia ofensiva a un repliegue estratégico; sin embargo, el Frente 22 fue seriamente golpeado militarmente (este frente perdió a dos de sus comandantes, cuadros muy importantes dentro de la estructura militar de las FARC), su principales redes de apoyo fueron capturadas, lo que llevó a la práctica desarticulación del frente y de paso con un negativo impacto económico en las FARC, ya que el Frente 22 manejaba recursos cuantiosos, derivados principalmente del secuestro.¹⁰⁷

Paralelo a la “Operación Libertad Uno” se dio un copamiento paramilitar en el departamento, el Bloque Centauros incursionó en Cundinamarca disputando a las Autodefensas de Casanare sus dominios y logró, junto a las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Magdalena Medio (BMM), el Bloque Héroes de Gualivá, Héroes de Boyacá y las Autodefensas de Yacopí, delinear un anillo de seguridad para Bogotá¹⁰⁸.

2. “BLOQUE REPÚBLICA” VS. “BLOQUE CAPITAL”: LA DISPUTA POR EL DOMINIO

En 2002 la disputa entre el Bloque Centauros y las Autodefensas de Casanare se manifestó en Bogotá con la creación, por parte de Centauros, del “Bloque Capital”, lo que marcó a su vez el inicio de un escalamiento del conflicto localizado en la ciudad. El Bloque Capital se desplazó desde la región del Sumapaz hacia Soacha, combatiendo, tanto al Bloque República como a las milicias guerrilleras. Así, Soacha fue el primer fortín de los paramilitares -línea Centauros- hacia Bogotá, específicamente en el sector del Alto de Cazucá, donde se dieron una serie de amenazas, masacres, asesinatos selectivos y desapariciones a lo largo de 2002. La importancia geoestratégica de Soacha radica en que ésta conecta con la autopista hacia Bogotá, así mismo es vía hacia el Departamento del Meta y permite la entrada a un corredor de las FARC que los comunicaba con la antigua zona de desmovilización de El Caguán.

En 2003 se consolidó el dominio del Bloque Capital en Soacha, y se empezó a extender hacia Bogotá, expansión que se dio en octubre, paralela a la ofensiva del ejército con la Operación Libertad Uno, y la posterior ubicación del Batallón de Alta Montaña en Sumapaz, así como el copamiento del paramilitarismo en Cundinamarca. Todos estos hechos ayudaron a romper los canales de comunicación tradicionales entre los corredores de las FARC y sus redes urbanas en Bogotá. El éxito de la avanzada del Bloque Capital en 2003 fue expresada por el propio Martín Llanos quien afirmó:

Hace dos años en Bogotá abrimos una campaña contra las milicias guerrilleras teniendo muy buenos resultados en esta misión. De un año para acá, el Bloque Centauros, al mando de Miguel Arroyave, penetró en las zonas que protegíamos... de manera que se nos volvió un problema grave... y en los primeros meses del año tomamos la decisión de replugar nuestras pocas unidades.¹⁰⁹

¹⁰⁷ PEÑA, Carina. Op cit.

¹⁰⁸ La ubicación de los diferentes bloques paramilitares en 2003 puede encontrarse en: Observatorio. Op cit. Págs.30-34.

¹⁰⁹ Declaraciones de Martín Llanos a *The Miami Herald* en octubre de 2003. Citado por: Observatorio. Op cit. Págs. 65-66





El control de los corredores de movilidad hacia la capital es clave para romper las estructuras tradicionales de la guerrilla y, para ese momento, el objetivo primordial era quebrar el canal de comunicación hacia El Caguán, logrando el posicionamiento y control del territorio que va expandiéndose hacia Bogotá, empezando por Ciudad Bolívar. Tanto en Soacha como en Ciudad Bolívar, las FARC tenían ubicados hospitales clandestinos, y operaban redes de apoyo para la consecución de víveres y recursos; así mismo, era una importante zona de movilización, entrada y salida de Bogotá, cuya responsabilidad fundamental era de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN).

A partir de 2002 empieza la expansión del Bloque Capital en Bogotá, arranca con cerca de 60 u 80 hombres y empiezan a hacer una serie de acciones en ese límite entre Soacha y Ciudad Bolívar, límite que no existe en realidad más allá de un señor que se para a vender en una casetita dulces, y si el hombre no está parado, la única manera de reconocer dónde es Soacha y dónde es Bogotá es un poste, es una cosa muy simpática, esta es la división, de aquí para allá es Bogotá, y de aquí para allá es Soacha, y empiezan una serie de muertes, desapariciones, amenazas, tanto así, que para 2003, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Personería local se reciben cerca de 76 denuncias por vulneraciones de derechos a población civil en relación con los actores armados.¹¹⁰

Ciudad Bolívar tiene una ubicación central en el sur de Bogotá; desde ahí pueden desplazarse hacia las localidades del oriente y occidente, lo que la convierte en un territorio que permite una alta movilidad y un posicionamiento importante. En octubre de 2003, cuando se inició la entrada del Bloque Capital, se retiró del barrio Potosí, en Ciudad Bolívar, la fuerza de tarea del Ejército “Dragón Rojo”, este hecho es importante en la medida en que no sólo se desconoce por parte del Ejército la labor de protección a la población civil, que deben cumplir en un momento de alta inestabilidad, privilegiando las tácticas contrainsurgentes y permitiendo la avanzada paramilitar, para atacar los reductos que pudieran quedar de la RUAN en la localidad.

El copamiento del Bloque Capital en Ciudad Bolívar se dio de la misma forma que en Soacha, por medio de un escalamiento en el número de asesinatos -sobre todo a la población joven del sector- desapariciones y amenazas; posteriormente contrataban a las mismas pandillas y pequeñas bandas que operan en el sector para realizar asesinatos y cumplir una labor de información, fundamental debido a la alta movilidad que presenta la localidad, pues recibe aproximadamente más del 25% de la población desplazada que llega a Bogotá.

Ellos empiezan a pegarle muy duro a jóvenes porque los jóvenes son los que más se asocian con los grupos de guerrilla y a través del dinero vinculan bandas: “le vamos a dar \$300.000 y por cada pisco que usted me traiga se gana una bonificación extra”. Entonces empieza una cosa de “echar dedo”¹¹¹ brutal en la localidad, empiezan los pelaos a “darse dedo” de una manera indiscriminada, porque básicamente lo que dicen: “usted trabajaba con guerrilla, le vamos a dar esta alternativa: usted trabaja con nosotros para que usted nos diga quiénes eran los que estaban con guerrilla o le “damos piso”¹¹². Entonces ahí empieza todo el exterminio y la problemática de jóvenes que tenemos hoy en día.

¹¹⁰ Entrevista B-A. Julio de 2005.

¹¹¹ “Dar dedo”: expresión popular que significa “acusar a otros”. (Nota del editor)

¹¹² “Dar piso”: asesinar. (Nota del editor)





Una vez se tiene el control de las pandillas de los barrios se oferta la prestación de seguridad, cumpliendo con las mal llamadas labores de “limpieza social”, asesinando ladrones, prostitutas, etc., y se enfrentan o cooptan bandas organizadas las cuales entran a formar parte de su estructura. De igual modo, se presentaron amedrentamiento a organizaciones sociales, comunitarias, población desplazada, así como amenazas y asesinatos a diferentes líderes locales.

Inicialmente contratan matoncitos que maten para ellos, luego comienza todo el control de las bandas locales, las banditas chiquiticas las matan, las que tienen alguna fuercita las negocian. Tienen una modalidad: primero son sicarios que no son de las zonas que matan gente, muchos pelaos pero también en ese momento muchos líderes sociales, luego utilizan una modalidad de pistoleros locales pero que no son gente de estructura, pero ellos controlan y reportan a un mando sus acciones, pero tienen la ventaja de que si los cogen no son gente de ellos, son delincuentes locales, son pandillitas y matoncitos pero que no son el mismo sicario de antes que era un man de afuera que traían para matar, es un man de la zona, no opera como AUC pero trabaja para ellos, ellos le pagan por lo que hacen, luego ya a las bandas más fuertes, ya habían bandas, sobre todo en Ciudad Bolívar o en Soacha que eran delincuencia común pero tenían capacidad de cobrar impuestos, ellos, como particular vendían ofertas de seguridad a los tenderos, es el caso Gari, que es un desplazado que llega a Ciudad Bolívar de la zona de Tolima, desplazado por la guerra y que arma una bandola y comienza a vender seguridad y se vuelven matones y luego comienza a cobrarle a los tenderos por la seguridad que él presta, cuando ellos encuentran una banda como la de Gari que son bandas grandes, lo que hace son negociarlos y los meten a la estructura paramilitar, por eso luego Gari aparece como un comandante paramilitar del frente Capital en Bogotá, pero estos ya son manes que entran a la estructura paramilitar y ya comienzan a operar como AUC.¹¹³

Paralelamente al copamiento militar de Ciudad Bolívar, el Bloque Capital le quitó al Bloque República el control sobre un sector muy importante para el lavado de activos que son los “Sanandrecitos”,¹¹⁴ los cuales, para 2003, se habían convertido, no solo en un recurso importante para legalizar activos provenientes del narcotráfico, sino también se convirtieron en la plataforma para el despliegue del copamiento en los sectores de economía informal. En 2004, esta ocupación se dio desde los Sanandrecitos extendiéndose hacia el sector comercial de San Victorino, ventas ambulantes, plazas de mercado, sectores comerciales pequeños dentro de los barrios populares, etc.

En abril de 2004, cuando el copamiento militar del Bloque Capital en Soacha y Ciudad Bolívar es un hecho innegable, la Administración municipal reconoce por primera vez la presencia paramilitar en la ciudad, a partir de una advertencia emitida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) el 28 de marzo de 2004, y de los informes de diversos medios de comunicación nacionales. La Alcaldía distrital reconoció la presencia paramilitar en 10 barrios de Ciudad Bolívar y anunció una serie de planes de acción, tanto en el orden militar como en el orden social.

¹¹³ Entrevista B-R. Julio de 2005.

¹¹⁴ Populares centros comerciales que venden mercancía importada y de contrabando, a bajos precios. (Nota del editor).





Una serie de medidas... que si lo miramos a la luz de hoy en día, son bastante ineficientes porque ha pasado un año y definitivamente los resultados no llegan a tener incidencia, las acciones han sido muy pequeñas, si hay presencia de Ejército, si hay presencia de Policía, pero la inversión social que se debe hacer dentro de Ciudad Bolívar para minimizar la vulnerabilidad de la población civil es mínima, todavía se está hablando en este momento de una prueba piloto para el barrio El Paraíso, para ver cómo funciona la articulación interinstitucional para la disminución del riesgo de la población que hay allí asentada. El plan determina 10 acciones, cuatro de orden militar donde se habla de la ubicación de la Brigada XIII en tres sectores: uno en Alpes, uno en Sierra Morena y otra en Ciudadela Sucre. En Soacha, se habla de la creación de un cuerpo élite contra el delito, una especie de bloque de búsqueda para Ciudad Bolívar contra los paramilitares.¹¹⁵

Pese a los esfuerzos de la Alcaldía distrital, la avanzada paramilitar en la ciudad ya se extendía hacia otros barrios, empezaron a moverse hacia los barrios vecinos, hacia nuevos sectores de la localidad o hacia otras localidades. Sin embargo, un hecho marcó el inicio de la nueva expansión paramilitar en la ciudad: la muerte de Miguel Arroyave el 21 de septiembre de 2004.

3. DEL PAPEL MILITAR AL CONTROL DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA LOCAL

Muerto Miguel Arroyave, es alias “Camilo” quien luego tomó el mando del Bloque Capital iniciando una nueva fase de crecimiento paramilitar: por un lado salen del espacio de Ciudad Bolívar, y por otro, esa estructura inicial con pandillas y con bandas desaparece ya que en octubre de 2004 el Frente Capital trae cerca de 400 hombres al distrito, provenientes en su mayoría de los departamentos de Antioquia y Meta.¹¹⁶

Un escenario importante de consolidación paramilitar en 2004 es Corabastos, que históricamente había sido controlado por la guerrilla. Aunque fue un territorio en disputa desde 2003, Corabastos es un punto clave, no solo por los cuantiosos recaudos que se manejan por el pago de seguridad, sino también porque permite la entrada y salida de la ciudad, por medio del camuflaje, de cualquier tipo de envío ilegal como armas, dinero, drogas, etc.

Una estructura paramilitar importante se desplaza después de octubre de 2004, desde Ciudad Bolívar hacia la localidad de Suba, territorio que presenta unas complejidades parecidas a las de Ciudad Bolívar: población desplazada muy alta, sectores de pobreza y marginalidad, pandillas, problemas de narcotráfico, expendio de drogas, y es otra vía de comunicación de la guerrilla con los municipios de Cota, la Vega y San Francisco, por medio del río “Juan Amarillo”. A diferencia de Ciudad Bolívar, presenta barrios estratificados en los niveles 5 y 6.

¹¹⁵ Entrevista B-A. Julio de 2005.

¹¹⁶ *Ibid.*





Una vez establecidos territorialmente, el reclutamiento de jóvenes es un factor importante de consolidación, ya que penetraron a los barrios pobres con una oferta económica muy importante que pocos están dispuestos a rechazar; de este modo, el respaldo a su proyecto se extiende a las familias de los nuevos combatientes, las cuales, en condiciones de marginalidad y pobreza, establecen nuevas lealtades y apoyos que tienden con el tiempo a solidificarse.

... entonces logramos ubicar una mamá y vamos efectivamente a entrevistarla a ver qué es lo que está pasando: fulana cómo está, nos enteramos que su hijo está desaparecido, vinimos a ver en qué le podemos colaborar, y nos dice: él no está desaparecido, quién le dijo a usted eso doctor, mi hijo se fue para las autodefensas, él está trabajando en tal lado, con tal gente y doctor, si viera nos están llegando \$700.000 mensuales por el muchacho, y no doctor, es que aquí el caso es de hambre y me están dando \$700 mil pesitos, yo ya estoy esperando que mi muchacho que tiene 13 años cumpla 15, él también se puede ir para allá y que me llegue otra platica mejor, porque mire doctor aquí somos siete y ahorita estamos viviendo de lo que manda mi hijo, de los \$700 mil.¹¹⁷

Tal como en Ciudad Bolívar y Suba, los paramilitares hacen presencia en los sectores de Engativá, Kennedy, Bosa y Fontibón; por esta última localidad pasa un ducto de gasolina y se dan las mismas dinámicas de control sobre el robo y mercadeo ilegal de este combustible, lo que les permite, no solo ganar recursos, sino también crear bases de apoyo en los barrios. Las extorsiones se extendieron a las empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, así como el control sobre los circuitos de distribución y expendio de droga.

En el centro de la ciudad, la avanzada paramilitar se hizo sentir en las localidades de Mártires y Santa Fe. En esta última, se ubicaba el sector conocido como “El cartucho” (zona de indigentes, recicladores y expendedores de droga); de otro lado, Mártires es una zona de tolerancia (prostíbulos). Sólo por dar una idea de la magnitud del problema social que representa este territorio para la capital, puede decirse que desde “El cartucho” se distribuía cerca del 40% de la droga del distrito, y dado el poco, o mejor, el inexistente control de las autoridades oficiales, se convirtió en un lugar estratégico para realizar atentados en el centro de la capital (desde allí se lanzaron los rockets el día de la posesión a la Presidencia de la República de Álvaro Uribe, en su primer mandato).

En estas zonas, los paramilitares hicieron básicamente una oferta de seguridad, donde se brindó control o desaparición de población socialmente estigmatizada; aparecieron entonces *graffitis* amenazantes de muerte contra prostitutas, maricas, basuqueros, marihuaneros, a guerrilleros, etc. Posteriormente, se pasó a los asesinatos llamados de “limpieza social” contra trabajadores y trabajadoras sexuales, consumidores y expendedores de droga que no pertenecieran a un negocio o que no hicieran parte de un prostíbulo que no les pagara “vacuna”. De otro lado, se tejió durante 2004 y 2005 una red económica y de seguridad sobre los vendedores ambulantes, San Victorino y la mayor parte del sector de economía informal que se ubica en la carrera séptima, carrera 19, y carrera 10 de Bogotá.

Pero en esta segunda fase, el control sobre las zonas con un copamiento consolidado ya no se daría sólo en su expresión militar, sino también en un control poblacional, político y social. La influencia política



¹¹⁷ Entrevista B-A. Julio de 2005.



y social se evidencia con acciones más concretas, la cooptación de organizaciones sociales o creación de sus propias organizaciones comunitarias, el control de candidaturas para las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, entre otras acciones.

...entonces se proponen controlar las Juntas de Acción Comunal. Si uno se pone a mirar, los paracos hacen el trabajo político desde la base, arrancan con el control de las Juntas Comunales que serían el nivel de contacto más cercano con la gente, luego las Juntas Administradoras Locales y de ahí para arriba. Por allá (Ciudad Bolívar), ellos tienen controlado casi todo el movimiento comunal. Cuando fue la pasada elección de dignatarios ellos pusieron su gente y en muchos lados dijeron: aquí no se presenta nadie, al que se presentó lo mataron. Hay casos aleccionadores, está el caso de Casa Loma donde ellos sacan un volante diciendo que nadie se puede presentar y un man se presentó y le cortaron las orejas y la lengua. Entonces hoy ellos controlan casi todo el movimiento comunal, por allá en la Junta Administradora Local tienen más de un man metido y yo supongo que ahí tirarán para arriba, para el Concejo, para las Asambleas, yo si creo que el paramilitarismo se propone llegar hasta allá.¹¹⁸

El proyecto paramilitar en Bogotá, si bien puede tener un gran interés por el control económico, en la medida en que se obtienen recursos importantes para el mantenimiento y reproducción de sus ejércitos por medios diferentes al narcotráfico, es ante todo un objetivo militar, social y político esencial para el proyecto de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Todo el ideario político y militar de Derecha que privilegia la seguridad, para el desarrollo económico capitalista encuentra en las grandes ciudades -y la capital del país, por supuesto es la principal- un respaldo político necesario para la consolidación y continuación de lo que fue efectivamente la reelección presidencial.

Es necesario, por ello, que en Bogotá se refleje el aparente éxito -inflado por los medios de comunicación nacional- de la política de Seguridad Democrática; en ese sentido, el proyecto paramilitar en su dimensión de control social y político se está haciendo mucho más sólido, por medio de la penetración de organizaciones sociales y comunitarias para incidir, por un lado, desde la base en los escenarios de toma de decisiones de políticas públicas, y por otro lado, consolidar los tradicionales espacios donde se desarrollaba la acción política de las milicias en la ciudad. Del mismo modo, las organizaciones de jóvenes, organizaciones culturales y las universidades públicas (la Universidad Distrital, Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional) han sido objeto de disputa por parte del proyecto paramilitar, tratando de neutralizar cualquier intento de visibilización de las guerrillas en la ciudad.

Aún con lo anterior, la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC continúa su trabajo en la ciudad, aunque sus redes de apoyo fueron desmanteladas en los barrios de Ciudad Bolívar, se ha dado un traslado hacia los sectores de Usaquén, San Cristóbal Norte y el barrio El Codito, primordialmente, contando con el respaldo del Frente 54 del sector de La Calera. De otro lado, en la localidad de Usme han encontrado otra vía de comunicación, una "puerta trasera" que los comunica -pasando por detrás de Sumapaz- con el antiguo corredor de la vía hacia El Caguán. La guerrilla está en una fase de organización de muy bajo perfil en el interior de la ciudad, son pequeños comandos que realizan labores muy específicas. En Cundinamarca, las FARC se encuentran en una fase de repliegue estratégico y reestructuración del Bloque Oriental al mando de alias "Grannobles", que sería el encargado de preparar el terreno para una posible etapa ofensiva.

¹¹⁸ Entrevista B-R. Julio de 2005.





El control paramilitar de la capital lo detenta hoy el "Bloque Central Bolívar" que ganó el liderazgo en Santa Fe de Ralito, y con el asesinato de Miguel Arroyave y la "captura" de Camilo en diciembre de 2004, logró dar el paso último al integrar el Bloque Capital en su estructura y cobrar con la capital del país su más importante botín de guerra para el momento de la "desmovilización".





CAPÍTULO V

CALI

1. CONTEXTO.

Para abordar la relación entre la ciudad de Cali (capital del Valle del Cauca) y el conflicto armado es necesario remontarse a la década del ochenta y la presencia del M-19, no solo en la ciudad, sino también en todo el departamento del Valle del Cauca, en el cual, el grupo guerrillero contó con unas bases sociales y realizó un trabajo que rindió frutos, tanto en lo militar como en lo político.

Aunque algunos podrían afirmar que en los últimos quince años han sido mucho más influyentes, en las dinámicas bélicas de la ciudad, los diferentes carteles asociados al negocio del narcotráfico, es difícil trazar líneas divisorias que señalen hasta donde llega la influencia del narcotráfico en la política y la economía legal, las dinámicas sociales y el conflicto político armado. Con ello no se quiere decir que esta sea una sociedad narcotizada -lo que ayudaría aún más al señalamiento del cual somos objeto por el mundo entero-, pero desconocer el profundo impacto que el negocio del narcotráfico produjo en todas las esferas de la sociedad, solo hace más difícil develar las relaciones que diversos actores en sus dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales tienen y las posibles consecuencias de sus acciones para la agudización de la guerra que vive Colombia.

Al iniciar la década del ochenta, el M-19 era una agrupación guerrillera urbana, ampliamente conocida por la opinión pública debido a los hechos que protagonizó como el robo de las armas del Cantón Norte en Bogotá en 1979. El M-19, a diferencia de los demás grupos guerrilleros del momento (EPL, ELN, FARC), fue una organización básicamente urbana, con unos intentos de desarrollo por construir una fuerza militar rural en Antioquia, Caquetá y en el Cauca, pero fundamentalmente fue un proyecto urbano, el cual sentó las bases de un trabajo militar con un proyecto político que logró un relativo éxito en numerosos barrios de la ciudad de Cali.

En 1981, el M-19 realizó una operación para conseguir recursos que tendría unas consecuencias inimaginables para el desenvolvimiento de la guerra en Colombia: el secuestro de Martha Nieves Ochoa. Para el grupo guerrillero era clara la tendencia a realizar secuestros de grandes personalidades,¹¹⁹ al igual que ejecutar acciones militares espectaculares, porque como lo decía su comandante: "Secuestrar es malo -sostenía-, pero si nos toca hacerlo, hagamos poquitos pero que rindan"¹²⁰.





En la búsqueda de un secuestrado que les proporcionara buenos dividendos económicos, contemplaron varias posibilidades como el narcotraficante Carlos Ledher Rivas, a quien intentaron secuestrar pero se les escapó cuando lo tenían acorralado; también Pablo Escobar fue otro posible candidato, quien los interceptó cuando apenas estaban haciendo el trabajo de seguimiento, y finalmente, la familia Ochoa Vásquez fue el blanco que escogieron para ejecutar el secuestro. De todos ellos, se sabía que eran personajes acaudalados, pero aún no se tenía muy clara la procedencia y el alcance de su poder. El M-19 planeó y ejecutó entonces el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana del narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vásquez.

La respuesta a la acción del grupo guerrillero no se hizo esperar, la familia Ochoa Vásquez con la conformación de un pequeño ejército, le propinó un duro golpe a las bases urbanas del M-19 en Medellín que culminó con la liberación de la secuestrada.

Lo de Martha Nieves fue una acción desafortunada. La reacción brutal del cartel de Medellín nos reveló un mundo cuyo poderío nunca hubiéramos imaginado. Pagamos cara nuestra ignorancia. Si uno pretende cambiar la realidad, no puede desconocerla. Cuando uno se hecha un arma al hombro, pierde el derecho a la inocencia.¹²¹

Pero la importancia de los secuestros del M-19 (y sus intentos infructuosos) radica en que motivaron la creación del grupo Muerte A Secuestradores (MAS), dándose a conocer en la ciudad de Cali el 3 de diciembre de 1981. En dicho comunicado expresaron su intención de acabar con los secuestradores como respuesta a la retención de Martha Nieves Ochoa; 223 capos del narcotráfico, entre los que se encontraba el extraditado Carlos Lehder Rivas, lideraron este proyecto que se convierte en uno de los principales antecedentes de los grupos paramilitares que se organizaron alrededor del decenio del ochenta.¹²²

El M-19 entretanto continuó consolidando sus bases urbanas en la ciudad de Cali, el distrito de Aguablanca fue uno de los bastiones del M-19 al igual que la zona de La Ladera en la que revitalizaron organizaciones comunitarias de diverso tipo; además de los barrios más deprimidos el M-19 también encontró apoyo en barrios de clase media.

¹¹⁹ En agosto de 1975 el M-19 había realizado el secuestro de Donald Cooper, Gerente de Sears, quien fue retenido durante tres meses y liberado en noviembre del mismo año, al ser pagado un rescate de un millón de dólares. Este hecho representó para el M-19 un tiempo de tranquilidad económica y posibilidades de financiación de numerosos proyectos que servirían para publicitar al M-19 en todo el país y en el exterior; viajes por las diferentes ciudades y al exterior se hicieron continuos, la edición del periódico "Mayorías", y en general diversas actividades que fortalecieron su organización interna. Al respecto ver: Entrevista a Jaime Báteman. CASTRO CAICEDO, Germán. Del ELN al M-19. Once años de lucha guerrillera. Op cit. Pág. 69

¹²⁰ JIMÉNEZ, Álvaro. "Reconciliaciones". En: Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Corporación. Bogotá. Observatorio para la paz. Intermedio Editores. 2002 Pág. 125.

¹²¹ *Ibíd.* Pág. 129.

¹²² Al respecto ver: GUERRERO VARÓN, Javier. La sobre-politización del narcotráfico en Colombia. En: De las armas a la política. Pág.247. Así, mismo: Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Bogotá. Corporación observatorio para la paz. Intermedio Editores. 2002





...el M-19 tenía presencia incluso en barrios que no son de los estratos 0, 1 y 2, sino que eran los estratos 3, 4, incluso 5, ese antecedente coloca una experiencia de más o menos 3-4 años de presencia armada en muchas partes de la ciudad de Santiago de Cali en la que estaba el distrito de Aguablanca que estaba en un proceso de formación como asentamiento humano, y reacciones armadas, a la toma armada, tenía que ver con tomas de iglesias, de escuelas, etc., y con un trabajo articulado a desarrollos comunitarios y sociales: el club juvenil, el centro cultural, la junta de acción comunal, ese tipo de cosas, (...) en ese momento ninguna de las organizaciones armadas tenía una presencia similar ni cercana, ni el ELN ni las FARC, nunca tenían ese tipo de expectativa en Cali, un poco por la estrategia de guerra de esa época que era fundamentalmente una acumulación rural.¹²³ n la zona de Ladera que tenía más historia de esa conformación, pero repito, en algunos otros sectores puedo mencionar por ejemplo el barrio La Base, Chapinero, La Ceiba, Guabal, San Judas que no son de estrato 1 y 2 sino de 3, 4, incluso 5, entonces esa experiencia quedó allí, estaba vinculada a acciones armadas, a la toma armada, tenía que ver con tomas de iglesias, de escuelas, etc., y con un trabajo articulado a desarrollos comunitarios y sociales: el club juvenil, el centro cultural, la junta de acción comunal, ese tipo de cosas, (...) en ese momento ninguna de las organizaciones armadas tenía una presencia similar ni cercana, ni el ELN ni las FARC, nunca tenían ese tipo de expectativa en Cali, un poco por la estrategia de guerra de esa época que era fundamentalmente una acumulación rural.¹²⁴

Durante la primera mitad de la década del ochenta el crecimiento del M-19 fue vigoroso, el mandato presidencial de Belisario Betancur creó un ambiente propicio para las negociaciones, de las cuales, el M-19 salió fortalecido.¹²⁵ El 16 de noviembre de 1982, fue aprobado por el Congreso de la República el proyecto de amnistía presentado en el gobierno de Turbay Ayala, y sancionado por el Presidente Belisario Betancur el 19 de noviembre “por la cual se decreta amnistía y se dictan otras normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz”¹²⁶. Gracias a esta amnistía, cerca de 400 presos políticos de los grupos M-19, FARC, ADO, EPL, y el ELN, recobraron la libertad.¹²⁷

Una vez iniciadas las conversaciones con el Gobierno nacional, en medio de los rompimientos y reanudaciones de la tregua, el 17 de febrero de 1985, se celebró la IX Conferencia del M-19. En ella fue elegido Álvaro Fayad como Comandante General, relevando a Iván Marino Ospina quien pasó a ser miembro del Comando Central, máximo ente directivo de la organización, junto a Carlos Pizarro, Gustavo Arias y Antonio Navarro Wolf. Como parte de las decisiones tomadas en la IX Conferencia, fueron creados en diferentes ciudades del país los “Campamentos Colombia”, como expresión de la lucha armada en las ciudades. Con ello se demostraba una vez más que las intenciones de paz eran mínimas; por el contrario, buscaron su fortalecimiento y expansión militar. En dichos campamentos, ubicados en barrios populares de las ciudades de Medellín, Cali, Manizales, Zipaquirá, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá se preparaban política, ideológica y militarmente jóvenes y población civil para la confrontación armada. En Cali fue la ciudad donde más campamentos pudieron ser implementados. Una vez rotos los diálogos con el Gobierno nacional, muchos de los jóvenes adiestrados militarmente pasaron a formar parte de las filas de los ejércitos rurales.

¹²³ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.

¹²⁴ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.

¹²⁵ En el mes de septiembre, por medio del decreto 2771, fue nombrada la Comisión de Paz integrada por 40 miembros de diversos sectores políticos y sociales.

¹²⁶ Ley 35 de 1982.

¹²⁷ RAMÍREZ, Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. Actores en conflicto por la paz. Bogotá. CINEP. Siglo XXI.





El M-19 lleva al límite esa experiencia cuando intenta un proceso de paz en la época de Belisario y eso significa básicamente, en primera instancia durante el periodo de paz, de la tregua que hubo con Belisario, asentar unos campamentos. En su momento se llamaron Campamentos de Paz o Campamentos Colombia, pero eso no era otra cosa que una estrategia política y una estrategia de desarrollo comunitario para vincular el proyecto político armado al territorio, entonces el M-19 aprovechó para consolidar ese trabajo en las distintas comunas donde teníamos presencia, particularmente en Aguablanca y la Ladera, incluye Siloé y un barrio conocido como Terrón, y esa experiencia se calculó pensando que el proceso de paz se iba a romper; era un proceso no para la paz sino realmente era una construcción para una etapa posterior de la guerra.¹²⁸

Las fuerzas armadas hostigaban continuamente los campamentos y los allanamientos y detenciones arbitrarias se hicieron frecuentes en todo el país. Aunque los atentados eran continuos, el hecho que marcó el rompimiento definitivo, después de diez meses de una frágil tregua, fue el atentado en Cali, en el que casi pierde la vida Antonio Navarro Wolf, quien se encontraba con Carlos Alonso Lucio, María Eugenia Vásquez, Eduardo Chávez, Álvaro Alvarado y Alberto Caicedo.

Una vez rota la tregua entre el Gobierno nacional y el grupo guerrillero, el M-19 desarrolló un avance ofensivo sin precedentes. La arremetida militar del M-19 fue total, en menos de un mes, realizaron tomas a los municipios de Herrera, Génova, Riofrío, Primavera y Naranjal, numerosos secuestros (algunos fracasados por el accionar del Ejército) y diferentes actos violentos durante los meses posteriores al rompimiento de la tregua. La campaña “De pie Colombia”, fue declarada por Álvaro Fayad, como la ofensiva más grande nunca antes propuesta:

Compañeros: Hoy es la hora del combate victorioso. La espada se levanta de nuevo, y esta campaña “De pie Colombia” debe aportar nuevos avances en la instauración de la democracia y la consolidación de la paz por la nación. Todas las fuerzas del M-19 están comprometidas en esta campaña, de acuerdo a los planes nacionales. Ningún miembro del M-19 puede sustraerse hoy del combate: esperamos de los oficiales de Bolívar y de los estados mayores el coraje, el heroísmo y la grandeza para que las nuevas victorias construyan los peldaños de un ejército único para ser gobierno.¹²⁹

Para el contexto del Valle del Cauca fue trascendental esta ofensiva, ya que la campaña “De pie Colombia” se puso en práctica en los municipios de Ginebra, Roldadillo, Tulúa y Sevilla. Las victorias militares que lograron en el Valle del Cauca les dieron la seguridad y la confianza necesaria al grupo guerrillero para intentar uno de las incursiones más lamentables para la historia política colombiana: la toma del Palacio de Justicia.¹³⁰

1989. Op cit. Pág.95.

¹²⁸ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.

¹²⁹ Documentos M-19. Boletín N° 101. Septiembre de 1985. Citado por: VILLAMIZAR, Darío. Aquel 19 será. Op. Cit. Pág. 421.

¹³⁰ El 6 de noviembre de 1985 se realizó la toma del Palacio de Justicia. Allí murieron hombres y mujeres importantes para el M-19, entre los cuales se encontraban Luis Otero, Alfonso Jacquin y Andrés Almares, entre otros. Además 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres magistrados auxiliares, 12 auxiliares de los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, magistrados del Consejo de Estado, numerosos empleados oficiales y un número indeterminado de muertos y desaparecidos. “No hubo un solo civil que hablara con los compañeros a nombre del gobierno. El





En medio del desconcierto general por el resultado trágico de la toma del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una asamblea de combatientes, el 20 de diciembre de 1985. En dicha reunión se fijó como objetivo principal la conformación del Batallón América que, en sus primeros meses de actuación, logró algunas victorias militares en el Valle del Cauca, y por primera vez, una ciudad en Colombia vivió un enfrentamiento entre ejércitos enfrentados, la escenificación de la guerra en la ciudad fue un hecho en Cali.

...una ofensiva militar muy grande que desarrolló la fuerza militar que tenía el M-19 en el Cauca, se desplegó en una campaña que se llamó "Paso de Vencedores", parte de esa fuerza armada, estamos hablando de casi 200 hombres, una parte incursionó en Agua Blanca y estuvo durante varios días allí y otra, la más gruesa incursionó por Ciudad Jardín que es el sector de la élite en Cali y combatió durante aproximadamente 10 o 12 días en toda la ladera de Cali, entonces todo ese proceso miliciano que se había ido construyendo se articuló armadamente en acciones concretas por 12 días combatiendo en la ladera de Cali, eso fue exactamente en el año 85 y 86, cuando esa fuerza militar grande se retiró finalmente. Por la contra ofensiva del ejército quedó muy expuesta esa estructura miliciano, esa estructura se había hecho visible, era ya reconocida y el esfuerzo de inteligencia y militar del ejército y de la policía llevó a golpear fuertemente esa estructura militar y también la base social que apoyaba al M-19 en Cali.¹³¹

Efectivamente, la exposición de las bases sociales y milicianas en Cali llevó a una contraofensiva por parte del Ejército. Se dieron allanamientos, capturas y también detenciones arbitrarias en la ciudad. En ese contexto es asesinado Álvaro Fayad, Comandante Superior del M-19. El ejército, y los nacientes paramilitares propinaron serios golpes a la estructura militar del M-19 y en ese ambiente de "guerra sucia" se ejecutó el secuestro del político Álvaro Gómez Hurtado, el 29 de mayo de 1988. Después de varios comunicados y entrevistas con importantes periodistas del país, se manifestó el interés del M-19 de liberar al político y entablar un gran diálogo nacional hacia la paz.

Una vez iniciadas las conversaciones y los primeros acuerdos, se desarrolló el proceso de paz que finalizó con la entrega de armas y la firma del documento final en el Palacio de Nariño, el 9 de marzo de 1990. En Cali, ese proceso miliciano que gestó el M-19, en su gran mayoría, sufrió una mutación, algunos de esos jóvenes, hombres y mujeres, hicieron parte del acuerdo de paz del M-19, pero muchos otros se rearticulaban a través de formas autónomas de acción armada vinculada a la defensa del territorio, a la mediación violenta o administración violenta de ciertos conflictos urbanos en los territorios, y en algunos otros casos, se rearticulaban a otros dos fenómenos: al narcotráfico, (básicamente como estructuras militares de escoltas de narcotráfico) y a organizaciones de delincuencia organizada.

Director de la Policía, General Delgado Mallarino, habló con Otero en la única comunicación que hubo. Después cortaron los teléfonos. O sea que no hubo intentos por buscar una solución distinta a la rendición o el genocidio." Antonio Navarro. Prólogo. En: LARA, Patricia. Siembra vientos y recogerás tempestades. Bogotá. Planeta. 1986. Pág. 243.

¹³¹Entrevista. C-DA. Julio de 2005.





2. LA DÉCADA DEL NOVENTA: EL NARCOTRÁFICO Y LA CRISIS POLÍTICA

El crecimiento y consolidación de las estructuras del narcotráfico en la ciudad de Cali se vieron fortalecidas con los jóvenes que hicieron parte del proyecto político inconcluso, al no ser garantizadas las condiciones para una verdadera reincorporación social, política y económica para ese nivel de milicias que pertenecieron al M-19; como consecuencia de lo anterior, la gran mayoría de jóvenes que hicieron parte de la organización militar del M-19 se rearticuló a otras expresiones armadas, en la organización de estructuras criminales, oficinas de cuentas de cobro y estructuras armadas sicariales que fueron implementadas especialmente en Aguablanca y en la Ladera.

A diferencia del Cartel de Medellín que utilizó el terrorismo y el sicariato como estrategias de control y dominación, el Cartel de Cali creció articulando sus negocios con la economía legal en una forma mucho más discreta; sus empresas ilegales tejieron redes de apoyo y alianzas estratégicas con diversos sectores económicos y políticos del país.¹³² Aunque también utilizaron métodos violentos, por un lado, en muchos casos estos fueron mucho más “silenciosos”, o sirvieron al Estado en su lucha contra Pablo Escobar conformando el grupo paramilitar conocido como los PEPES (“Perseguidos por Pablo Escobar”) en el cual participaron, además de los miembros del Cartel de Cali, los hermanos Castaño Gil y Diego Murillo, alias “Don Berna”.

A partir de la muerte de Pablo Escobar, durante la primera mitad de la década del noventa, el Cartel de Cali se fortaleció y creció aceleradamente; sin embargo, dadas las dinámicas políticas originadas a partir del “Proceso 8.000”, este cartel fue objeto de persecuciones y capturas, dada la necesidad del Gobierno nacional de presentar resultados exitosos en su lucha contra el narcotráfico.

El efecto inmediato de la persecución al Cartel de Cali por parte de las autoridades, generó una crisis económica en la ciudad, en la cual todos los sectores, en mayor o menor medida, se vieron afectados, debido a la relación directa o indirecta con los procesos de lavado de activos en la cual intervienen diversos sectores, financieros, comerciales, empresariales (entre ellos, tal vez el sector de la construcción fue el que mostró un estancamiento más notorio); además, la interrelación de la economía vallecaucana “legal” con los dineros del narcotráfico, aunque menos evidente, no es menos profunda que la relación del narcotráfico con la política.¹³³

En las zonas rurales del Valle del Cauca, el crecimiento de diversos frentes de las FARC y del ELN fue constante, y se aceleró a partir de 1995. El ELN tenía presencia en el Valle del Cauca al igual que el M-19 desde el decenio del ochenta; sin embargo, el poder de los carteles del narcotráfico había impedido el crecimiento de los grupos guerrilleros, así como atacaron los frentes ubicados en algunos municipios, como los ataques que sufrió el frente “Luis Carlos Cárdenas” del ELN.

¹³² CAMACHO GUIZAO, Álvaro. Narcotráfico, coyuntura y crisis: sugerencias para un debate” En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (edit.) “Tras las huellas de la crisis política”. Bogotá. Tercer Mundo Editores. FESCOL. IEPRI. 1996.

¹³³ *Ibíd.* Pág.142.





Fue especialmente, a partir de 1998 -en el contexto de presión ejercida a los carteles del Valle cuando las FARC, con el Frente 30, se desdobló hacia Buenaventura y se desplegaron por la cordillera central al ubicar las columnas “Víctor Saavedra” y “Alonso Cortés” procedentes del Cauca, así como las columnas “Alirio Torres” y “Daniel Aldana” provenientes del sur del Departamento del Tolima. De otro lado, el ELN creó el frente “José María Becerra” en la cordillera occidental en la periferia de Cali, así como el frente urbano “Omaira Montoya”.¹³⁴

El momento de auge de la acción guerrillera se vivió tanto a nivel departamental (Valle del Cauca) como en su capital, Cali, en 1999, con el sonado secuestro de civiles en la iglesia La Maria, y en el 2000 se realizó otro secuestro masivo en el kilómetro 18. La respuesta no se hizo esperar, al crecimiento de las FARC y el ELN a partir de 1998, le siguió un momento de quiebre en 1999; este momento de ruptura se da por dos hechos principales: la llegada de los paramilitares con la conformación del Bloque Calima y la exitosa ofensiva del ejército.

A pesar de los sonados secuestros realizados por el ELN, no puede hablarse de un proyecto miliciano realmente consolidado en ningún sector de la ciudad, aunque tanto las FARC como el ELN contaban con presencia en los barrios periféricos, sobre todo en Siloé y Terrón Colorado.

*...aquí las distintas organizaciones tenían, y tienen, trabajo tanto en la Ladera como en Aguablanca, pero ni su capacidad política ni su desarrollo militar ni la inserción de sus propuestas en esas comunidades permite que hayan configurado ningún control significativo, tu puedes recorrer todos estos territorios y tu no ves expreso ese control como lo puedes ver en otras ciudades, que ves, sientes y reconoces una presencia armada de un actor, los ves incluso uniformados, ves las dinámicas comunitarias ligadas a tal o cual actor, aquí todos tienen presencia en distintos sectores pero están lejísimos de poder decir que hay un control hegemónico.*¹³⁵

Sin embargo, era un hecho el crecimiento de la presencia guerrillera en el Valle del Cauca, y por ende, se hizo necesario para el Estado, recuperar el control del centro del departamento, donde se encuentran ubicados los intereses de los empresarios vallunos y las fincas de recreo tanto de la élite caleña como de los narcotraficantes; la necesidad del mantenimiento de la seguridad y del *statu quo* para esta región se convirtió en una necesidad imperiosa para estos sectores. En dicho contexto, se conformó el Bloque Calima, cuyo líder, Hernán Hernández, pertenecía a las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

A partir de la conformación del Bloque Calima, el eje de la disputa entre insurgencia y paramilitares entre 1999 y 2000 fue el corredor de la cordillera central; más adelante se extendieron los enfrentamientos a la cordillera occidental y a la carretera Cali-Buenaventura, que en 2002 terminaría en el Pacífico, en operaciones conjuntas con el “Bloque Pacífico” de los paramilitares, cuya franquicia es propiedad de “Don Berna” y alias “Gordo Lindo”.

¹³⁴ Al respecto ver: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2003.

¹³⁵ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.





Desde ese momento se presentó un incremento acelerado de los asesinatos, las masacres y el desplazamiento forzado. Las organizaciones sociales y campesinas fueron perseguidas (tales como Acacevas y Los Yarumos), las Juntas de Acción Comunal también fueron amenazadas. Para dar un ejemplo de la gravedad de los hechos, después de dos meses de enfrentamiento, en 1999, llegaron a las cabeceras municipales -sobre todo a Tulúa- cerca de 5.000 campesinos, huyendo de los ataques.¹³⁶ En una acción conjunta, el Bloque Calima junto al Bloque Pacífico realizaron una de las masacres más cruentas de 2001: entre el 10 y 12 de abril, estos grupos atacaron cerca de 17 aldeas indígenas y de afrocolombianos, asesinando cerca de diecinueve personas, las cuales, fueron torturadas y sus cuerpos mutilados, lo que ocasionó el desplazamiento masivo de la población del Alto Naya. Acciones como esta se repetirían durante todo 2001.

Del norte del Valle, el Bloque Calima se extendió hacia áreas cercanas a Cali: Yumbo, Jamundí, Pradera, Candelaria y Florida. En Cali -a diferencia de otras ciudades del país donde la avanzada paramilitar continuó hasta la ciudad- el Bloque Calima no hizo presencia directa o no conformó un bloque para la ciudad, actuación que puede explicarse en dos razones básicas: una, no existía una amenaza insurgente importante en la ciudad; en segundo lugar, el Ejército respondió en forma ofensiva a los operativos de la guerrilla en la ciudad de Cali.

A los operativos que dieron como resultado los secuestros masivos en la iglesia La María y el Kilómetro 18, por parte del ELN, y en 2001, el operativo de las FARC en el que fueron secuestrados varios diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, le siguieron grandes ofensivas del Ejército, las cuales debilitaron la presencia del ELN en la cordillera occidental; así mismo, se realizaron capturas masivas en diferentes barrios de la ciudad; y por último, fue instalado el Batallón de Alta Montaña en la reserva forestal de Los Farallones. Unido a la ofensiva del Ejército, a través del programa de Seguridad Democrática, se tejió un cordón de seguridad en Cali con soldados campesinos, los cuales cumplen una labor de información clave para el control de la zona.¹³⁷

En Cali no había que entrar a disputar ninguna zona, no había que entrar a sacar a las FARC de Siloé porque, aunque tienen trabajo, no podía decirse que tenían controlado el sector; no había un reto militar ni político coherente visible para atacar, y creo que es la razón del por qué no se organizó un bloque paramilitar en Cali como en otras partes (...) a la élite le interesaba traerlos al Valle en la zona rural, la guerra había que desarrollarla en el campo, allá es donde se estaban fortaleciendo las FARC, en el centro del Valle, en la vía Buenaventura, ese tipo de cosas, en la zona rural de Jamundí, pero creo que siempre hubo un cálculo, y hasta donde yo sé, hubo la prohibición expresa de que las autodefensas se metieran con Cali, digamos porque aquí también habían sindicalistas, ong que pudieran eventualmente golpear y no hubo ningún incidente atribuible, verificable, fehacientemente a las autodefensas, de ningún tipo de asesinato o situación, ni una bomba de sindicato ni un secuestro, nada.¹³⁸

¹³⁶ Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2003.

¹³⁷ Entrevista C-CMS. Julio de 2005.

¹³⁸ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.





La ciudad de Cali fue receptora de más de 1.200 desplazados entre 1998 y 2001¹³⁹. Unido a las masacres paramilitares, las FARC también protagonizaron algunas masacres en Yuriguaní, Dagua y Buenaventura en abril y octubre de 2001. Por otro lado, el control de las oficinas de cobro y de las tradicionales estructuras organizadas del narcotráfico continuaron funcionando durante estos años, no sin mutaciones y transformaciones internas, debido a la recomposición de los carteles del narcotráfico. Dichos enfrentamientos ocasionaron masacres en la ciudad de Cali durante 2001.

Para 2002 actuaban en el Valle del Cauca los frentes “Alirio Torres”, “Víctor Saavedra”, “Alonso Cortés” y el Frente 6 de las FARC en repliegue sobre la cordillera central, después de la avanzada del Bloque Calima para controlar el norte-centro y la zona del pacífico. En la cordillera occidental, las FARC tenían ubicados el Frente 30 y el Bloque móvil “Arturo Ruiz”. De otro lado, el ELN contaba con los frentes “Luís Carlos Cárdenas” y “José María Becerra”.¹⁴⁰

3. EL FIN DEL BLOQUE CALIMA: UN NUEVO GRUPO PARAMILITAR EN FORMACIÓN

Los bloques paramilitares Calima y Pacífico cumplieron una labor contrainsurgente, pero sobre todo, de mantenimiento del control en el valle del Cauca para asegurar el buen funcionamiento de los diferentes intereses económicos, respaldados por la clase empresarial, política y narcotraficante.

El hecho de que las estructuras del narcotráfico del norte del Valle -a diferencia de otras regiones del país- no hubiesen comprado franquicias para conformar bloques paramilitares con sus ejércitos en el Valle del Cauca, se debió a la profundas reestructuraciones que vivieron los carteles del norte del Valle a partir de 1995 por un lado por la persecución del gobierno, el enfrentamiento entre algunos capos del cartel de Cali y el cartel de Medellín, y posteriormente el enfrentamiento en su interior.

Los enfrentamientos internos fueron más graves tras la muerte o captura de los principales capos del Cartel del Valle -“Pacho” Santacruz, los hermanos Orejuela e Iván Urdinola-. Mientras se consolidaron los bloques Calima y el Bloque Pacífico, las estructuras criminales de los diferentes carteles, libraron su propia guerra intestina. Por ello, no fructificó el intento que en 2002 hiciera el jefe paramilitar (hoy desaparecido) Carlos Castaño -cuando reunió en Cartago a más de 100 narcotraficantes para firmar una carta en la cual manifestaran su intención de someterse a la justicia norteamericana- ya que muchos capos importantes no quisieron acogerse por sus diferencias internas.

El último eje de la confrontación entre los capos del norte del Valle se vivió tras la muerte de Iván Urdinola. De ahí en adelante, le siguió el enfrentamiento entre Wilber Varela y Diego León Montoya. Este enfrentamiento que inicio hace más de dos años, da cuenta de la transformación de las estructuras del narcotráfico y de una nueva élite que buscó consolidarse a través de la conformación y crecimiento de sus ejércitos: Varela conformó “Los Rastrojos” y Montoya “Los Machos”.

¹³⁹ Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2003.

¹⁴⁰ Ídem.





A diferencia de “Don Berna” que logró insertarse tempranamente en la lógica de expansión paramilitar, Varela y Montoya manifestaron su intención de entrar en el proceso el proceso de negociación en Santa Fé de Ralito con los jefes paramilitares en el 2004, esta decisión tardía encontró una respuesta negativa por parte del Gobierno nacional. Ante esta desaprobación, y con la inminente desmovilización del bloque Calima, estos ejércitos privados se siguieron fortaleciendo militarmente y librando su propia batalla.

Una vez desmovilizado el Bloque Calima, algunos de los antiguos soldados paramilitares fueron reclutados por los ejércitos de Varela y Montoya. A inicios de 2005 “Los Rastrojos” se empezaron a identificar como “RCP” o Rondas Campesinas Populares, y consolidaron su influencia en los municipios de Bolívar, Versalles, Trujillo, Buga La grande, Sevilla y Trujillo. Por su parte, “Los Machos”, al servicio de Diego Montoya, adoptaron las siglas “AUV”, Autodefensas Unidas del Valle, haciendo presencia en los municipios de El Dovio, Zarzal, Versalles, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Toro, Anserma nuevo, Obando, Sevilla, Trujillo y Bolívar.

Con la conversión de los “Machos” en las “AUV”, y de los Rastrojos en “RCP”, buscan ser reconocidos como interlocutores del Gobierno como las nuevas “autodefensas” en el Departamento del Valle del Cauca. Las paredes de estos municipios fueron pintadas con las nuevas siglas y se repartieron panfletos con un discurso anti-insurgente, implementando todo el dispositivo paramilitar al copar las áreas de influencia que tenía el Bloque Calima y cumplir así sus mismas labores.

Cali no es ajena a esta nueva dinámica paramilitar, por el contrario, es ahora cuando las transformaciones de los nuevos paramilitares se cruzan con el poder de las tradicionales oficinas de cobro y las estructuras de crimen organizado que tenía cada uno de los carteles en la ciudad, las cuales, se articulaban a las necesidades del nuevo escenario.

Durante el 2005, los asesinatos y disputas entre las oficinas de cada una de los grupos enfrentados han sido constantes. Así mismo, el reclutamiento en los barrios, en especial, de Aguablanca y La Ladera, para engrosar las filas de las AUV y las RCP, dan cuenta de su crecimiento.

Las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN, continúan con una presencia mínima en algunos barrios de la ciudad, permanecen algunas estructuras milicianas en territorios marginales con una presencia armada escasa, las cuales hacen algunos trabajos de inteligencia, pintas panfletarias, etc. Existe también una estructura armada mucho más profesional (para realizar secuestros como el de la Iglesia de La Maria o la Asamblea Departamental) que son estructuras profesionales que viven tiempo completo clandestinamente en la ciudad. Hay otro tipo de estructuras que sirven en el orden logístico y que tiene que ver con la provisión de municiones, la provisión de recursos médicos, de hospitales y centros urbanos, de comunicación, movilización de hombres que van y vienen de la montaña, etc.¹⁴¹

Todas estas estructuras urbanas han sido debilitadas por la arremetida del Ejército después de 2001 y por el establecimiento del batallón de Alta Montaña en los Farallones, que unido a las capturas y allanamientos han debilitado su presencia en la ciudad y cortado los cordones de comunicación con las áreas rurales.



¹⁴¹ Entrevista. C-DA. Julio de 2005.



...si antes era posible en la zona rural cercana a la ciudad encontrar a las FARC y al ELN, hoy no es posible, la presencia de ese batallón, su área operacional, el dispositivo que tiene en esa zona es muy complejo y muy fuerte y literalmente esos accesos están restringidos. ¿Qué ha sucedido un poco en relación con eso? Un desplazamiento de la presencia armada y de la acción armada hacia más al sur del departamento y norte del Cauca y hacia la Costa Pacífica, pero la parte más inmediata acá está bajo control militar.¹⁴²

La presencia armada más importante en Cali -por fuera de la estatal- es la de las oficinas de cobro que se rearticulan al nuevo proyecto paramilitar. En el Valle del Cauca la importancia y magnitud de las nuevas formas de reestructuración paramilitar están estrechamente vinculadas a las dinámicas del Cauca, mantiene las condiciones de seguridad logradas en los cinco años anteriores y se articulan de manera estructural al negocio del narcotráfico y a las economías ilegales; mientras tanto las FARC, continúan en un repliegue estratégico en toda la cordillera occidental y central.

¹⁴² Ídem.





CONCLUSIONES GENERALES

Para 2002, una nueva fase de cambios anunció la transformación de las dinámicas bélicas en Colombia: el crecimiento y consolidación del proyecto paramilitar en buena parte del territorio colombiano; la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y con él, la fracción de ultraderecha al *bloque en el poder*; el repliegue estratégico a que se vieron sometidas las FARC después de la ofensiva paramilitar y de las Fuerzas Armadas; y por último, el rompimiento de corredores estratégicos que la guerrilla tejió a lo largo de más de una década y que cortó los vasos comunicantes con las principales ciudades del país.

El inicio de la campaña presidencial para el período 2002-2006, creó el ambiente propicio para abrir el debate que permitiera la justificación de una acción radical de cara al fortalecimiento bélico y por una salida militar a la guerra en Colombia.

En el plano externo, un hecho marcó el nuevo rumbo de la política internacional: los ataques del 11 de septiembre a la torres gemelas en Nueva York. Después del ataque a las torres se inició una “alianza internacional” en contra del terrorismo; coyunturalmente, el nuevo “enemigo público” transformó los argumentos de la lucha contrainsurgente, a partir de ese momento las guerrillas pasaron de ser considerados “narcoguerrilleros” a “narcoterroristas”, internacionalizando cada vez más la guerra en Colombia y combinando la política interna con intereses estratégicos para los Estados Unidos.¹⁴³

Finalizando 2001, la situación del proceso de paz no podía ser más crítica. Los medios de comunicación centraron su atención en la turbia situación de orden público generado por las guerrillas de las FARC y el ELN -haciendo sólo comentarios marginales de los ataques paramilitares-, la opinión pública se concentró en este problema, dejando de lado temas tan importantes como el empleo o el desplazamiento forzado.

¹⁴³ Un libro que plasma los argumentos para calificar de terroristas los grupos guerrilleros puede encontrarse en: BOTERO, Reinaldo y otros. Terrorismo y seguridad. Bogotá. Editorial Planeta – Revista Semana. 2003.





En enero de 2002 se dio por terminada la zona de distensión y el ejército emprendió el despliegue hacia la zona de despeje, un cubrimiento completo por lo medios de comunicación hizo pensar que la “toma”, por parte del Ejército, de la zona suroriental del país era un hecho; sin embargo, a los pocos días fue evidente la falta de capacidad militar y la presencia consolidada de las FARC en esta zona. Mientras los enfrentamientos se realizaron en forma más constante, los ataques continuos desde la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se correspondieron con el sentimiento de decepción frente al fallido proceso de paz y el pánico generalizado de gran parte de la población por la situación de orden público, agravado por los medios.

No era de extrañar entonces que la configuración de fuerzas dieran como ganador a la fracción de ultraderecha que durante toda la década del noventa se había consolidado en el país; Álvaro Uribe irrumpió como un “carisma de situación”,¹⁴⁴ “fenómeno que se caracteriza, no por la personalidad del líder propia de los políticos carismáticos de que hablaba Weber, sino por la situación de estrés que hace, en el imaginario colectivo, que determinada propuesta se convierta en la “tabla de salvación” para salir de la situación causante de la angustia general.¹⁴⁵

Las elecciones para la presidencia fueron contundentes. Álvaro Uribe ganó en primera vuelta, el nuevo *bloque en el poder* trajo consigo una propuesta guerrerista, en directa oposición a procesos de paz con las guerrillas, privilegiando el fortalecimiento militar del Estado y el involucramiento de la sociedad civil en el conflicto armado a través de la política de Seguridad Democrática, la creación de una “red de informantes” y el entrenamiento de soldados campesinos.

Asistimos desde entonces -con el ya conocido por todos “proceso de negociación”, con los paramilitares- a una recomposición elitista del poder regional en Colombia. Lo que se está presenciando, en último término, son los poderes regionales imponiéndose al poder nacional, reconfigurando así el poder del Estado. Es la legalización e institucionalización del proyecto paramilitar, de sus capitales y sus formas de control social, político y económico, que va más allá de los personajes mercenarios y mafiosos que sirvieron con sus ejércitos a la expansión. Porque lo que está en juego son estructuras organizativas que se están disputando la distribución del poder político, el poder local y el poder económico legal e ilegal.

Aunque dentro del proyecto paramilitar se pueden detallar casos como el de Medellín, que se corresponde con la figura mafiosa -el caso de alias “Don Berna” es paradigmático-, ello no explica el proyecto paramilitar; eso equivaldría a explicar el todo por la parte. A pesar de que Diego Murillo sea el típico señor de la guerra que logró consolidar para Medellín un poder mafioso, hay casos que resultan mucho más complejos como el de Báez, el de Jorge “Cuarenta” o Salvatore Mancuso, quienes están ligados a las elites políticas y económicas legales, que han logrado presencia institucional, tienen un copamiento de las instituciones del Estado mucho más alto, y un proyecto económico legalizado. En este sentido, el caso de Barrancabermeja apunta en esa dirección.



¹⁴⁴ PANEBIANCO, Angelo. Modelos de Partido. Organización y poder en los partidos políticos. Madrid. Alianza. 1990. Pág.113.

¹⁴⁵ HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra Miled. Los medios de comunicación y la política en Colombia. Estudio de caso. Medellín. Junio de 2002. Mimeo.



En otro nivel mucho más local, están en juego los controles de circuitos económicos ilegales, los cuales, pasarán a resolverse dentro del binomio legal/ilegal; es decir, se convertirán en un asunto criminal que deberá ser tratado por las administraciones locales, las que se verán abocadas -si quieren manejar la situación- a negociar con bandas o a tomar diversas medidas de manejo de orden público. Hoy como ayer, la gran mayoría de los soldados rasos que son desmovilizados, siguen reproduciendo las estructuras ilegales que financian los diferentes ejércitos, o son cooptados por nuevas estructuras criminales; en uno u otro caso, nunca terminan por salir del mercado de la guerra, el cual continúa representando a veces, la única opción real para cientos de jóvenes que se especializaron en el oficio de ser guerreros.

Presenciamos entonces un horizonte bifronte sumamente complejo; una de sus caras, delinea un replanteamiento de los objetivos primigenios de lucha contrainsurgente, -aunque las FARC se encuentran en una fase de repliegue estratégico y organizativo- el objetivo de buena parte del ejército que hoy se desmoviliza, le está apostando como horizonte estratégico, no a ganar la guerra, sino a ganar la política, legalizarse, manteniendo las condiciones de seguridad logradas hasta el momento; hoy no interesa la guerra para este cuerpo paramilitar tradicional, entre otras cosas, porque se dieron cuenta que la guerra no se terminaría con una derrota militar, la cual es imposible, ya que con las guerrillas, especialmente con las FARC, hay que negociar; pero sobre todo, se hizo perentorio entrar en una nueva fase, para legalizar sus capitales, eludir los procesos de extradición de sus comandantes o la acción de la Justicia Penal Internacional. La otra cara nos muestra una reestructuración paramilitar con nuevos actores -muy ligados a la mafias locales- que copan territorios y mantienen el "orden establecido", asegura mercados legales e ilegales y presta seguridad a ese complejo proceso de lavado de activos producto del narcotráfico y re conversión de capitales en diversos proyectos económicos -la palma africana y el sector agroindustrial son una buena muestra de eso-.

La institucionalización del proyecto paramilitar en las bases busca copar los escenarios de poder local, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, organizaciones comunitarias, etc., bien sea a través de la intimidación a los líderes tradicionales, o por medio de la creación de redes clientelares, a través de las cuales, cooptan viejos liderazgos, y/o, creando sus propias organizaciones, ejerciendo un poder gamonal que se va consolidando y tejiendo en una suerte de cadena ascendente hasta llegar a las esferas nacionales. Es importante tener en cuenta en este proceso aquellos inmensos recursos económicos con que cuentan provenientes del lavado de activos y la legalización de los capitales. Esas redes fueron determinantes en las últimas elecciones, porque de ellas no sólo se benefician los líderes paramilitares que aparecen en el escenario político reivindicando su liderazgo de Derecha (o sus representantes), sino también viejos políticos de los partidos tradicionales que no admiten su participación en el proyecto de Derecha pero que se han beneficiado (y los siguen haciendo) de los resultados políticos y económicos de sus acciones.

Esta nueva fase de legalización e institucionalización se da, pasando por encima de los derechos de cientos de colombianos y colombianas que reclaman verdad sobre los crímenes cometidos (que no aceptan la imposición de un orden a sangre y fuego), de los que pretende hoy lavar sus culpas a costa del silencio y el olvido. Una sociedad debe buscar el fortalecimiento de espacios de democratización, ellos sólo son posibles con la construcción de espacios públicos, abiertos al debate y al reconocimiento de las diferencias sin señalamientos.





Es necesario rechazar la guerra que nada construye, pero la paz no puede ser opresiva, ni debe respaldar formas autoritarias del ejercicio del poder. Si en nuestras ciudades los gobernantes muestran orgullosos sus bajas cifras de homicidios, éstas no deben ser el resultado de la eliminación de las diferencias, las libertades y en general de los derechos políticos, económicos y sociales; hoy más que nunca, dados los altos grados de control social, el Estado Social de Derecho debe pasar de ser un ideal a convertirse en un compromiso inaplazable.





BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia. 1997.
- Atlas del Conflicto Armado y la Violencia en Cundinamarca. Instituto de Estudios por la Paz, la Democracia y Convivencia en Colombia. Bogotá. Octubre de 2000.
- BEHAR, Olga. Las guerras de la paz. Bogotá. Planeta. 1987.
- BEJARANO, Ana María. "La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá." En: Análisis Político No 4. Mayo/Agosto de 1988.
- BOTERO, Reinaldo y otros. Terrorismo y seguridad. Bogotá. Editorial Planeta – Revista Semana. 2003.
- CALVO, Fabiola. Colombia: EPL, una historia armada. Madrid. Vosa. 1997.
- CAMACHO GUIZADO, Álvaro. "Narcotráfico, coyuntura y crisis: sugerencias para un debate." En: SANTANA RODRIGUEZ, Pedro (Coordinador). Crisis política impunidad y pobreza en Colombia. Bogotá. Corporación Viva la Ciudadanía. 1997.
- ECHANDÍA, Camilo. "Expansión territorial de las guerrillas colombianas". En: Maria Victoria Llorente. Malcom Deas (comp.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá. CEREC. 1999.
- FRANCO, Vilma Liliana. "El mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente." En: Estudios Políticos N° 21. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Julio-Diciembre de 2002.
- GUERRERO VARÓN, Javier. "La sobre-politización del narcotráfico en Colombia." En: PEÑARANDA, Ricardo. GUERRERO VARÓN, Javier (compiladores) De las armas a la política. Bogotá. Tercer Mundo. 1999.
- HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra Miled. "Como se ven, como los ven, como los leemos... los jóvenes de la Comuna Trece". En: **Jóvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusión**. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Instituto Popular de Capacitación. Asociación de Trabajo. Interdisciplinario ATI. Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes PCUJ. 2005
- Los medios de comunicación y la política en Colombia. Estudio de caso. Medellín. Junio de 2002. Mimeo.
- International Crisis Group ICG. La crisis humanitaria en Colombia. Latin America Report N°4. Bogotá / Bruselas. 2003





International Crisis Group ICG. Negociar con los paramilitares. Latin America Report N°5. Bogotá / Bruselas. 2003

LAIR, Eric. "El terror recurso estratégico de los actores armados: Reflexiones en torno al conflicto colombiano" En: Análisis Político No 37. Mayo-Agosto de 1999.

LARA, Patricia. Siembra vientos y recogerás tempestades. Bogotá. Planeta. 1986.

Corporación Observatorio para la Paz. Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Bogotá. Intermedio Editores. 2002

LEAL BUITRAGO, Francisco. "Alcances y dilemas de la crisis política." En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (edit.) Tras las huellas de la crisis política. Bogotá. Tercer Mundo Editores. FESCOL. IEPRI. 1996.

MARTÍNEZ, Glenda. Salvatore Mancuso, su vida. "Es como su hubiera vivido cien años". Bogotá. Editorial Norma. 2004

MEDINA GALLEGOS, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación: El caso de "Puerto Boyacá." Bogotá. Editorial Documentos Periodísticos. 1990.

MURILLO, Amparo. Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio. Instituto Colombiano de Antropología. Colcultura. PNR. Bogotá. 1993

Noche y Niebla. Caso tipo No 3. Barrancabermeja, la otra versión. Paramilitarismo, control social y desaparición forzada 200-2003. CINEP-CREDHOS.

Noche y Niebla. Comuna 13, la otra versión. Bogotá. CINEP-Justicia y Paz. 2003.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de Barrancabermeja. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2001

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de Cundinamarca. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2003.

PANEBIANCO, Angelo. Modelos de Partido. Organización y poder en los partidos políticos. Madrid. Alianza. 1990.

PABÓN PABÓN, Rosemberg. Así nos tomamos la embajada. Bogotá. Planeta. 1985.

PEÑA, Carina. "La guerrilla resiste muchas miradas. El crecimiento de las FARC en los municipios cercanos a Bogotá: Caso del Frente 22 en Cundinamarca". En: Análisis Político. IEPRI. Universidad Nacional. Bogotá. N° 32. Septiembre/Diciembre. 1997.

PEÑATE, Andrés. "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado." En: Maria Victoria Llorente. Malcom Deas (comp.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá. CEREC. 1999.

QUIÑONES, Adriana. Dimensión Regional de los Paramilitares en Colombia. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá. Marzo de 2000.

REMENTERÍA, Iván de. "Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena Medio". En: SANCHEZ, Gonzalo. PEÑARANDA, Ricardo. Pasado y presente de la violencia en Colombia. CEREC. 2ª edición.

RESTREPO, Andrés. CONTRERAS, Marly. Flor de Abril. La Corriente de Renovación Socialista: De la lucha armada, a la lucha política legal. Bogotá. Corporación Nuevo Arco Iris. 2000.

REYES POSADA, Alejandro. "Paramilitares en Colombia: Contexto, Aliados y Consecuencias". En: SANCHEZ, Gonzalo. PEÑARANDA, Ricardo (Compiladores). Pasado y presente de la violencia en Colombia.

ROMERO, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Bogotá. IEPRI-Editorial Planeta. 2003.





“La política en la paz y la violencia” En: Análisis político No 45.

Enero-Abril de 2002.

SALAZAR, Alonso. No nacimos pa' semilla. Bogotá. CINEP.1989

_____. COSTELO, Paolo. LÓPEZ, Néstor. Memorias de la Historia y el Proceso de paz de las Milicias Populares en Medellín. Manuscrito.

SANCHEZ, Gonzalo. MEERTENS, Donny. Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá. El Áncora Editores. 1983.

SARMIENTO ANZOLA, Libardo. Un modelo de modernización autoritaria en Colombia. CREDHOS. Informe Vol. 1 No.2 Barrancabermeja. 1996.

TOKATLIAN, Juan Gabriel. “Diplomacia coercitiva, narcotráfico y crisis: ¿El deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?” En: LEAL BUITRAGO, Francisco. (edit.) Tras las huellas de la crisis política. Bogotá. Tercer Mundo Editores. FESCOL. IEPRI. 1996.

UMAÑA LUNA, Eduardo. Carta abierta a los firmantes del acuerdo “Puerta del Cielo”. Bogotá. Impresiones Gráficas Punto y Trama. 1998

UPRIMY YEPES, Rodrigo. VARGAS CASTAÑO, Alfredo. La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia. En: PALACIO, Germán (edit.) La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana Bogotá. ILSA-CEREC 1990.

VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. VARGAS VELASQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano. Colonización y Conflicto Armado. Bogotá. CINEP.1992.

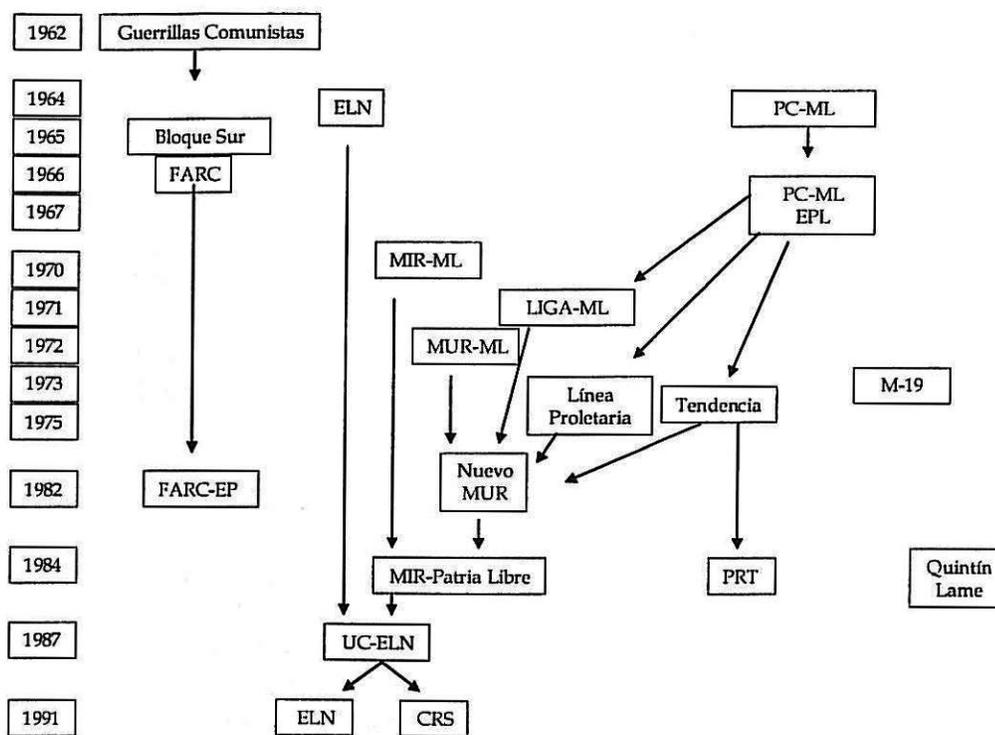
_____. “Los actuales proceso de negociación: entre la inercia y la incertidumbre.” En: CEPEDA, Fernando (edit.). Haciendo paz. Reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia. Cartagena 9-22 de marzo. Bogotá. Fundación Ideas para la Paz. 2001.

ZAMORA, Gloria Lucy. Los moradores de la represión en el Magdalena Medio. Bogotá. CINECP. 1983.





ANEXO



Fuente: HINCAPIÉ JIMÉNEZ, Sandra Miled. "Actores y transformaciones de las dinámicas bélicas y los procesos de paz en Colombia". Instituto de Estudios Regionales INER. Universidad de Antioquia. 2005





Índice general

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPITULO I.....	7
LA DÉCADA DEL NOVENTA: ESCALAMIENTO DE LA GUERRA EN COLOMBIA.....	7
1.CONTEXTO DEL PAÍS.....	7
2. “CASA VERDE” Y EL INICIO DE LA CONSTITUYENTE.....	8
3. CRISIS POLÍTICA Y ESCALAMIENTO CONTINUADO.....	11
3.1. Descertificación y narcotráfico: el imperio ataca.....	13
3.2. El año de 1998, punto de quiebre: declaración de guerra desde El Caguán y transformación paramilitar.....	15
CAPITULO II.....	19
BARRANCABERMEJA.....	19
1.CONTEXTO.....	19
2. LA NUEVA DERECHA: NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARISMO.....	21
2.1. Barrancabermeja, entre el fuego cruzado.....	24
2.2. La consolidación paramilitar.....	27
CAPITULO III.....	31
MEDELLÍN.....	31
1. CONTEXTO.....	31
2. NARCOTRÁFICO Y MILICIAS: EL INICIO DEL FIN.....	32
2.1. Paramilitarismo y lucha contrainsurgente: la guerra en la ciudad.....	34
2.2. El caso paradigmático de la Comuna 13.....	35
2.3. Después de la Comuna 13: poder hegemónico e institucionalización paramilitar.....	37
CAPITULO IV.....	41
BOGOTÁ.....	41
1. CONTEXTO.....	41
1.1. En el Distrito Capital.....	41
1.2.Contexto de la guerra en el Departamento de Cundinamarca.....	42
2. “BLOQUE REPÚBLICA” VS. “BLOQUE CAPITAL”: LA DISPUTA POR EL DOMINIO.....	44





3. DEL PAPEL MILITAR AL CONTROL DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA LOCAL.....	47
CAPÍTULO V.....	51
CALI.....	51
1. CONTEXTO.....	51
2. LA DÉCADA DEL NOVENTA: EL NARCOTRÁFICO Y LA CRISIS POLÍTICA.....	56
3. EL FIN DEL BLOQUE CALIMA: UN NUEVO GRUPO PARAMILITAR EN FORMACIÓN.....	59
CONCLUSIONES GENERALES.....	63
BIBLIOGRAFÍA.....	67
ANEXO.....	71



INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN -IPC

Carrera 45 D N° 60-16
PBX: (574) 284 90 35 / Fax: (574) 254 37 44 / A.A. 9690
Correo electrónico: ipc@ipc.org.co
Página Web: www.ipc.org.co
Medellín - Colombia

